

25ª REUNION — Continuación de la 11ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) —
JULIO 15 DE 1987

Presidencia de los señores diputados Juan Carlos Pugliese
y Jorge Reinaldo Vanossi

Secretarios: doctor Carlos Alberto Bravo y señor Carlos Alberto Béjar

Prosecretarios: señores Hugo Belnicoff y Ramón Eladio Naveiro

DIPUTADOS PRESENTES:

ABDALA, Oscar Tupic
AGUILAR, Ramón Rosa
ALAGIA, Ricardo Alberto
ALBERTI, Lucía Teresa N.
ALBORNOZ, Antonio
ALDERETE, Carlos Alberto
ALENDE, Oscar Eduardo
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALSOGARAY, María Julia
ALTERACH, Miguel Angel
ALLEGREONE de FONTE, Norma
ARABOLAZA, Marcelo Miguel
ARAMBURU, José Pedro
ARRECHEA, Ramón Rosaura
ARSÓN, Héctor Roberto
AUYERO, Carlos
AVALOS, Ignacio Joaquín
AZCONA, Vicente Manuel
BAGLINI, Raúl Eduardo
BAKIRDJIAN, Isidro Roberto
BARBEITO, Juan Carlos
BARRENO, Rómulo Víctor
BELARRINAGA, Juan Bautista
BERNASCONI, Tulio Marón
BERRI, Ricardo Alejandro
BIANCOTTO, Luis Fidel
BIANCHI DE ZIZZIAS, Elia A.
BIELICKI, José
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BLANCO, Jesús Abel
BLANCO, José Celestino
BONINO, Alberto Cecilio
BORDA, Osvaldo
BOTTA, Felipe Esteban
BRIZ de SANCHEZ, Onofre
BRIZUELA, Delfor Augusto
BRIZUELA, Guillermo Ramón
BRUNO, Angel Atilio José
BULACIO, Julio Segundo
CABELLO, Luis Victorino
CACERES, Luis Alberto
CAMISAR, Osvaldo
CANATA, José Domingo
CANGIANO, Augusto

CANTOR, Rubén
CAPUANO, Pedro José
CARDOZO, Ignacio Luis Rubén
CARMONA, Jorge
CARRANZA, Florencio
CARRIZO, Raúl Alfonso Corpus
CASTILLO, Miguel Angel
CASTRO, Juan Bautista
CAVALLARI, Juan José
CAVALLARO, Antonio Gino
CLERICI, Federico
CONNOLLY, Alfredo Jorge
COPELLO, Norberto Luis
CORNAGLIA, Ricardo Jesús
CORTESE, Lorenzo Juan
CORZO, Julio César
COSTANTINI, Primo Antonio
CURATOLO, Atilio Arnold
DALMAU, Héctor Horacio
DAUD, Ricardo
DE LA VEGA de MALVASIO, Lily M. D.
DELFINO, Jorge Raúl
DEL RÍO, Eduardo Alfredo
DE NICHILLO, Cayetano
DÍAZ, Manuel Alberto
DÍAZ de AGÜERO, Dolores
DI CIO, Héctor
DIGÓN, Roberto Secundino
DOMÍNGUEZ FERREYRA, Dardo N.
DOUGLAS RINCÓN, Guillermo F.
DOVENA, Miguel Dante
ENDEIZA, Eduardo A.
ESPINOZA, Nemecio Carlos
FALCIONI de BRAVO, Ivelise I.
FAPPIANO, Oscar Luján
FURQUE, José Alberto
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCÍA, Carlos Euclides
GARCÍA, Roberto Juan
GARGIULO, Lindolfo Mauricio
GAY, Armando Luis
GIMÉNEZ, Jacinto
GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GINZO, Julio José Oscar
GOLPE MONTIEL, Néstor Lino

GÓMEZ MIRANDA, María F.
GONZÁLEZ, Héctor Eduardo
GONZÁLEZ, Joaquín Vicente
GONZÁLEZ CABANAS, Tomás W.
GOROSTEGUI, José Ignacio
GOTI, Erasmo Alfredo
GRIMAU, Arturo Aníbal
GUATTI, Emilio Roberto
GUZMÁN, Horacio
GUZMÁN, María Cristina
HORTA, Jorge Luis
HUARTE, Horacio Hugo
IBÁÑEZ, Diego Sebastián
IGLESIAS VILLAR, Teófilo
INGARAMO, Emilio Felipe
IRIGOYEN, Roberto Osvaldo
JANE, Miguel
JAROSLAVSKY, César
JUEZ PÉREZ, Antonio
LAMBERTO, Oscar Santiago
LAZCOZ, Hernaldo Efraín
LÉPORI, Pedro Antonio
LESCANO, David
LIZURUME, José Luis
LÓPEZ, Santiago Marcelino
LOSADA, Mario Aníbal
LUGONES, Horacio Eneio
LLORENS, Roberto
MACEDO de GÓMEZ, Blanca A.
MAC KARTHY, César
MANZANO, José Luis
MARINI, Norberto Enrique
MARTÍNEZ MARQUEZ, Miguel J.
MASINI, Héctor Raúl
MATZKIN, Jorge Rubén
MAYA, Héctor María
MEDINA, Alberto Fernando
MELÓN, Alberto Santos
MILANO, Raúl Mario
MIRANDA, Julio Antonio
MONSERRAT, Miguel Pedro
MOTHE, Félix Justiniano
MULQUI, Hugo Gustavo
NATALE, Alberto A.
NEGRI, Arturo Jesús

NIEVA, Próspero
 ORTIZ, Pedro Carlos
 PAPAGNO, Rogelio
 PARENTE, Adolfo Miguel
 PATIÑO, Artemio Agustín
 PELÁEZ, Anselmo Vicente
 PELLIN, Osvaldo Francisco
 PEPE, Lorenzo Antonio
 PERA OCAMIO, Tomás Carlos
 PEREYRA, Pedro Armando
 PÉREZ, René
 PIERRI, Alberto Reinaldo
 PIUCILL, Hugo Diógenes
 POSSE, Osvaldo Hugo
 PUEBLA, Ariel
 PUGLIESE, Juan Carlos
 PUPILLO, Liborio
 PURITA, Domingo
 RAMOS, Daniel Omar
 RAPACINI, Rubén Abel
 RATKOVIC, Milivoj
 RAUBER, Cleto
 REALI, Raúl
 REYNOSO, Adolfo
 REZEK, Rodolfo Antonio
 RIGATUSO, Tránsito
 RODRÍGUEZ, Jesús
 RODRÍGUEZ, José
 RODRÍGUEZ ARTUSI, José Luis
 ROJAS, Ricardo
 ROMANO NORRI, Julio César A.
 SALTO, Roberto Juan
 SARQUIS, Guillermo Carlos
 SELLA, Orlando Enrique
 SERRALTA, Miguel Jorge
 SILVA, Carlos Oscar
 SILVA, Roberto Pascual
 SOCCHI, Hugo Alberto
 SORIA AACH, José María
 SPINA, Carlos Guido
 STATALE, Juan Carlos
 STOLKINER, Jorge
 STORANI, Conrado Hugo
 STUBBIN, Marcelo
 SUÁREZ, Lionel Armando

TELLO ROSAS, Guillermo Enrique
 TERRILE, Ricardo Alejandro
 TCMA, Miguel Ángel
 TORRES, Manuel
 USIN, Domingo Segundo
 VAIRETTI, Cristóbal Carlos
 VANOLI, Enrique Néstor
 VANOSI, Jorge Reinaldo
 VIDAL, Carlos Alfredo
 YUNES, Jorge Omar
 ZAFFORE, Carlos Alberto
 ZAVALLEY, Jorge Hernán
 ZUBIRI, Balbino Pedro

AUSENTES, EN MISION OFICIAL:

CASTIELLA, Juan Carlos
 ELIZALDE, Juan Francisco C.
 TRIACA, Alberto Jorge

AUSENTES, CON LICENCIA:

ALTAMIRANO, Amado Héctor H.¹
 AUSTERLITZ, Federico¹
 BERCOVICH RODRIGUEZ, Raúl¹
 BONIFASI, Antonio Luis¹
 BORDÓN GONZÁLEZ, José O.¹
 BRIZUELA, Juan Arnaldo¹
 CARIGNANO, Raúl Eduardo¹
 CONTRERAS GÓMEZ, Carlos A.¹
 DE LA SOTA, José Manuel¹
 DIMASI, Julio Leonardo¹
 DRUETTA, Raúl Augusto¹
 FERRÉ, Carlos Eduardo¹
 GAZIANO, Rubén Alberto¹
 GERARDUZZI, Mario Alberto¹
 GIACOSA, Luis Rodolfo¹
 GONZÁLEZ, Alberto Ignacio¹
 GROSSO, Carlos Alfredo¹
 GUELAR, Diego Ramiro¹
 IGLESIAS, Herminio¹
 LEMA MACHADO, Jorge¹
 LESTELLE, Eugenio Alberto¹
 MACAYA, Luis María¹

MAGLIETTI, Alberto Ramón
 MANZUR, Alejandro¹
 MARTÍNEZ, Luis Alberto¹
 MASSEI, Oscar Ermelindo¹
 MOREAU, Leopoldo Raúl¹
 MOREYRA, Omar Demetrio¹
 PÉREZ VIDAL, Alfredo¹
 PERL, Néstor¹
 PRONE, Alberto Josué¹
 RÍQUEZ, Félix¹
 RIUTORT de FLORES, Olga E.¹
 RODRIGO, Juan¹
 SAMMARTINO, Roberto Edmundo¹
 SOLARI BALLESTEROS, Alejandro¹
 SRUR, Miguel Antonio¹
 TROPESAGASTI, Adolfo¹
 ULLOA, Roberto Augusto¹
 ZINGALE, Felipe¹
 ZOCCOLA, Eleo Pablo¹

AUSENTES, CON AVISO:

ABDALA, Luis Oscar
 BELLO, Carlos
 BIANCHI, Carlos Humberto
 CAFERRI, Oscar Néstor
 CAFIERO, Antonio Francisco
 COLLANTES, Genaro Aurelio
 DUSSOL, Ramón Adolfo
 FINO, Torcuato Enrique
 FLORES, Aníbal Eulogio
 LEJICINA, Luis Ascensión
 MASSACcesi, Horacio
 PEDRINI, Adam
 RABANAQUE, Raúl Octavio
 SABADINI, José Luis
 SÁNCHEZ TORANZO, Nicasio
 STORANI, Federico Teobaldo M.
 TORRES, Carlos Martín
 VACA, Eduardo Pedro

¹ Solicitud pendiente de aprobación de la Honorable Cámara.

SUMARIO

1. Continúa la consideración del dictamen de la Comisión Especial de Unificación Legislativa Civil y Comercial mediante el que se aconseja la sanción de un proyecto de ley de unificación de la legislación civil y comercial de la Nación (221-D.-87). Se sanciona con modificaciones. (Pág. 2529.)
2. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Cabello con motivo de informaciones contenidas en una publicación periodística (1.095-D.-87). Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. 2541.)
3. Consideración del dictamen de las comisiones de Comercio, de Industria, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de los señores diputados Socchi y José Rodríguez por el que se establece un régimen especial para favorecer la adquisición de vehículos cero kilómetro con destino al servicio público de taxímetros (389-D.-87). Se sanciona con modificaciones. (Pág. 2543.)
4. Consideración del dictamen de las comisiones de Transportes —especializada— y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica el artículo 1º del decreto ley 505/58, estableciéndose la sede de la Dirección Nacional de Vialidad en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa (3-S.-87). Se sanciona definitivamente (ley 23.527). (Pág. 2545.)
5. Moción de orden del señor diputado Matzkin de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a efectos de formular proposiciones con referencia a un proyecto de declaración del señor diputado Daud y otros por el que se solicita al Poder Ejecutivo que al integrar la comisión especial prevista en el artículo 2º de la ley que dispone el traslado de la Dirección Nacional de Vialidad a la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, dé participación a sus agentes por intermedio de las organizaciones sindicales representativas, y se contemple lo dispuesto en el artículo 9º de la ley 23.512 (1.109-D.-87). Se aprueba. (Pág. 2554.)
6. Mociones del señor diputado Matzkin de que se dé entrada al proyecto de declaración al que se refiere el número 5 de este sumario, y de que se trate sobre tablas dicho proyecto. Se aprueban ambas proposiciones. (Pág. 2554.)

7. **Consideración del proyecto de declaración al que se refieren los números 5 y 6 de este sumario. Se sanciona.** (Pág. 2554.)

8. **Moción de orden del señor diputado Manzano de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a efectos de dar entrada al proyecto de resolución del que es coautor por el que se expresa insatisfacción por las explicaciones ofrecidas por el señor ministro del Interior y el señor secretario de Inteligencia del Estado en la sesión del día 7 de julio de 1987, y se solicitan diversas medidas con relación a las áreas de competencia de ese ministerio y esa secretaría (1.107-D.-87). Es rechazada.** (Pág. 2554.)

9. **Apéndice:**

A. **Sanciones de la Honorable Cámara.** (Pág. 2557.)

B. **Asuntos entrados:**

Proyecto de declaración del señor diputado Daud y otros: solicitud al Poder Ejecutivo para que al integrar la comisión especial prevista en el artículo 29 de la ley que dispone el traslado de la Dirección Nacional de Vialidad a la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, dé participación a sus agentes por intermedio de las organizaciones sindicales representativas y contemple lo dispuesto en el artículo 99 de la ley 23.512 (1.109-D.-87). (Pág. 2598.)

C. **Inserciones.** (Pág. 2598.)

—En Buenos Aires a los quince días del mes de julio de 1987, a la hora 14 y 58:

I

UNIFICACION DE LA LEGISLACION CIVIL Y COMERCIAL

Sr. Presidente (Pugliese). — Continúa la sesión. Prosigue la consideración en general del dictamen de la Comisión Especial de Unificación Legislativa Civil y Comercial mediante el que se aconseja la sanción de un proyecto de ley de unificación de la legislación civil y comercial de la Nación¹.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Fappiano. — Señor presidente: decía ayer que en la sesión anterior en que se consideró este mismo tema se habían fijado valiosos criterios sobre el asunto en debate. Se mencionaron sus antecedentes, poniéndose en evidencia la necesidad de la reforma que la Comisión Especial aconseja en su dictamen.

Interesa tener presente que también se han escuchado algunas voces que califican adversamente la unificación; pero es importante señalar que las disidencias no se refieren a la sustancia de dicha unificación sino específicamente a ciertas modalidades y determinadas soluciones que se adoptan para efectivizarla. Esto significa que aquí no se discute la conveniencia de la unificación, pues ello implicaría reconsiderar lo resuelto por este honorable cuerpo al decidir poner en funcionamiento la Comisión Especial, sino algún aspecto reglamentario sobre la naturaleza del despacho que ella elaborara. Asimismo, en la materia concreta de su contenido, se discuten cuestiones que conciernen a la metodología que el citado despacho informa.

El sentido jurídico del tema —de indudable resonancia— puede hacer suponer que los planteos aludidos asumen naturaleza académica o científica; esto es que el ámbito para su tratamiento no sería este recinto, de esencia naturalmente política. Sin embargo, no hay duda de que detrás y delante de los problemas aparentemente formales existen formulaciones que se apoyan en las diversas ideologías y hasta en los distintos matices de tales ideologías que se manifiestan en esta Honorable Cámara. Así puede reconocerse que las instituciones básicas de la legislación civil, y también de la subsistente legislación comercial, no son meras expresiones de técnica legislativa sino manifestaciones en el derecho positivo de las ideas y las doctrinas que se siguen en el más trascendente campo de la filosofía política.

Luego, no puede extrañarnos que los más conspicuos exponentes de las corrientes impregnadas del acento que dominaba la vida de las sociedades del siglo pasado pretendan señalar que los avances de la iniciativa constituyen apartamientos de lo esencial de esas corrientes. Tampoco puede extrañarnos que calificados expositores del pensamiento que se nutre en las raíces de formulaciones diametralmente opuestas a esos signos del pasado se resistan a aceptar la conceptualización justa y equilibrada que armoniosamente contempla la propuesta traída a votación por la Comisión Especial.

Voy a centrar mi participación en los lineamientos esenciales que se refieren a los criterios que hemos sustentado al formar parte del grupo redactor. Con ese alcance, me permito anticipar mis coincidencias con quienes han advertido lúcidamente que lo proyectado recoge los frutos de la experiencia y de las recomendaciones más autorizadas acerca del tema. Obviamente, ello no desecha cualquier tipo de su-

¹ Véase el texto del dictamen en el Diario de Sesiones del 25 de junio de 1987. (Pág. 2110.)

gerencia que, encuadrada en ese enfoque sustancial, suponga precisar las formas o pulir la redacción, pese a los cuidados que en ambos aspectos puso la comisión.

No olvidemos que toda innovación relevante requiere aportes múltiples y promueve inquietudes o recelos cuya justificación deviene de las líneas directrices en que se apoya cada uno; sugerencias y recomendaciones que hemos recogido en el curso de estos últimos días y que han sido merecedoras del trabajo de la comisión, cuyo fruto puede verse en los distintos anexos al Orden del Día N° 1.064. Quien no se pudo acercar a esta Comisión Especial para proponer reformas u otro tipo de inquietudes, no podrá argumentar que se debió a falta de voluntad para recabar ideas o propuestas de los señores diputados.

Todo ello me lleva a concordar mi conceptualización del tema con sus antecedentes en los congresos, conferencias y reuniones, que han sido recordadas en sus distintas exposiciones por los señores diputados preopinantes. Hemos tenido en cuenta también la importante labor intelectual materializada en sanciones legislativas de otros países, que ofrecen la interesante perspectiva de aparecer indistintamente en algunos de alto nivel de desarrollo como en otros de bajo nivel, lo que también puede observarse en naciones con sistemas sociales y económicos totalmente opuestos.

Desde ese panorama —y obviamente, con las reservas que nos sugiere la autorizada admisión de las enmiendas—, apoyo la iniciativa en debate, por cuanto satisface la preocupación a que hemos aludido y responde a los propósitos y objetivos que en la materia pueden alcanzarse por ahora, constreñidos como estamos por la subsistencia de un ordenamiento institucional impregnado de las filosofías de su tiempo, que como es sabido mereciera en su momento el tratamiento que el justicialismo puso en práctica al reformar la Constitución en 1949.

Este enfoque, que no nace de objetivo proselitista alguno, pero que pretende rescatar con la debida prudencia propia de su significado político el hondo sentido transformador que nos animó en la construcción de las estructuras que se concretan en el proyecto, asume en plenitud la responsabilidad de compartir las comunes esperanzas de posibilitar en breve la superación de los escollos que opone el marco institucional aún vigente, no obstante la presencia de una realidad social y económica distinta a la de su tiempo histórico.

Como no es mi intención incursionar en consideraciones que pueden parcializar el análisis, ni

desde luego apoderarnos de los resultados de la sana convivencia que ha caracterizado la tarea de la comisión, resumiré a continuación los conceptos principales que definen mi posición sobre la materia que constituye el basamento del proyecto.

Empiezo por recordar que ya antes de la inauguración de la etapa histórica que cambió la fisonomía antigua que ofrecía el país, quien apareciera en el plano distinguido como el mentor intelectual de aquella recordada reforma constitucional de 1949 —me refiero al eminente doctor Arturo Sampay— nos había esclarecido con autorizada y elocuente pluma sobre la crisis en que se debatía la cosmovisión de un sistema ideológico y filosófico que se resistía a ceder ante la presencia de nuevas formulaciones más armónicas con el concreto mundo de las formas sociales y económicas determinadas por la decadencia de su ámbito real.

Es así que una de las más preclaras figuras de la reconstrucción de la ciencia política en nuestro país definió ya en el año 1942 cuanto una década después difundiera para la opinión pública generalizada al interesarse por los temas que había informado sabiamente en la Convención Constituyente de 1949.

En efecto, como sazonado fruto de una profunda, meditada y reflexiva investigación sociológica, en función de un prístino concepto de argentinidad, aquel profético trabajo de Sampay que anunciara la por él bien definida crisis del llamado Estado de derecho liberal burgués, nos instala en las contradicciones y en las irrealidades de una circunstancia que pretende cristalizar la vida política y su conformación jurídica so pretexto de la necesidad de la persistencia de valores ínsitos a la libertad aunque negados por su deformación: el liberalismo. Tanto es así que de esta forma o tipo de Estado surge la atroz perspectiva de la absorción totalitaria del hombre.

Por eso, en la aportación que hicimos al esfuerzo de la Comisión Especial nos ha inspirado la prudente conceptualización que daría origen a la ciencia política y apreciaría la personalidad ontológica de la teoría del Estado en un contexto afirmativo de cambios sustantivos en la caduca concepción del siglo XIX.

Por eso en la aportación que hicimos al es-
¿Tiene explicación, entonces, por qué nos hemos sentido movidos a introducir las modificaciones requeridas por el momento histórico que vivimos en la estructura de nuestro derecho privado? Es que, desde toda evidencia, el agotamiento de un sistema determinante del encuadre filosófico de la vieja codificación del derecho

civil y comercial ha sido un lento pero no detenido proceso. Más aún, también en la erudita formulación de Sampay advertimos cómo ni siquiera con el fortalecimiento de las funciones del órgano ejecutivo del Estado, procurado por el constitucionalismo que siguió a la Primera Guerra Mundial, pudo soslayarse el problema.

Juicios apodícticos vertidos desde entonces pueden desvirtuar la verdad que reclama la democratización auténtica del proceso económico y el mejoramiento de las relaciones regidas por la legislación civil, democratización del derecho que ya reclamaba Georges Ripart. Pero esos juicios no pueden evitar que nos sintamos firmemente convencidos de que la propuesta promueve impulsos adecuados para que, incluso en el viejo clima de la Constitución de 1853, podamos acercarnos a una realidad socioeconómica que ya no se ciñe a las formas de aquel tiempo.

En ocasión de informar el doctor Héctor Masnatta el despacho de la comisión del III Congreso Nacional de Derecho Civil, realizado en Córdoba en 1961, sobre unificación de las obligaciones civiles y comerciales, manifestó que la unidad legislativa en ese campo era aconsejable. Dicha unidad había sido suficientemente considerada desde la célebre "prolusión" derivante al curso de la Universidad de Bolonia —1892—, siendo ilustrativo el trabajo de Enrique V. Galli publicado en la "Revista Jurídica de Córdoba" sobre las conferencias panamericanas de Lima y las conferencias interamericanas de Río de Janeiro, México, Santiago y Lima.

Las conclusiones del I Congreso Nacional de Derecho Comercial, la VI Conferencia Nacional de Abogados y el mentado III Congreso Nacional de Derecho Civil, ilustran suficientemente sobre los antecedentes doctrinarios y científicos que abonan el criterio de la unificación en esa materia. Esta tiene materialización dogmática en la legislación comparada, con la sanción del Libro V del Código Civil suizo, el Código Civil italiano de 1942 y el Código Civil de la República Federativa Socialista Rusa, adoptado en las demás repúblicas de la Unión Soviética.

Esta orientación se sigue también en los derechos de Turquía y Polonia, pudiendo destacarse que en los países del *common law*, con gran desarrollo comercial, se desconoce la escisión entre las ramas civil y comercial.

De esta idea participa Arturo Sampay. En su comentario a la obra de Peirano Facio sobre responsabilidad extracontractual, que publicara en un diario de Montevideo, sostenía que al derecho civil debían incorporársele los ejercicios privados comerciales e incluso los laborales.

En tal sentido afirmaba que la acepción "derecho civil" fue impuesta por el jurista francés Jean Domat en el siglo XVIII y que con anterioridad a esa fecha y a partir de Roma la locución tuvo siempre el significado de derecho positivo estatal, de *ius*, sancionado por la *civitas*.

Pero el propósito concretado en el proyecto va más allá de la unificación a que hacíamos referencia. Se trata de una verdadera reforma del derecho privado, que apareja una profunda conmoción en las instituciones jurídicas consideradas.

Dado que se ha puesto en tela de juicio la constitucionalidad de esta unificación, cabe destacar que, en su recordada intervención en el congreso de Córdoba, el doctor Masnatta señaló que el artículo 67, inciso 11 de la Constitución Nacional, no impone dogmáticamente la legislación en códigos independientes para las relaciones de derecho privado, sino que sólo distribuye la competencia para hacerlo, por lo cual el argumento gramatical que se ha querido traer a colación no resulta fundado.

Así también lo reconoce el doctor Bidart Campos en un artículo publicado en "La Nación" el 24 de junio de este año, en el que destaca que siempre que haya una normativa propia del derecho comercial, queda satisfecho el recaudo establecido por la Ley Fundamental, aunque la legislación no revista la formalidad de un código.

No voy a hacer aquí un análisis pormenorizado de todas y cada una de las soluciones que aportamos en esta reforma, sino que me limitaré a explicitar lo que considero son sus aspectos más destacados.

El Código Civil, señalaba Sampay, debe fijar la clave hermenéutica para su interpretación y aplicación. Entiendo que ella se encuentra principalmente vertida en las previsiones de los artículos 16, 1.157, 1.158 y 1.197. Con las adiciones incorporadas en los artículos 624 y 1.071 vamos en camino de la adopción del criterio de usura real, que abarca no ya el contrato de mutuo solamente, sino toda convención sinalagmática. Con este último precepto y con la acción ecológica marchamos a robustecer los criterios objetivos del abuso del derecho, pues no es lícito dañar a la comunidad haciendo jugar el derecho subjetivo en contra del fin social para el que ha sido reconocido.

También se acentúa la tutela de la persona física con mayor rigor que la jurídica, lo cual puede advertirse en la regulación del contrato de fianza —artículos 1.993, 1.999 y 2.290 *in fine*—,

en los contratos predispuestos y en la incorporación de la defensa del consumidor —artículo 2.176—.

A su turno, el derecho de superficie abre campos insospechados a la imaginación creadora de los argentinos en sus relaciones jurídicas futuras, al igual que la ampliación del tiempo o término de la locación, que se eleva a cincuenta años. ¡Y qué decir acerca de los usos y costumbres para las formas no típicas de convenciones!

Entonces, no hay duda de que es acertado cuanto hemos acordado en la iniciativa propuesta. Lo creemos sociológicamente vital para el funcionamiento pleno de las instituciones civiles y comerciales. Es decir, más allá de su propia concepción normativa, advertimos en el trabajo que estamos apoyando un hito relevante para la definitiva inserción en nuestro país de regulaciones jurídicas apropiadas a los requerimientos que surgen de esas relaciones globales en nuestra sociedad.

Argumentar sobre esta realidad es tarea sencilla, y lo es en tanto el sendero por el cual avanza el concepto ha sido recorrido con brillantez en enjundiosas piezas surgidas de autores que ya han sido nombrados en este debate. En cambio, es importante retomar el pensamiento de Sampay, no sólo por su envergadura y calidad, sino también por su vigencia y actualidad.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Jorge Reinaldo Vanossi.

Sr. Fappiano.— En *Los principios constitucionales de un nuevo código civil argentino*, Sampay explica el criterio revolucionario que asume el cambio de sentido en las instituciones jurídicas, desarrollando aún más las ideas que había expuesto anteriormente acerca de la concepción individualista en que se asienta el Código Civil de Vélez Sársfield. Por su importancia, pido la inserción en el Diario de Sesiones de este trabajo aparecido en la segunda sección del diario "La Prensa" del 24 de febrero de 1952. Cuanto diré a continuación justificará la razón de mi pedido.

Cabe definir al derecho civil —señalaba Sampay— como la parte de la ciencia jurídica que trata de las relaciones interpersonales que tienen por objeto a los bienes exteriores del hombre, susceptibles de su apropiación, y a los bienes humanos inmanentes que, bajo algún aspecto o incidencia, resultan económicamente valiables en el comercio social.

Bien aprehendido en su esencia, un código civil —agregaba Sampay— es el sistema de con-

ducta que el Estado impone coercitivamente en las relaciones que traban los hombres y las asociaciones, teniendo por objeto los bienes que el hombre necesita para vivir y el trabajo humano en cuanto produce esos bienes. Asimismo, aquí se incluye el uso que, con relación al resto de los miembros de la comunidad, el poseedor hace de sus bienes. Legisla, además, sobre la organización de la familia, sobre el patrimonio familiar que la sustenta y sobre la transmisión de ese patrimonio a los sucesores familiares.

La concepción que se tenga del hombre —añadía Sampay— animará el contexto del código civil. De allí que ese cuerpo normativo debe responder a una filosofía, de la que depende su unidad y su comprensión.

El sustrato filosófico del individualismo jurídico consistía en considerar la libertad como bien supremo y al hombre como un ser acabado en sí mismo, idealmente aislado en su egoísmo, que le daba derechos sin obligaciones sociales, e igual, en abstracto, a todos sus prójimos. De allí que todo el derecho privado se redujera a una técnica para garantizar el ejercicio ilimitado del derecho de propiedad y de la llamada autonomía de la voluntad para celebrar contratos, para cuya justicia y legitimidad moral bastaba el hecho de que no fuera un niño o un loco quien prestara el consentimiento.

Esta libertad contractual atribuida a pares de hombres a los cuales se concebía tan idénticos entre sí como un individuo y su imagen reflejada en un espejo, y la correspondiente interdicción del Estado para intervenir en las relaciones privadas, pondría en movimiento una armonía natural preestablecida y de ella surgiría, sin más, una sociedad justa.

Por lo tanto, se ignoraba al hombre real, vale decir, no sólo al obrero y al labriego aislados, que por su debilidad están sometidos al empresario, al patrón o al terrateniente, sino también a quienquiera fuera el explotado por otro en virtud de una superioridad de cualquier índole. En esto radicó la utopía liberal de los siglos XVIII y XIX, que engendró la realidad del capitalismo, o sea, la explotación de la mayor parte de los hombres por unos pocos económicamente prepotentes.

El Código Civil que nos rige se inspiró, precisamente, en esa concepción individualista, y de ese modo dio vigencia efectiva a las ideas liberal-burguesas de la Constitución Nacional de 1853.

No podía menos que ocurrir así, pues aparte de que, desde el punto de vista jurídico, el Código Civil debe someterse a la Constitución, fue redactado en el clima ideológico del Código de

Napoleón, que se animó en los principios económicos y político-jurídicos de la Revolución Francesa, pues, como decía Sampay: "Es difícil dejar de aspirar errores cuando ellos constituyen la atmósfera histórica de una época".

Sampay encontraba lógico que los hombres que tuvieron a su cargo la organización del país hubiesen acogido esas ideas, triunfantes por aquel entonces entre las diversas corrientes filosóficas que dieron sus aportes a nuestra cultura; pero, como él decía, "quienes hoy defienden esos principios no lo hacen ya con la credulidad ingenua de los enciclopedistas y los fisiócratas de tiempos pasados sino que, como están a la vista los indicados frutos de esa fantasía, sólo defienden los intereses crecidos a su nombre".

Las reformas que ahora proponemos representan un aporte tendiente a poner un cierto valladar al "hábito liberal" —según el decir de Juan Carlos Rébora— con que se viste la Constitución Nacional, "imbuida de liberalismo", como lo reconoce también este autor, y dan satisfacción a las exigencias sociales de nuestro tiempo.

Va de suyo, entonces, que hasta tanto tengamos una nueva Constitución con otro "enfoque metafísico", para decirlo con las palabras de Cassiello, con otra filosofía del hombre, con otra antropología filosófica, no podremos avanzar más en la reforma, porque si lo hiciéramos correríamos el riesgo de que sea tachada de inconstitucional, tal como aconteció en el pasado con el instituto de la lesión, por ejemplo, que se quiso incorporar en el proyecto de Bibiloni, o con la ley de propiedad horizontal, que si no hubiese sido por la reforma del 49 también habría sido tachada de inconstitucional.

Ocurre que al ser el individualismo la filosofía de la Constitución Nacional y al estar en ese individualismo su característica más esencial, en tanto no sea modificado constitucionalmente ha de ser cartabón obligado para la interpretación de la Ley Suprema argentina, según lo enseña Luis Longhi.

Para finalizar, recojo las palabras de un político latinoamericano que recuerdo desde mis épocas de estudiante: "Nunca como ahora el hombre, pese a su desigual desarrollo, sintió estar hecho a imagen y semejanza de Dios. El desarrollo de su creatividad y la utilización de su imaginación le han permitido ejercer un señorío de bastante suficiencia sobre el mundo. Pero tampoco como en la actualidad el hombre y las comunidades habían tenido la convicción de una interacción y, por ende, de una interinfluencia tan patente, ubicua y multiforme.

"Cada uno de nosotros es por sí solo, pero no puede ser sin el otro. El *alter* se encarga de corregir los excesos o los abusos del *ego*, y eso nos conduce inevitablemente hacia la búsqueda de la compañía, en camino hacia la solidaridad, es decir, la compañía unánime, la complementación necesaria, el entendimiento integral, la comprensión global.

"Deseamos compatibilizar con esta reforma los datos de la realidad y los anhelos del espíritu para beneficio de todos y establecer el soñado equilibrio entre el ser y el querer en el orden de las realizaciones y entre el ser y el deber ser en el orden cualitativo y ético de nuestro comportamiento". (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Vanossi). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. García (C. E.). — Señor presidente: he escuchado con atención el brillante discurso de carácter filosófico vertido por el señor diputado Fappiano, pero se me presenta una enorme inquietud. Por falta de tiempo no he podido conocer y estudiar en profundidad las modificaciones que estamos introduciendo en el Código Civil.

Para nosotros, los abogados, el Código Civil es como nuestra Constitución, y no había concluido de hacer un breve análisis del proyecto cuando ayer se nos hizo llegar a las bancas nuevas modificaciones. Así, por ejemplo, la mayoría de edad se adquiriría a los 18 años en vez de a los 21. ¿Y querían aprobar las modificaciones a libro cerrado?

Sé del trabajo de quienes han tenido a su cargo la tarea de elaborar este proyecto de ley, pero me precio de ser abogado y teniendo en cuenta que utilizo el Código Civil a diario, no puedo aceptar una modificación tan fundamental a una legislación de fondo como es la civil, sin conocer en profundidad las reformas.

En este último aspecto, hago saber a mis colegas de Santiago del Estero que el Colegio de Abogados de la provincia ha solicitado una reunión para el día viernes próximo —que he postergado para el día lunes— a fin de que los ilustremos sobre la nueva ley de matrimonio civil en cuya redacción hemos participado. Creo que esa tarea podemos encararla. Pero, ¿qué ocurrirá si la próxima semana nos piden que los ilustremos sobre las reformas introducidas al Código Civil?

Si tuviera que rendir un examen en la facultad, me expondría a que me calificaran con un reglamentario cero, o con tres ceros sucesivos, con lo cual me suspenderían un año. Entonces, me pregunto: ¿cómo voy a explicar,

siendo integrante de la Comisión de Legislación General y abogado, que no conozco las modificaciones introducidas al Código Civil? Formulo la advertencia a mis colegas Manuel Díaz y Lionel Suárez, porque es posible que eso ocurra la próxima semana.

Todo esto me lleva a plantear un interrogante: ¿es lógico que algo tan esencial para la vida del ciudadano —no sólo del abogado— como es el Código Civil, sea modificado y aprobado sin que se conozcan algunas cuestiones? Al respecto he encontrado dentro de la norma algunas cosas sueltas que quisiera mencionar.

Por ejemplo, el artículo 1113 dice lo siguiente: "Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable". ¿Cómo juega el tercero en esta disposición? ¿Cuál es la voluntad expresa o presunta del dueño y de quien usa la cosa como para que el tercero quede en situación de no poder cobrar su crédito? ¿Cuál es la explicación? Yo no la conozco, señor presidente.

También el proyecto se refiere al instrumento particular. ¿Qué valor jurídico tiene un instrumento particular que no lleva firma y no es público? ¿Es éste un concepto teórico? Si la respuesta es afirmativa, debo apuntar que el derecho no es teoría sino que se basa en lo fáctico, y esencialmente en la realidad de los hechos. ¿Cómo va a jugar un instrumento particular que carece de valor?

Al estudiar la iniciativa encontré estos temas que he mencionado y algunos otros más, pero cuando estaba abocado a esa tarea me sorprendió el hecho de que se han introducido algunas modificaciones. Ello prueba que los integrantes de la Comisión Especial han detectado algunas fallas. Si ellos, que han estado analizando la norma, han encontrado ciertos defectos, ¿qué no hallaremos nosotros que no la hemos estudiado tanto?

Se ha manifestado que grandes juristas y estudiosos del derecho han intervenido en la elaboración de este proyecto. Yo los respeto, pero quien ejerce la representación y la responsabilidad popular como legislador soy yo y no mi asesor o los de la Comisión Especial. Yo soy quien debe responder, y por eso expreso que no puedo votar esta iniciativa a libro cerrado.

Como integrante de la Comisión de Legislación General tengo conocimiento de que este proyecto fue remitido para su consideración a una comisión especial, pero no volvió a la Comisión de Legislación General para que se estudiara en forma concienzuda lo que se había hecho.

Recientemente, en Santiago del Estero, un muchacho radical, un muy buen muchacho, me vino a ofrecer el Código Civil modificado. Muy sorprendido yo le pregunté de qué país era, y él me respondió que era del nuestro. Es decir que ya están vendiendo el Código Civil modificado. Ante ese hecho yo pregunto quién responde por esta obra. ¿Cómo es posible que ya se esté vendiendo el Código Civil modificado cuando todavía no ha sido sancionado el proyecto de ley? Aunque lo cierto es que era bastante barato, pues la obra que me ofrecieron costaba 50 australes. ¿Qué ocurrirá ahora con las dos editoriales que la han publicado teniendo en cuenta que se han introducido algunas enmiendas? ¿Es tanta la impunidad con que se trabajó y es tanta la certeza que tenía la comisión especializada de que su obra pasaría por sobre la opinión de quienes representamos al pueblo y estamos obligados a conocer y estudiar lo que sancionamos?

A continuación voy a explicitar algunas observaciones referidas al articulado de esta norma, pero deseo dejar sentada esta inquietud señalando que votaré negativamente el proyecto que estamos considerando. Debo aclarar al respecto que no estoy en contra de que los códigos sean modificados, porque es bien sabido que ninguna ley es para siempre; al contrario, cualquier normativa puede ser objeto de modificación de acuerdo con las circunstancias que se viven.

Sin embargo, a estar por lo que ha ocurrido en las últimas reuniones que ha celebrado la Honorable Cámara, se ha pretendido que este proyecto sea aprobado a rajatabla. Respeto el trabajo realizado por hombres cuya capacidad profesional no desconozco, pero en mi calidad de diputado de la Nación no puedo aprobar un dictamen que no he estudiado y que no he analizado de acuerdo con la importancia del caso.

Sr. Presidente (Vanossi). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. González Cabañas. — Señor presidente, señores diputados: como presidente de la comisión de Legislación General —comisión de la que ha surgido la idea estratégica de unificar la legislación civil y comercial— me veo en la obligación de hacer algunas consideraciones con respecto a la metodología de trabajo utilizada para arribar luego al dictamen que hoy consideramos.

En la comisión mencionada, por la importancia no sólo jurídica sino también social del tema que debía abordar, se decidió adoptar como sistema de trabajo el mismo que se puso en práctica cuando se trató la cuestión relativa al

divorcio. O sea que se designó una subcomisión especial en la cual podían participar los señores legisladores que quisieran hacerlo con sus aportes valiosos en estos asuntos jurídicos.

Por ejemplo, cuando se trató el tema del divorcio la subcomisión respectiva elaboró un anteproyecto junto con la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad.

En el caso que nos ocupa la subcomisión encargada de recoger las distintas opiniones de distinguidos juristas estuvo a cargo del señor diputado Camisar. De esta manera, creo contestar a mi distinguido y estimado colega el señor diputado Carlos García.

Sr. García (C. E.). — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. González Cabañas. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Vanossi). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. García (C. E.). — Señor presidente: sé perfectamente que cuando se trató el tema vinculado con el divorcio se designó una subcomisión. Pero, ¿qué ocurrió después? Parece que el señor diputado González Cabañas se olvidó de dar la explicación respectiva.

Una vez que la subcomisión encargada de estudiar lo relativo al divorcio elaboró el anteproyecto correspondiente, éste fue debatido en la Comisión de Legislación General. Sin embargo, en esta oportunidad no se procedió así, ya que no tuvimos posibilidad de debatir esta cuestión vinculada con la unificación de los códigos.

Sr. Presidente (Vanossi). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Camisar. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. González Cabañas. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Vanossi). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Camisar. — Señor presidente: deseo aclarar que la Comisión Especial designada por la Honorable Cámara tenía como tarea efectuar un dictamen sobre la unificación de la legislación civil y comercial. El dictamen fue elaborado por dicha comisión y en consecuencia traído directamente al recinto para su consideración.

Sr. Presidente (Vanossi). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. González Cabañas. — Señor presidente: esta idea de un código único es un hecho esperado largamente por quienes con su saber contribuyeron a la formación de la conciencia ju-

rídica, así como también por el foro constituido por la mayoría de los abogados del país, ya conscientes de la necesidad de esta reforma, y por el propio pueblo que ajeno a las especulaciones y desarrollos técnicos de quienes se dedican a la ciencia del derecho, en otra forma y de otro modo atisba y presiente los cambios que luego se institucionalizan a través de procesos más difíciles y complicados.

Finalmente, involucrados todos estos sectores, digamos que la ciencia jurídica argentina no podía quedar al margen de la historia manteniendo un esquema normativo obsoleto —que ha perdido vigencia en el resto del mundo— sin ver deteriorado su propio prestigio.

En tales condiciones, quienes formamos parte de esta comisión apreciamos la labor excelente desarrollada por el distinguido grupo de juristas llamados a colaborar en esta tarea, constituido por los doctores Héctor Alegría, Atilio Alterini, Jorge Alterini, Miguel Carlos Araya, Francisco de la Vega, Horacio Fargosi, Sergio Le Pera y Ana Isabel Piaggi. La metodología utilizada por este grupo de juristas en base a la propuesta formulada por el doctor Le Pera fue aceptada por el grupo de trabajo, permitiendo elaborar el anteproyecto que, concluido en enero de 1987, fue discutido en el seno de la comisión durante los meses siguientes, introduciéndosele innovaciones que finalmente adquirieron forma definitiva, siendo aprobado en la comisión por unanimidad en abril de este año.

No sería adecuado realizar aquí un análisis pormenorizado de la nueva legislación que se propone, porque ello supondría un examen innecesario y fuera de contexto. Sí corresponde señalar, en mi carácter de integrante de la Comisión de Legislación General, no sólo el honor que significó haber participado en esa Comisión Especial sino también la satisfacción que siento por los resultados obtenidos.

En el informe producido por el presidente de la Comisión Especial, diputado Camisar, se hace un meditado repaso de los procesos sufridos por las legislaciones para arribar al presente, destacando la imperiosa necesidad que los tiempos fueron reclamando para una nueva *Lex Mercatoria* a cuyo respecto señala: "No sólo los tiempos están maduros para la unificación, sino que es necesario apresurarse, porque desde hace unos treinta años viene hablándose de una nueva *Lex Mercatoria* que estaría formándose en las relaciones internacionales entre empresas y tomando el lugar que tuvo el *ius gentium* entre los mercaderes trashumantes del Medioevo".

De este modo asistimos a la incorporación al Código Civil, sistema normativo troncal de todos

los ordenamientos jurídicos, que descansa en una concepción muy estable y firme de las relaciones jurídicas, de las instituciones de un derecho mucho más cambiante y dinámico —como lo es el derecho comercial— y la legislación que de antiguo se fue formando en derredor de las actividades económicas, las que sufrieron las hondas y profundas transformaciones que la sociedad contemporánea iba experimentando a través de una revolución tecnológica sin precedentes que ahora ha alcanzado desarrollos extraordinarios y que se halla en los comienzos inaugurales de una nueva era, que desconocemos y que abrirá en tiempos y plazos mucho más breves, seguramente, nuevas necesidades que determinarán incluso cambios y modificaciones en la renovada legislación que se propone.

De este modo la aceleración del tiempo histórico constituye un verdadero desafío para los hombres de derecho, que deben estar preparados con un sólido bagaje de anticipación para no ser superados por su propia circunstancia histórica y para no quedar atrapados por modelos que pueden ser portadores de contenidos casi vernáculos en relación con su época. Esto irá sucediendo en forma cada vez más premiosa en el orden internacional y nacional, y supondrá una severa preparación y adaptación de aquéllos, los hombres de derecho, a un esquema muy diverso al que vivieron quienes transitaron por este siglo y el pasado.

El siglo y algo más transcurrido desde la sanción de nuestros códigos Civil y Comercial, permitió la formación de una labor doctrinaria y jurisprudencial de alto valor jurídico en tiempos de duración muy amplios, que hicieron posible que aquellas generaciones constituidas por eminentes hombres de derecho maduraran reflexivamente las soluciones que imponían cambios en el régimen normativo básico elaborado por Vélez Sársfield y Acevedo. Así se fue elaborando una legislación adecuada en cada caso a las nuevas necesidades que iban planteándose, en un largo proceso de maduración y creación.

En esta tarea tuvo una decisiva y trascendente intervención la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que a modo de tribunal de casación fue generando y gestando normas orientadoras que determinaron se fuera remozando y renovando toda una estructura normativa que debió aceptar el tránsito a nuestra actual realidad a través de un tiempo cuya medición no tiene posible comparación con el que ahora nos toca vivir, a veces padecer, y enfrentar.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Juan Carlos Pugliese.

Sr. González Cabañas. — Puesto así ante esta labor parlamentaria forjadora de este proyecto, adhiero sin reservas al fruto logrado, y confío en que éste sea y constituya el medio idóneo al servicio de las necesidades del país y de nuestro pueblo, que es al fin el destinatario de estas indispensables modificaciones legislativas. Sin lugar a dudas, éstas inauguran un nuevo período en el que la sanción de un código único de derecho privado asumirá la prueba a que es sometido todo cuerpo legal, dentro del equilibrio y la medida que nuestros juristas, el foro y la justicia irán recreando por la interpretación y aplicación de las nuevas disposiciones que regirán en el futuro.

Sin embargo, la prudencia, que es al fin —pese a todos los cambios que nos impone la historia— un instrumento necesario en la vida del derecho, nos lleva a no perder de vista ese notable proceso de aceleración histórica que mencioné, pero tampoco la sabiduría del pasado, que a lo largo de dos mil años de historia fue produciendo un extraordinario desarrollo jurídico iniciado por los romanos, los pueblos germánicos y, en fin, por la latinidad. Ellos, junto con los anglosajones y su *common law*, nos han dado bases tan profundas en la ciencia jurídica que no pueden ni podrán nunca ser omitidas en el proceso continuo de la historia, ya que constituyen el cimiento explícito o implícito de las modificaciones legislativas para la unificación del derecho privado.

A ello alude el señor presidente de la comisión, cuando destaca: “En tal sentido no es casual que haya comenzado este informe, como comencé en su momento el proyecto de resolución que creó esta comisión, en un punto de la historia situado más de dos mil años atrás. Esas raíces, y su evolución, viven en nosotros, sobre ellas nos apoyamos y seguiremos haciéndolo, y tienen aptitud suficiente para incorporar —sistemáticamente— cualquier cambio del mundo contemporáneo o del próximo que podamos imaginar”.

Asimismo, es muy importante señalar que la nueva legislación unificada en el Código Civil, que contendrá las nuevas disposiciones otrora adscritas a la legislación comercial, se sustenta en una concepción humanista que antepone como sustrato fundamental la norma moral al interés privado que la lesione o subestime, reafirmando el sentido social al que no puede ser ajeno el nuevo régimen normativo. El necesario e indispensable equilibrio entre lo público y lo privado debe sobrepasar las pujas sectoriales en la conformación del orden jurídico, que debe ser ex-

presión de las necesidades colectivas, y del sentido social del derecho y de la norma jurídica.

Cabe destacar, señor presidente, que muchas serían las observaciones que podrían hacerse a tan amplia gama de temas abordados por el proyecto, pero como señalé en un principio, supondría ello participar en el análisis concreto y pormenorizado de todo el articulado reformado, lo que sería impropio y avanzaría sobre las tareas ya concluidas en un prolijo y esmerado trabajo, al que presto mi adhesión.

Resalto nuevamente el buen camino elegido, la adecuada metodología utilizada, el respeto y cuidado puestos en el uso del lenguaje empleado, la búsqueda de la simplicidad en la formulación de las normas para evitar difíciles interpretaciones, la recepción de todas aquellas técnicas modernas que en la época de la sanción del Código de Vélez eran obviamente desconocidas, la mayor intervención de los jueces en numerosas cuestiones para evitar daños o demoras innecesarias, etcétera; por todo lo cual extiendo mi más cálida felicitación a quienes de una u otra forma participaron en la realización de este proyecto junto con el señor presidente de la Comisión Especial, en cuanto "constituye la más importante pieza legislativa de la historia del Congreso Nacional que resulta de una iniciativa exclusivamente parlamentaria". (Informe.)

Concluyo con conceptos de Giole Solari, filósofo del derecho italiano: "que el yo real es el yo social, que el individuo crea a la sociedad negándose a sí mismo como individualidad empírica, para volver a vivir como parte de un todo orgánico; que en la sociedad el hombre afirma su verdadera humanidad, que el orden social es un orden racional y necesario y que como tal se rige en la justicia que garantiza su conservación aun en contra de los que no han logrado entender que la libertad verdadera es la libertad social".

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Camisar. — Señor presidente: a medida que se fue desarrollando este debate surgieron en mí algunas reflexiones que de alguna manera quiero verter en esta segunda intervención que realizo durante esta consideración en general.

Recordé —y recuerdo— las circunstancias que rodearon el tratamiento del Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Sársfield, que hoy estamos tratando de modificar.

Pensé en Alberdi, aquel gran erudito y gran jurista que inspiró la Constitución Nacional, que

criticaba a Vélez Sársfield diciendo que con ese código favoreceríamos la penetración de la cultura brasileña en territorio argentino.

Recordé las críticas de Vicente Fidel López, cuando decía "observad el lenguaje, observad la técnica jurídica de este nuevo código, comparadla con las Partidas y veréis las riquezas que estamos a punto de perder".

Cuando el presidente Sarmiento envió el proyecto a este Congreso, sostuvo en el mensaje que había dos formas de tratarlo: someterlo a un examen exhaustivo, con la participación de toda la comunidad política y jurídica de entonces, o aprobarlo a libro cerrado. El Poder Ejecutivo se inclinó por este último procedimiento, por lo que el Código Civil se sancionó por el Congreso de la Nación a libro cerrado.

Quizás porque faltó en lo sucesivo el ímpetu y la fuerza de Sarmiento, la Argentina se vio privada de que aquel maravilloso anteproyecto elaborado por Bibiloni, quien murió muy poco después de terminar su redacción, no tuviera ni siquiera estado parlamentario.

El proyecto de 1936, elaborado sobre la base del anteproyecto de Bibiloni, que fue elevado al Poder Ejecutivo y remitido por éste en octubre de 1936, jamás fue tratado. Igual suerte corrió en 1954 aquel proyecto también maravilloso del doctor Llambías —una auténtica joya jurídica—, que durmió en el olvido. Recién doce años después, en 1966, por obra de algún iluminado profesor de la Universidad Nacional de Tucumán, en la revista jurídica que edita dicha casa de estudios fue publicado y puesto en conocimiento de la comunidad jurídica nacional.

Se ha dicho en el recinto y fuera de él que de alguna manera estamos haciendo como desaparecer de un plumazo el derecho comercial, como si el derecho civil absorbiera las instituciones comerciales. Creo que eso no es así; lo que estamos haciendo es legislar sobre la realidad, captando un fenómeno precisamente inverso. Es aquello que Satanovsky en Argentina y Broceta Pons en España han llamado el fenómeno de la comercialización del derecho civil.

Como dijo Garrigues, hay una especie de difusión del derecho comercial mediante la actuación de los bancos, el fenómeno de los títulos valores y de los títulos al portador y el incremento notable de los bienes muebles y de las riquezas mobiliarias, especialmente de las acciones.

Ascarelli, por su parte, señala que el derecho civil clásico correspondió a una sociedad agrícola-ganadera, mientras que el derecho comer-

cial correspondió y corresponde a una sociedad del comercio y de la industria. No olvidemos que Ulpiano decía que en definitiva el derecho se reduce a saber cómo una cosa entra en el patrimonio de una persona, cómo permanece en él y cómo la pierde.

Los contratos comerciales desplazan en el curso del tiempo a los contratos civiles, ya sea aquellos objetivamente comerciales, por ejemplo la compraventa de cosas muebles, como los subjetivamente comerciales, por ejemplo, los contratos de transporte y de seguro. También está el fenómeno de la contratación en masa, que es la forma de contratar común y general en los últimos tiempos.

El profesor Mario Rotondi, de la Universidad de Roma, ha elaborado unos indicadores para demostrar que en el derecho comparado la unificación se ha dado por sí sola, que no ha sido impuesta por el legislador sino que éste se ha limitado a captar el fenómeno.

Nosotros hemos "testado" esos indicadores de Rotondi con nuestra realidad jurídica y comprobamos que se adaptan perfectamente a ella. Así, por ejemplo, la abolición de los tribunales especiales en materia de comercio es una realidad de nuestro país; salvo en la Capital Federal y en el territorio nacional, donde existe la separación entre la jurisdicción civil y comercial, en general en el país se encuentra unificada esta jurisdicción. También la aplicación a los no comerciantes de las reglas del derecho mercantil, cuando el acto es comercial por una de las partes, como lo manda el artículo 7º del Código de Comercio; y asimismo la presunción de comercialidad del acto cuando lo realiza un comerciante, como lo establece el artículo 5º de dicho cuerpo legal.

La influencia de todos estos principios del derecho comercial en el civil tiene distintas fuentes y manifestaciones. Así, por ejemplo, del código alemán de 1900 provienen los principios de buena fe y apariencia y la fuerza vinculante de la oferta.

Del código italiano de 1942 derivan la mora automática y la indemnización tarifada que establecimos en nuestro Código.

También llegan del derecho comercial al derecho civil las fuerzas vinculantes de los usos, la voluntad unilateral como fuente de las obligaciones, la doctrina de la imprevisión y la presunción de la onerosidad.

Todos estos son principios ya incorporados en la reforma de 1968, por medio de la ley 17.711. Otro de los indicadores que da Mario Rotondi,

la aplicación de la quiebra a los no comerciantes, ya se ha incorporado a nuestra legislación.

Por último, podemos señalar la generalización de los títulos valores.

Frente a este fenómeno universal y ante la necesidad de captar la realidad —que, creemos, debe ser la tarea primordial del legislador—, debíamos plantearnos esta unificación.

Había dos formas fundamentales para llevarla a cabo. Una de ellas consistía en realizar una especie de cosmética jurídica; es decir, eliminar las superposiciones, manteniendo vigentes ambos códigos. Esto no habría significado un avance en la legislación argentina.

El otro camino consistía en efectuar la unificación de ambos códigos en uno único, introduciendo modificaciones y creando los nuevos institutos que exige la problemática actual de los negocios.

Este último fue el camino elegido, y así consolidamos el derecho privado en el Código Civil, si bien quedan en pie algunos estatutos particulares, tales como las leyes de sociedades, de concursos y de títulos valores, que deberán ser revisados por la próxima generación, parlamentariamente hablando. Los legisladores que nos sigan deberán tratar de aglutinar estos estatutos especiales para incorporarlos sistemática y ordenadamente al nuevo código. También deberán replantear el libro III "De los derechos reales". De una vez por todas habrá que afrontar también la simplificación del derecho sucesorio. A raíz de la muerte de Freitas, Vélez Sársfield no pudo continuar utilizándolo como fuente y es así que en este tema se presentan algunos galimatías que es necesario superar. Esta es una tarea que debe llevar a cabo el Congreso de la Nación.

Con los legisladores integrantes de la Comisión de Legislación General hemos propuesto la creación de una comisión permanente para seguimiento del código, tal como existe en la mayoría de los países, especialmente en los de Europa continental y en los de América del Norte.

Consolidamos entonces el derecho privado en un código único, que es el civil. Consecuentemente unificamos el régimen de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, lo que ha motivado que un distinguido profesor de derecho español, que participará en las próximas jornadas de derecho civil a realizarse en agosto en la ciudad de Buenos Aires, dijera que, de aprobarse, este código será uno de los cuerpos jurídicos más modernos del mundo.

Unificamos asimismo el régimen de los privilegios, que tantas dificultades e injusticias originó debido a la duplicidad de su legislación.

También unificamos el régimen de las sociedades. En consecuencia, a partir de ahora no habrá más sociedades comerciales o civiles, sino que existirá la sociedad general —que queda legislada en el Código Civil— y las sociedades especiales, porque se mantiene la vigencia de la ley 19.550.

A la par que hemos procedido a la unificación, también pasamos —como decía hace un momento el señor diputado Fappiano con la profundidad que lo caracteriza— del código del *ego* al código del *alter ego*. Me impactó la reflexión del señor diputado Fappiano. No quiero repetir las eruditas opiniones que acaba de dar para fundar ese aserto. Simplemente, deseo recordar dos o tres principios.

En este código, por ejemplo, se da amplia cabida a la equidad mediante distintas normas que aluden a las circunstancias del caso y a todo aquello que sea razonable o deba ser aplicado razonablemente. O sea que se otorgan facultades al juez para que la norma tenga una aplicación más humana. Se beneficia a quien actuó de buena fe y a título oneroso, estableciéndose una diferencia entre los bienes registrables y no registrables.

Se efectúa una especial protección a la persona física. Como dije en mi informe al comenzar este debate, consideramos que la persona física debe contar con una protección especial con relación a la persona jurídica, porque con respecto a esta última, dada su forma de organización, resulta sensato presumir que va a disponer de algún tipo de asesoramiento jurídico. Así, por ejemplo, redactamos el artículo 624, que faculta al juez a reducir los intereses de oficio en favor de la persona física cuando éstos se apartan notoriamente de la tasa de plaza. De esta forma hemos establecido un mecanismo genérico en contra de la usura, que no sólo ataca al anatocismo —como se dijo en algún momento—, sino que crea un procedimiento general para combatir la usura, cualquiera sea el medio técnico utilizado para llevarla a la práctica.

También debemos mencionar la proyectada norma del artículo 1.157, que establece una protección frente a quien predispone el texto del acuerdo. En la última parte del artículo 1.197 establecimos la cláusula del *favor debitoris* —es decir, a favor del deudor—, que se aplica cuando en un contrato predispuesto existen dudas en su interpretación.

Asimismo, se establece que las personas de menores recursos que realicen profesiones libera-

les o agropecuarias no están obligadas a inscribirse en el Registro Público de Comercio. En el artículo 1.071 reforzamos la protección a las víctimas de los actos abusivos.

Retomando lo que expresé al comienzo de mi exposición, me anticipo a señalar que tengo una opinión totalmente distinta con respecto a las críticas que se formularon al proyecto —no se basaban en su contenido— en virtud de algún tratamiento inconsulto. Aquí intervino una comisión especial que trabajó duramente durante muchos meses y que estuvo abierta a la inquietud de todos los señores legisladores. Además, ha recogido la solución que venía clamando la doctrina con respecto a los distintos problemas jurídicos.

El profesor López Cabana, de la Universidad de Belgrano, ha publicado en la revista "La Ley" un artículo cuya inclusión en el Diario de Sesiones solicito.

Me gustaría analizar rápidamente algunas de sus conclusiones, que consisten en vincular las soluciones que nosotros hemos encontrado a los distintos institutos con lo que venía pidiendo la doctrina nacional o con lo que prácticamente está consolidado en el derecho comparado.

Citaré algunos ejemplos. La norma que establece que la responsabilidad indirecta de la persona jurídica por el acto de su dependiente debe coincidir con la que se atribuye a las personas físicas, fue aprobada y resuelta en las VI Jornadas de Derecho Civil realizadas en Santa Fe en 1977 y es la solución que contempla el inciso 2) del artículo 34 del proyecto.

El artículo 94 del proyecto establece la pluralidad de domicilios para los casos en que una persona realice distintas actividades. Esta es la solución del artículo 23 del Código Civil suizo.

En cuanto a la mayoría de edad, el derecho comparado en general fija la edad de su adquisición en los 18 años. Así ocurre, por ejemplo, en Australia, Bahamas, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos de América, España, Finlandia, Francia, Guatemala, Inglaterra, Irlanda del Norte, Israel, Italia y Líbano.

La unificación de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual a la que me refería hace unos momentos fue resuelta por el III Congreso Nacional de Derecho Civil llevado a cabo en Córdoba en 1961; por las V Jornadas de Derecho Civil, en Rosario en 1971; por las Jornadas Australes de Derecho, en Comodoro Rivadavia en 1980; por la Jornada Bonaerense de Derecho Civil, Comercial y Procesal Civil, en Junín, provincia de Buenos Aires; por la Jornada

Sanjuanina de Derecho Civil y por las Jornadas Nacionales sobre Unificación de Obligaciones Civiles y Comerciales, en Buenos Aires en 1986.

El incumplimiento sin culpa, que nosotros contemplamos en el artículo 514 del proyecto, fue establecido en las II Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, realizadas en 1971 en San Rafael, Mendoza, donde se declaró que entre el caso fortuito y la culpa hay una zona intermedia, que es la falta de culpa, que debe ser claramente distinguida.

La responsabilidad precontractual que establecemos en los artículos 1.158 y 1.159 fue reclamada por las II Jornadas de Derecho Civil llevadas a cabo en Corrientes en 1965.

Con respecto al riesgo de la cosa y actividades riesgosas, el artículo 1.113 del Código Civil establecía la responsabilidad por el riesgo de la cosa pero omitía lo relativo a las actividades riesgosas, lo cual nosotros incluimos recogiendo las inquietudes de las I Jornadas Provinciales de Derecho Civil, en Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Los daños al consumidor figuran en el artículo 2.176 del proyecto, donde se establece la responsabilidad objetiva.

El daño ecológico está contemplado en el artículo 2.619 del proyecto. También hemos incluido los contratos de contenido predispuesto y la unificación de las sociedades, que vienen siendo reclamados unánimemente por la doctrina nacional desde 1943.

Por último, en cuanto a las facultades de los jueces y a la equidad, de alguna manera recogemos lo que decía Vélez Sársfield en la nota al artículo 2.567: "En nuestro país los jueces ordinarios tienen por las leyes las mismas facultades que las Cortes de equidad".

Refiriéndose a este proyecto, un profesor de derecho civil dijo que cuando los tucumanos escuchan que se va a reformar la Constitución Nacional, chillan los huesos de Alberdi, y cuando los cordobeses escuchan que se va a reformar el Código Civil, chillan los huesos de Vélez Sársfield. Pues bien, no creo que chillen los huesos de estos grandes juristas que se ganaron la historia, sino la desesperanza argentina en el deseo de que el país camine hacia adelante.

Un experto dijo que la modernización es una forma de esperanza. Debemos comprender que las sociedades se forman no sólo con los elementos existentes, sino también con los que impulsan los cambios, porque de lo contrario corremos el riesgo de caer en aquello que Nietzsche calificaba como patriotismo estático, es decir, aquel

que se solaza contemplando las cosas del pasado y rechaza o menosprecia los aportes que pueden hacer las generaciones presentes o futuras.

No se trata de romper el nexo solidario entre el presente y el pasado que es, en definitiva, la trama de la historia. Pero no les podemos asignar a las generaciones presentes el papel de meros administradores de los bienes heredados para dilapidarlos o para que languidezcan por el tiempo.

Se equivocan los que creen que la historia es fuente inapelable de sabiduría. Los hechos los contradicen. Allí está el presidente Reagan solicitándole al Congreso que modifique una Constitución bicentenaria. No podemos en nombre de la historia hecha oponernos a la historia por hacer. La autoridad de los hombres que hicieron el país —autoridad que les reconocemos— no puede ser pretexto para que nosotros no hagamos nuestro aporte ahora. Este es el desafío.

Señor presidente: cuando finalicé mi primera intervención dije que por medio de este proyecto estábamos contribuyendo a apuntalar aquello de que hablaba el Preámbulo de la Constitución: afianzar la justicia. Ahora concluyo esta segunda intervención con una frase que los abogados solemos colocar al final de los escritos: ¡señores diputados, aprobemos este proyecto, que será justicia! *(Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)*

Sr. Presidente (Pugliese). — Habiéndose agotado la lista de oradores y no existiendo quórum en el recinto, se va a llamar para votar.

—Se llama para votar. Luego de unos instantes:

Sr. Camisar. — Pido la palabra para formular una aclaración.

Sr. Presidente (Pugliese). — Para una aclaración tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Camisar. — Señor presidente: el proyecto de ley cuya sanción aconseja la comisión es el contenido en el Orden del Día N° 1064, con las modificaciones que con referencia a los anexos I y II, a los que se hace mención respectivamente en los artículos 1º y 2º, han sido solicitadas por la comisión con fecha 16 de junio del corriente año y autorizadas por la Honorable Cámara, y las que la comisión ha pedido mediante nota del día 7 de este mes, según consta en el Boletín de Asuntos Entrados N° 18 (expediente 969-D.-87). Si bien el texto de estas últimas modificaciones ha sido distribuido ayer en las bancas, a los fines de su adecuada difusión solicito que se lo inserte en el Diario de Sesiones.

Solicito asimismo que se inserten en el Diario de Sesiones las notas explicativas del proyecto de ley cuya sanción la Comisión Especial aconseja a la Honorable Cámara.

Sr. Presidente (Pugliese). — Oportunamente serán sometidos a votación los pedidos de inserción formulados por el señor diputado.

Se va a votar en general.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración en particular el artículo 1º.

Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Fappiano. — Señor presidente: en la nota elevada por la comisión el día 7 del corriente mes se ha omitido incluir un segundo párrafo que se agrega al artículo 1.112 del Código Civil. A efectos de que sea salvada esa omisión acabo de hacer entrega en Secretaría del texto respectivo. Concordantemente, en el texto que aparece en el Anexo I luego del título *Otras disposiciones*, debería incorporarse la mención del artículo 1.112 entre la de los artículos 1.071 y 1.113.

Sr. Presidente (Pugliese). — Debido a una omisión mecanográfica, de acuerdo con lo expresado por el señor diputado Fappiano habría que agregar a continuación de la referencia que se hace al artículo 1.026 del Código Civil en la nota del día 7 de julio, el texto que se incluiría como segundo párrafo del actual artículo 1.112 del Código Civil, cuya redacción sería la siguiente: "A los fines de las acciones subrogatorias o de regreso, en los casos de condena judicial contra el Estado por los hechos u omisiones imputables a sus funcionarios o agentes, la sentencia respectiva determinará si medió falta personal de los mismos por las que deben responder hacia aquél".

Se va a votar el artículo 1º, debiendo considerarse que el Anexo I al cual se hace referencia es el que resulta de introducir en el texto consignado en el Orden del Día Nº 1064 las modificaciones a las que ha hecho mención el señor diputado Camisar, con los agregados indicados por el señor diputado Fappiano.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 2º, debiendo tenerse en cuenta que el anexo II al que hace referencia es el que resulta de introducir en el texto consignado en el Orden del Día Nº 1.064 las modificaciones propuestas

por la comisión mediante sus notas del 16 de junio y del 7 de julio del corriente año.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 3º a 9º.

—El artículo 10 es de forma.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda sancionado el proyecto de ley¹.

Se comunicará al Honorable Senado.

Sr. Aramburu. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Aramburu. — Señor presidente: es a los efectos de manifestar mi satisfacción por la exclusión del texto del proyecto que acaba de sancionarse de las modificaciones al capítulo IV, correspondiente a la sección III del título VII del Código Civil, tal cual me lo ha expresado el señor diputado Camisar, quien gentilmente se ha acercado a mi banca.

Esta supresión era necesaria porque todo lo que se refiere a sociedades y asociaciones constituidas en el extranjero debe resolverse por la legislación de su lugar de constitución.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar si se efectúan en el Diario de Sesiones las inserciones solicitadas por los señores diputados Fappiano y Camisar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese) — Se harán las inserciones solicitadas².

2

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Cabello. — Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Pugliese). — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cabello. — Señor presidente: aprovecho la oportunidad de que la Cámara cuenta con quórum para poder decidir sobre una cuestión que voy a plantear como argentino y como representante del pueblo, ya que se trata de un hecho que nos llega a todos.

Señor presidente: desde los acontecimientos de Semana Santa se han venido sucediendo en

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 2537.)

² Véase el texto de las inserciones en el Apéndice. (Página 2598.)

Art. 10. — Las normas de la presente ley no implican caducidad alguna de las previsiones de la ley 21.932 y sus normas complementarias (Régimen de Reconversión Automotriz).

Art. 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

3. DECLARACIONES

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, disponga que al pro-

ceder a la integración de la comisión especial prevista en el artículo 2º de la ley de traslado de Vialidad Nacional a la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, se dé particular participación a sus agentes públicos por intermedio de las organizaciones sindicales representativas que los agrupan en el orden nacional, y se contemple lo dispuesto en el artículo 9º de la ley 23.512.

Dada en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, en Buenos Aires, a los quince días del mes de julio del año mil novecientos ochenta y siete.

JUAN C. PUGLIESE.

Carlos A. Bravo.

Secretario de la C. de DD.

B. ASUNTOS ENTRADOS

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de los organismos pertinentes, disponga que al proceder a la integración de la comisión especial prevista en el artículo 2º de la ley de traslado de Vialidad Nacional a la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, se dé particular participación a sus agentes públicos por intermedio de las organizaciones sindicales representativas que los agrupan en el orden nacional, y se contemple lo dispuesto en el artículo 9º de la ley 23.512.

*Ricardo Daud. — Vicente M. Azcona. —
Alberto C. Bonino. — Felipe E. Botta. —
Héctor E. González. — Emilio R. Guat.*

¹ Proyecto cuya entrada en esta sesión autorizó la Honorable Cámara.

*ti. — Jorge R. Matzkin. — Lorenzo A. Pepe. — Tomás C. Pera Ocampo. —
Oswaldo H. Posse. — Rubén A. Rapacini. —
Roberto J. Salto. — Miguel J. Serralta.*

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente proyecto se inscribe dentro del deseo de salvaguardar adecuadamente los derechos e inquietudes de los trabajadores que constituyen una parte sustancial de la Dirección Nacional de Vialidad.

Por ello se solicita que el Poder Ejecutivo dé participación activa a las organizaciones gremiales que a nivel nacional los representan en aquellos aspectos vinculados a los temas inherentes a los sectores sociales que conforman el espectro de dicho organismo.

*Ricardo Daud. — Jorge R. Matzkin. —
Lorenzo A. Pepe. — Rubén A. Rapacini. —
Miguel J. Serralta.*

—Considerado sobre tablas.

C. INSERCIONES

1

INSERCIONES SOLICITADAS POR EL SEÑOR DIPUTADO CAMISAR

I. Legislación civil y comercial

(Por Germán J. Bidart Campos¹)

Tiene estado parlamentario el proyecto de legislación civil y comercial unificada. Por supuesto, como no somos expertos en derecho civil ni en derecho comercial, dejamos librado al criterio de quienes lo son el opinar sobre si es buena o no la técnica de unificar en una legislación común el derecho civil y comercial, así como si el proyecto que se conoce satisface o no lo que en forma preponderante aconseja la doctrina en ambos campos. Nosotros nos limitaremos modestamente a atender una objeción constitucional que se esgrime contra el proyecto unificado.

Tal objeción alega, más o menos, lo siguiente: la Constitución en su artículo 67 inciso 11 dice que corresponde al Congreso dictar los códigos civil, comercial, etcétera, o sea, alude "gramaticalmente" a dos códigos que el proyecto unifica: el civil y el comercial; y todavía más, habla de "códigos", es decir, de un cuerpo sistemático que enfoque y agote la regulación legal de las instituciones propias del derecho civil y del derecho comercial. Tomada "a la letra" esta norma constitucional, quienes arguyen la inconstitucionalidad de la unificación afirman que con ella ya no habría dos códigos separados sino una legislación común a ambos; y entienden que el constituyente de 1853-1860, que conocía el auge de la codificación napoleónica en Europa, tuvo en cuenta y en miras no sólo el desdoblamiento de la

¹ Artículo publicado en el diario "La Nación".

citada regulación legal del derecho civil y del derecho comercial, sino la forma "codificada" que habría de tener cada uno.

Aquí radica el supuesto óbice. Pero hay muchas razones para descartarlo.

Una norma de la Constitución

En primer lugar, el sentido primordial del artículo 67 inciso 11 dentro de la organización del poder y dentro del reparto de competencias entre el gobierno federal y las provincias, es éste: deslindar lo que le toca al llamado Poder Legislativo (Congreso federal), y situar en su órbita lo que, por ser una competencia delegada (artículo 104), no pueden hacer las provincias (artículo 108). Si la cosa es así, el otorgar al Congreso la competencia de dictar el Código Civil y el Código Comercial significa, ante todo, consignar que esos códigos rigen en todo el territorio (legislación común uniforme) y que, una vez dictados, no pueden ser materia de legislación provincial (artículo 108).

En segundo lugar, la interpretación puramente literal o gramatical no es suficiente por sí sola para saber qué significa una norma de la Constitución. Nuestra Corte Suprema, por lo menos desde 1934, viene usando el método de interpretación dinámica que no sólo difiere de la interpretación estática —detenida a la fecha de sancionarse la Constitución—, sino que exige compatibilizar las palabras usadas por el constituyente con las nuevas situaciones que van apareciendo en la sociedad durante el transcurso del tiempo.

Aunque sea verdad que los vocablos empleados en el artículo 67 inciso 11 resulten tributarios de una circunstancia histórica conocida por el autor de la Constitución —como era la codificación—, creemos que ciento treinta años después no se es infiel a su previsión ni a su voluntad si decimos que aquel inciso —además de lo que en primer término tuvo en vista— significa que el Congreso tiene la competencia de legislar las instituciones propias del derecho civil y del derecho comercial, lo que abre varias posibilidades: a) que para cada uno de esos sectores dicte una legislación codificada en forma independiente; b) que para cada uno de esos sectores dicte una legislación dispersa (diversidad de leyes sueltas, sin codificación) en forma también separada; c) que con o sin codificación acumule en una legislación única las instituciones del derecho civil y del derecho comercial.

En este último supuesto, el derecho comercial no quedará sin regulación legal ni dejará de existir, por el hecho de quedar legislativamente abarcado en una normativa común con el derecho civil en aquellas partes que admitan uniformidad de regulación.

Algún ejemplo sobre la amplitud de criterio, que más allá de los términos utilizados por la Constitución, le ha servido al Congreso para ponderar a su discreción la técnica legislativa de su preferencia, hallamos en los siguientes casos: a) el mismo artículo 67 inciso 11 prevé, desde la reforma constitucional de 1957, el dictado del Código del Trabajo y Seguridad Social y, a treinta años de vigente esa norma, el Congreso ha cumplido esa competencia mediante leyes dispersas sobre derecho laboral y de la seguridad social, o sea, no ha

sancionado un código; b) sin norma habilitante expresa ha dictado en cambio el Código Aeronáutico y el Código Aduanero; c) con una norma (artículo 67 inciso 23) que se refiere a "formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno" de los ejércitos (o fuerzas armadas) no ha dictado leyes dispersas como parecería insinuar literalmente el plural de "reglamentos" y de "ordenanzas", sino que ha dictado el Código de Justicia Militar; d) por fin el mismo artículo 67 inciso 11, después de mencionar los códigos, añade que también le corresponde al Congreso dictar especialmente leyes generales sobre bancarrotas y sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado; pues bien, suponiendo que la ley de bancarrotas equivalga a la ley de quiebras, no es indispensable que dicha ley quede independizada del Código de Comercio, sino que bien puede formar parte de él o incorporarse a él; y la ley sobre falsificación de moneda y de documentos públicos atiende a una incriminación que forma parte del Código Penal.

El arbitrio del Congreso

Recalcamos que solamente al Congreso le corresponde y compete decidir de qué forma ha de cumplir la atribución de dictar los códigos que nos ocupan, y entendemos que como la Constitución no lo condiciona a cumplirla de una manera técnica determinada, no hay materia constitucional susceptible de colocarse bajo control de constitucionalidad por parte de los jueces. No es que se trate de una "cuestión política no judicial" (cuya existencia no admitimos), sino de sostener que la propia Constitución ha librado al arbitrio del Congreso la opción de regular el derecho civil y el derecho comercial del modo que él escoja, por lo que hecha la opción por una forma o por otra, estamos ciertos de que ningún juez podría decir que la Constitución ha quedado violada.

En suma, en tanto haya una normativa propia del derecho comercial, el precepto constitucional queda satisfecho, aunque tal legislación no revista formalidad de código, y aunque se subsuma en una regulación compartida por el derecho civil.

Por ello estamos tranquilos en orden al supuesto óbice que, sucintamente, esperamos haber apaciguado con estas reflexiones.

II. Comunicaciones relacionadas con el proyecto de ley sobre unificación de la legislación civil y comercial de la Nación.

Foro de abogados de la Capital Federal

Buenos Aires, 23 de junio de 1987.

Señor presidente Comisión Especial de Unificación Legislativa Civil y Comercial, diputado de la Nación, doctor Osvaldo Camisar

S/D.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el honor de dirigirnos a usted, en respuesta a su atenta carta del 7 de mayo pasado en la que nos solicita nuestra opinión sobre el proyecto de unificación elaborado por la comisión que usted dignamente preside.

Tengo a bien elevarle el informe elaborado por esta institución, sobre la base de un proyecto del profesor doctor Jorge Horacio Gosende, dada la inminencia del tratamiento del proyecto en la Honorable Cámara de Diputados.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.

I

El proyecto de ley que unifica la legislación civil y comercial representa la concreción de un anhelo propiciado desde hace mucho tiempo.

Cabe señalar que él significa, por lo pronto, la unificación del régimen aplicable al derecho de las obligaciones, sin distinguir su origen civil o comercial.

Se recoge, así, una línea de pensamiento desarrollada en nuestro país a partir del año 1926, que ha sido sistemáticamente reiterada hasta el presente por todos los encuentros científicos que se han ocupado del tema, reflejando la opinión mayoritaria de nuestra doctrina. Esa es, por otra parte, la orientación que es dable advertir en la legislación comparada, a partir del código suizo de las obligaciones sancionado en el año 1881, que fuera incorporado como libro V del Código Civil en 1912.

Pero el proyecto en análisis va más allá de esa mera unificación obligacional, ya que de su articulado resulta la fusión de normas aplicables al área del derecho privado patrimonial.

Se ha seguido, de esa forma, una tendencia científica que fuera recomendada por la VI Conferencia Nacional de Abogados (La Plata, 1959), y que también ha sido concretada en el derecho comparado (código polaco de las obligaciones y contratos, Código Civil italiano, para citar los más conocidos).

II

Un examen general de las normas proyectadas permite advertir la revigorización de aspectos destacables tanto desde la óptica axiológica cuanto desde la ponderación funcional:

1º — Por lo pronto, se nota una preocupación por la vigencia de la regla moral, que marcha de la mano con el concepto de buena fe (normas interpretativas, ejercicio abusivo de los derechos, teoría de la imprevisión, regulación del dominio fiduciario, etcétera).

2º — Además, se advierte una adecuación de las normas a la realidad económica de nuestros tiempos, lo que indudablemente contribuirá —en el decir de Carnelutti— para considerar al derecho como un puente entre la economía y la ética.

3º — Por último, también es de destacar el ajuste a la realidad político-social que nos toca vivir, en la que adquiere una significativa trascendencia la protección de lo que se ha dado en llamar la parte débil del contrato.

III

En suma, el proyecto de unificación de la legislación civil y comercial adecua a una tendencia contemporánea que ya ha sido plasmada normativamente por otros países, y respeta directivas que conciernen a una sana política legiferante.

Como es lógico suponer, la aplicación particular de las nuevas normas exigirá el natural amoldamiento de lo que constituye una innovación, y en esto seguramente cobrará máxima importancia la labor de la jurisprudencia.

La Plata, 15 de junio de 1987.

Al señor presidente de la Comisión Especial de Unificación Legislativa Civil y Comercial, doctor Osvaldo Camisar.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente con la finalidad de emitir opinión respecto del proyecto de unificación civil y comercial que oportunamente le fuera girado al organismo constitucional que presido.

Sin duda la idea de unificación es un viejo anhelo de la mayoría de los juristas y estudiosos del derecho, así como también una tendencia constante en las jornadas científicas de la última década. Constituye pues entonces, en este sentido, una decisión impostergable.

Se hace eco también el proyecto de la reformulación, principios generales de la contratación privada, atendiendo a un modelo económico más real de circulación de los bienes y servicios de la comunidad, así como de los modernos métodos estandarizados para la forma de los mismos.

En materia de responsabilidad, apunta a un concepto más solidarista, admitiendo cambios en la normación que venían siendo impulsados por congresos y jornadas, y atendían a una mayor protección de la privacidad en el aspecto individual y a la comunidad como resultante de la actividad industrial cada vez más riesgosa para el ser humano.

En suma, considero que el proyecto reúne las cualidades necesarias para su aprobación sobre tablas, sin perjuicio de que las imprecisiones de algunos artículos en particular —imperfección propia de toda obra científica— sean pulidas a través de aportes doctrinarios y jurisprudenciales.

Con mi más distinguida consideración, saludo al señor presidente.

CARLOS A. GHERSI.
Fiscal de Estado.

Rosario, 22 de junio de 1987.

Al señor presidente de la Comisión Especial de Unificación Legislativa Civil y Comercial, doctor Osvaldo Camisar.

S/D.

Habiéndoseme requerido en mi carácter de presidente del Instituto de Estudios Legislativos y Derecho Comparado del Colegio de Abogados de Rosario, mi opinión sobre el proyecto que unifica las legislaciones civil y comercial, pendiente de consideración en la Honorable Cámara de Diputados, hago llegar a usted mi criterio favorable a la unificación proyectada, como así también, de manera general, a las reformas introducidas al Código Civil, debiendo destacar de especial manera el acierto que significa la unificación de los regímenes contractual y extracontractual de responsabilidad civil, que constituye un avance que situará a nuestro derecho

privado en la corriente de las codificaciones más modernas.

A mayor abundamiento, me permito señalar a usted que la unificación de las legislaciones civil y comercial fue propiciada de manera prácticamente unánime por la Conferencia Nacional de Colegios de Abogados y Facultades de Derecho relizada en Rosario en 1982 bajo el patrocinio del instituto que presido, lo que, unido al pronunciamiento de conferencias anteriores, demuestra que se trata de un tema decidido por la doctrina nacional de manera categórica.

Hago propicia la oportunidad para saludar a usted con mi mayor consideración y respeto.

ROBERTO H. BREBBIA.

Mar del Plata, 3 de junio de 1987.

Al señor presidente de la Comisión Especial de Unificación Legislativa Civil y Comercial, diputado de la Nación, doctor Osvaldo Camisar.

S/D.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el honor de dirigirnos a usted en respuesta a su atenta carta del 7 de mayo pasado en la que nos solicita nuestra opinión sobre el proyecto de unificación elaborado por la comisión que usted dignamente preside.

Si bien el análisis de la reforma va a ser tema especial de un curso de especialización que al efecto ha organizado nuestro Departamento de Derecho Civil de esta Facultad de Derecho, hemos recibido y captado la opinión de los señores profesores de nuestra casa que, junto con nuestro análisis breve, le hacemos llegar.

En primer lugar existe una coincidencia absoluta en cuanto a la necesidad de reformar el Código Civil a los efectos de obtener una legislación acorde con los tiempos que corren. Consideramos que el presente proyecto de unificación civil y comercial cumple con ese objetivo.

Específicamente se logra la modernización en el tema de la responsabilidad civil para lo que se tuvo en cuenta la opinión de la doctrina en la última década.

El tratamiento de la persona jurídica ha sido realista y sus resultados se van a ver reflejados a corto plazo y entendemos que serán más que satisfactorios.

La teoría general del contrato ha sido remozada teniendo en cuenta la última legislación internacional en la materia. Entendemos que la misma en general es acertada y responde a una valoración de la realidad captada lúcidamente en el proyecto desprendiéndose de viejas ataduras.

Se avanza también regulando nuevos contratos, incorporando derechos reales, tratando con profundidad temas de rigurosa actualidad y complejidad como el tiempo compartido.

Vemos de buen grado la unificación del tema privilegios y prescripción. La concepción de los instrumentos particulares permite la inserción en la regulación civil de modernos sistemas de comunicación e informática.

Se innova también, generando la emancipación *ministerium legis* a los dieciocho años, en esto pensamos que aún se pudo haber ido más lejos concediendo la mayoría de edad a partir de ésta.

Alguna cuestión ríspida podrá plantearse en el tema de contratos asociativos que entendemos se podrá solucionar una vez en marcha la nueva legislación.

En suma, consideramos auspicioso el presente proyecto y entendemos que esta nueva legislación colocará a la Argentina en un lugar privilegiado dentro de las naciones de avanzada jurídica.

Sin otro particular, saludamos a usted con nuestra consideración más distinguida.

GRACIELA N. MESSINA DE

ESTRELLA CUTIÉRREZ.

Secretaria

Departamento de Derecho
Civil.

MARIO STATTI.

Director

Departamento de Derecho
Civil.

Buenos Aires, 18 de junio de 1987.

Señor presidente de la Comisión Especial de Unificación Civil y Comercial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, diputado nacional doctor Osvaldo Camisar.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, en mi carácter de presidente del consejo directivo de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, a cargo del Instituto de Docencia e Investigación en Derecho Privado de la Universidad de Belgrano, a fin de poner en su conocimiento, en respuesta a su muy atenta nota, que he requerido la opinión de los señor profesores titulares de las cátedras que cubren las áreas del derecho civil y del comercial, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta Universidad, donde desde hace quince años se lo ha unificado, a los fines de la enseñanza, con relación al proyecto de unificación legislativa civil y comercial preparado por la comisión que usted tan dignamente preside.

Hasta tanto me resulte posible compatibilizar los dictámenes que reciba, y en atención a la urgencia que me señala de conocer nuestro parecer, me permito adelantar, personalmente, mi opinión francamente favorable a la sanción del proyecto tal cual está redactado, por considerar a las soluciones que se propician como las más adecuadas para el presente, y las más recomendables prospectivamente, por lo sano de su propósito moralizador, y lo conveniente que resulta la armonización de los criterios que —mayoritariamente— fueron sostenidos en casi todos los congresos, jornadas, mesas redondas, seminarios, etcétera que, a fin de analizar los temas contenidos en el proyecto tuvieron lugar en nuestro país y —con participación argentina— en el exterior.

A fin de acreditar lo expuesto, le adjunto el trabajo que me inspiró la lectura del proyecto, que he remitido para su publicación en la revista jurídica argentina "La Ley", sin perjuicio que el señor presidente disponga de la difusión que estime merezca.

Aprovecho para felicitar, por su digno intermedio, a la comisión que usted preside, por haber sabido elegir a la muy notable comisión asesora honoraria, a cuya versación y sentido común mucho ha contribuido el feliz resultado obtenido.

Saludo al señor presidente con distinguida consideración

ROBERTO M. LÓPEZ CABANA.

General Roca, 19 de junio de 1987.

Doctor Osvaldo Camisar, Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Buenos Aires.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de hacerle saber nuestra opinión respecto del proyecto de unificación legislativa civil y comercial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, conforme su atenta solicitud.

Consideramos altamente elogiable el proyecto, cuya concreción permitirá arribar a un objetivo que nuestros más ilustres doctrinarios propician desde hace décadas: la unificación del derecho privado, necesidad imposterable en épocas en que la realidad económica ha superado los esquemas que en el siglo pasado, llevaron a una legislación separada. La existencia de "zonas grises" en la actual división del derecho privado, la adopción masiva de métodos y formas de actuación comerciales por parte de quienes no reúnen los recaudos del Código de Comercio, y en fin, la propia comercialización del derecho civil, llevan a concluir en la absoluta actualidad de la iniciativa encarada por el Congreso y encomendada en su materialización a un grupo de juristas cuyo nombre es desde ya garantía de seriedad y alto nivel científico en su labor.

También manifestamos nuestro acuerdo con el método empleado, basado en la reforma del Código Civil, manteniendo como base necesaria del derecho privado, el conjunto de normas elaborado con sabiduría y técnica jurídica por Vélez Sarsfield, y que a través de más de un siglo de vigencia ha demostrado su flexibilidad para adaptarse a las cambiantes condiciones económico-sociales. La forma en que se encara la reforma es, también, a nuestro juicio positiva, en la medida que habrá de permitir a juriconsultos, operadores económicos y al pueblo en general, el acceso a la legislación privatística vigente por medio de un solo ordenamiento jurídico, en el que se condensan los fundamentos de todo nuestro sistema. Por su parte, resulta prudente la manutención de las leyes especiales que hasta hoy se consideran como parte integrante del derecho comercial, introduciendo las mínimas modificaciones necesarias para su incorporación al Código Civil, y dejando para el estudio posterior de cada institución, las reformas de fondo que pudieran merecer.

Entendemos de este modo, que la aprobación de este proyecto, que recoge el fruto de la positiva labor de doctrinarios y estudiosos del derecho, habrá de significar un avance innegable, por lo que apoyamos sin reservas su tratamiento positivo.

El escaso tiempo disponible para el examen particularizado del mismo, no nos ha permitido un examen exhaustivo. No obstante, y con las limitaciones antedichas, este Departamento de Derecho Privado, con la intervención de los profesores Félix Sosa, Héctor Peruzzi, Luis Silva Zambrano, Julio Meneses, Lorenzo W. García y Mercedes Laplacette de Rezaval, por las cátedras de derecho civil I, II, III, IV, comercial I y II, han elaborado algunas observaciones, que por las razones expuestas no agotan el estudio del tema, pero que estimamos deben ponerse en conocimiento, como colaboración a la importante tarea que se encuentra reservada al Congreso de la Nación.

Poniéndonos a vuestra disposición para un estudio más profundo, le saludamos con atenta consideración.

Mercedes Laplacette de Rezaval. — Luis E. Silva Zambrano. — Julio Meneses. — Félix Sosa. — Héctor Peruzzi. — Lorenzo W. García.

Buenos Aires, 8 de junio de 1987.

Señor presidente de la Comisión Especial de Unificación Legislativa Civil y Comercial, doctor Osvaldo Camisar.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted como integrantes de la Comisión de Derecho Civil de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, a fin de transmitirle la opinión que nos merece el proyecto de unificación legislativa civil y comercial cuya copia ha tenido la gentileza de remitirnos.

Una primera aproximación indica que la envergadura del proyecto nos impide en esta instancia abocarnos al estudio pormenorizado de sus instituciones, tarea para la que ofrecemos nuestra decidida colaboración.

En cambio, lo que resulta evidente es que viene a satisfacer una necesidad común a las legislaciones más modernas, ya que dada la complejidad económica y social de la vida actual, el derecho civil se ha visto obligado a dar nueva vida a las instituciones acudiendo a la facilitación de las relaciones jurídicas y por tanto, nos parece plausible la modificación del derecho privado que responde a esa realidad.

La idea de la unificación ha plasmado con dos alcances, uno amplio, referido a la unificación total del derecho civil y comercial y otro más restringido que se limita a obligaciones y contratos, y aún más restringidamente, al estudiarse la posibilidad de unificar el régimen de las sociedades civiles y comerciales.

Ejemplos de una y otra tendencia encontramos en la legislación comparada, cuyas soluciones más acertadas han tenido muy en cuenta los redactores del presente proyecto, tratando de hacerlas acordes con nuestro sistema e idiosincrasia.

Circunscribiendo el análisis a nuestro país, esta inquietud no es reciente y ha encontrado eco en la doctrina a través de autores, jornadas y congresos.

En ese orden de consideraciones podemos citar el Primer Congreso Argentino de Derecho Comercial ce-

lebrado en Buenos Aires en 1940 cuyo segundo tema de estudio fue el Código Unico de Obligaciones, obteniendo mayoría la ponencia que propiciaba dicho código.

También en la VI Conferencia Nacional de Abogados celebrada en La Plata en 1959 se apoyó la creación de un Código Unico de Derecho Privado, previamente precedido por un Código Unico de Obligaciones y Contratos.

Cabe destacar lo resuelto en el III Congreso Nacional de Derecho Civil celebrado en Córdoba en 1961, donde se aprobó por unanimidad: "Que se unifique el régimen de las obligaciones civiles y comerciales, elaborando un cuerpo único de reglas sobre obligaciones y contratos, como libro del Código Civil".

La misma línea unificadora se exteriorizó en el Congreso Nacional de Derecho Comercial (1969) y en la Conferencia Nacional de Abogados y Facultades de Derecho (1982) ambos realizados en Rosario.

En las IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil —Mar del Plata 1983— las ponencias y exposiciones fueron más allá del tema propuesto de las sociedades aconsejando esa unificación para las obligaciones y contratos.

La Asociación de Abogados no ha sido ajena a esta inquietud generalizada, como lo prueba el temario y las propuestas aprobadas en el Congreso Argentino de Derecho Comercial, organizado por esta institución en 1984 donde se coincidió en el objetivo básico de modernización del Derecho Comercial y en la consecuente necesidad de generar dentro de éste las condiciones para la unificación de las normas que regulan las obligaciones, la parte general de los contratos y la prescripción.

El presente proyecto de unificación legislativa civil y comercial ha optado por el alcance amplio de la unificación, enrolándose en las concepciones mayoritarias que han llegado a la conclusión que el régimen diferenciado entre lo civil y comercial ha perdido hoy su razón de ser, no sólo porque lo que algunos autores llaman "civilización del Derecho Comercial", sino también por los efectos notorios que la actividad empresarial tiene sobre la realidad cotidiana que las leyes deben aprehender y regular.

De ahí que coincidimos con el espíritu que inspira esta modificación, considerando que ciertas instituciones y principios comerciales —tradicionalmente reservados a los que ejercían esa actividad— penetran progresivamente en el ámbito del Derecho Civil, con lo que al mismo tiempo que el Derecho Comercial va perdiendo su sustancia, el Derecho Civil está cada vez más cerca de las exigencias de la vida económica.

Es más, resulta oportuno recordar que el maestro Lafaille decía: "La división entre el Derecho Civil y el Derecho Comercial no es una cosa tan absoluta. En las mismas actividades humanas ¿hasta dónde un negocio cualquiera, una empresa, se puede llamar civil y hasta dónde se puede denominar comercial? Esta división entre lo civil y lo comercial no está tanto en la realidad de las cosas como en el cerebro de los hombres..."

Sin otro particular y reiterando nuestro apoyo a tan loable propósito, lo saludamos muy atentamente.

III. Solicitud de modificaciones al dictamen de la Comisión Especial de Unificación Legislativa Civil y Comercial

Buenos Aires, 7 de julio de 1987.

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos Pugliese.

S/D.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos al señor presidente, y por su intermedio a la Honorable Cámara, a fin de comunicarle que la Comisión Especial de Unificación Legislativa Civil y Comercial, en su reunión del día de la fecha, ha resuelto solicitar en los términos del artículo 106 del Reglamento de la Honorable Cámara, la modificación del Orden del Día Nº 1064, y su anexo de fecha 16 de junio de 1987 como a continuación se indica:

Anexo I. Sustitúyese el texto del artículo 34 del Orden del Día Nº 1064 por el siguiente:

Artículo 34: Con sujeción a las disposiciones especiales que les fuesen aplicables:

1. Se reputan actos de las personas jurídicas los que realicen sus representantes en los límites de sus facultades.
2. Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas de las que se sirven o tienen a su cuidado, con los mismos alcances que las personas físicas.
3. Las personas jurídicas tienen, en general, la misma capacidad que las personas de existencia visible para los fines de su creación.
4. Pueden ser constituidas o continuar con un solo miembro o ninguno, mientras tengan aptitud para funcionar.
5. La medida y modalidades de la separación patrimonial de una persona jurídica es la que resulta en cada caso de la ley.
6. En principio, ninguno de sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer, en cuanto tales, las deudas de la persona jurídica.

Anexo I. Sustitúyese el texto del primer párrafo bajo el acápite "Reformas al Libro Primero - IV del Orden del Día Nº 1064 por el siguiente:

Modifícanse los artículos 51, 55, 90, 94, 126, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 168, 264 quater y 459, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Anexo I. Incorpórase al Orden del Día Nº 1064, después de lo dispuesto respecto del artículo 94 del Código Civil, lo siguiente:

Artículo 126: Son menores las personas que no hubieran cumplido la edad de dieciocho años.

Artículo 127: Son menores impúberes los que aún no tuviesen la edad de catorce años cumplidos,

LILY R. FLAHERTY
Vicepresidenta

NELLY MINYERSKY MENASSE
Presidenta

LIDIA B. VIGGIOLA
Secretaria

y adultos los que fuesen de esta edad pero no hubiesen cumplido la edad de dieciocho años.

Anexo I. Sustitúyese en el Orden del Día Nº 1064 el texto de los artículos 55, 128, 131, 133 y 135, e incorpórase el de los artículos 134, 168, 264 quater y 459 del Código Civil, como a continuación se indica:

Artículo 55: Los menores adultos que trabajen por cuenta propia o en relación de dependencia en los términos autorizados por disposiciones específicas tendrán la administración y disposición de los bienes que obtengan por su trabajo.

Artículo 128: Los menores se emancipan por matrimonio contraído antes de alcanzar la mayoría de edad. La emancipación es irrevocable, aunque el matrimonio se disuelva, tenga o no hijos.

Artículo 131: La emancipación habilita para todos los actos de la vida civil, salvo lo dispuesto en los artículos 134, 135, 168 y 3.614.

Artículo 133: Si el matrimonio hubiera sido celebrado sin la autorización necesaria, el contratante que la hubiera precisado será reputado menor no emancipado respecto de la administración y disposición de los bienes recibidos o que recibiese a título gratuito.

Artículo 134: Los menores emancipados sólo podrán disponer de los bienes adquiridos por título gratuito, antes o después de la emancipación, con el asentimiento de su cónyuge mayor de edad o, en defecto de este asentimiento, con autorización judicial.

Artículo 135: Los menores emancipados no pueden, ni aun con autorización judicial:

1. Aprobar cuentas de sus tutores, y darles finiquito.
2. Disponer a título gratuito de bienes que hubieran adquirido en igual carácter.
3. Afianzar o de otra manera garantizar obligaciones de otros.

Art. 168: Los menores de edad, aunque estén emancipados, no podrán casarse entre sí ni con otras personas sin el asentimiento de sus padres o de quien ejerza la patria potestad, o sin el de su tutor cuando ninguno de ellos la ejerza o, en su defecto, el del juez.

Artículo 264 quater: En los casos de los incisos 1, 2 y 5 del artículo 264 se requerirá el consentimiento expreso de ambos padres para los siguientes actos:

1. Autorizar a la hija para contraer matrimonio.
2. Autorizar a los hijos para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad.
3. Autorizarlos para salir de la República.
4. Autorizarlos para estar en juicio.
5. Disponer de los bienes inmuebles y derechos o muebles registrables de los hijos cuya administración ejercen, con autorización judicial.
6. Ejercer actos de administración de los bienes de los hijos, salvo que uno de los padres delegue la administración conforme lo previsto en el artículo 294.

En todos los casos, si uno de los padres no diera su consentimiento, o mediara imposibilidad para prestarlo, resolverá el juez lo que convenga al interés familiar.

Art. 459: En cualquier tiempo, el Ministerio de Menores o el menor mismo si fuese mayor de catorce años, cuando hubiese dudas sobre la buena administración del tutor por motivos que el juez tenga por suficientes, podrá pedirle que exhiba las cuentas de la tutela.

Anexo I. Déjase sin efecto las modificaciones propuestas a los artículos 303 y 455 del Código Civil.

Anexo I. Sustitúyese el texto del artículo 750 del Orden del Día Nº 1064 por el siguiente:

Artículo 750: El pago debe ser hecho el día del vencimiento de la obligación, salvo que de los usos resulte que debe hacerse el día siguiente hábil si el de vencimiento no lo fuera. Se aplicará lo dispuesto en el artículo 27, salvo que de los usos resulte que la persona a quien debe hacerse el pago no está obligado a prestar su cooperación después de cierta hora.

Anexo I. Instrumentos particulares y privados. II - Sustitúyese el primer párrafo bajo este acápite del Orden del Día Nº 1064 por el siguiente:

Modifícase el Título V, Sección Segunda. Deróganse los artículos 1.027 al 1.036. Modifícanse los artículos 1.012 a 1.026, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Sustitúyese el texto del artículo 1.026 de la Orden del Día Nº 1064 por el siguiente:

Artículo 1.026: Los registros públicos, y organismos con facultades para ello, podrán dictar disposiciones reglamentarias relativas a los estados contables.

Anexo I. Artículo 1.113. Sustitúyese el texto del artículo 1.113 del Orden del Día Nº 1064 por el siguiente:

Artículo 1.113: La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene bajo su cuidado.

En los supuestos de daños causados con las cosas del dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiera sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad, acreditando la incidencia de una causa ajena al riesgo o vicio.

Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable.

Lo previsto para los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa es aplicable a los daños causados por actividades que sean riesgosas por su naturaleza o por las circunstancias de su realización.

En los casos de atribución objetiva del deber de reparar el daño, la indemnización se limitará a un equivalente a dos mil argentinos oro por cada damnificado directo. Dicho límite no será aplicable si el demandado (1) no prueba que de su parte no hubo culpa, o que adoptó todas las medidas técnicas idóneas para evitar el daño, o (2) debió razonablemente haberse asegurado.

Anexo I. Artículo 1.192. Sustitúyese el texto del artículo 1.192 del Orden del Día Nº 1064 por el siguiente:

Artículo 1.192: Sólo podrá disponerse la compulsa de los libros por el juez de la causa en cuanto tengan relación con el punto o cuestión de que se trata.

El reconocimiento de los libros exhibidos se verificará en presencia de su dueño o de la persona que lo represente, y se contraerá a los asientos que tengan relación con la cuestión que se ventila.

La exhibición general de libros sólo podrá disponerse en los juicios de sucesión, comunidad general de bienes, concurso, y en los demás casos especialmente previstos por la ley.

Anexo I. Artículo 1.197. Sustitúyese el texto del artículo 1.197 del Orden del Día Nº 1064 por el siguiente:

Artículo 1.197: Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la que deben someterse como a la ley misma si las circunstancias que determinaron para cada una de ellas su celebración, y fueron aceptadas por la otra o lo hubieran sido de haberse exteriorizado, subsisten al tiempo de la ejecución.

Los contratos deben celebrarse, ejecutarse e interpretarse de buena fe y de acuerdo con lo que, verosímelmente, las partes entendieron, o pudieron entender obrando con cuidado y previsión.

Para la interpretación.

1. Se tomará especialmente en cuenta la literalidad de los términos utilizados, cuando proceda la interpretación restrictiva.
2. En los otros casos se tomará especialmente en cuenta:
 - a) La finalidad y economía del contrato, de acuerdo con lo que fue la intención común de las partes al contratar;
 - b) La intención de cada una de las partes al contratar en cuanto la otra parte la hubiera conocido, u obrando con la debida diligencia hubiera debido conocerla;
 - c) El sentido que razonablemente hubiera dado a la manifestación de cada una de las partes una persona en la situación y de las condiciones de la otra;
 - d) Los actos de cada parte anteriores a la conclusión del contrato, incluidas las tratativas preliminares y las prácticas antes establecidas entre ellas y en sus otros ne-

gocios, con cuyo mantenimiento hubiera razonablemente podido contar la otra parte;

- e) La conducta de las partes después de concluido el contrato, y en particular la vinculada con su ejecución;
- f) Los usos y costumbres del lugar de celebración del contrato. Las cláusulas del tipo de las previstas en el artículo 1.157, incisos 1 y 2, no constituyen usos o costumbres, aunque sean de práctica.

3. En los contratos predisuestos:

- a) Las cláusulas especiales prevalecen sobre las generales, aunque éstas no hayan sido canceladas;
- b) Las cláusulas incorporadas prevalecen sobre las preexistentes;
- c) Las cláusulas ambiguas serán interpretadas contra el predisponente;
- d) Si el no predisponente fuese una persona física, la interpretación se hará en sentido favorable para él. Se presumirá su liberación si es dudosa la existencia de una obligación a su cargo; cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación se estará a la que le sea menos gravosa.

Anexo I. Artículo 1.341. Sustitúyese el texto del artículo 1.341 del Orden del Día Nº 1064 por el siguiente:

Artículo 1.341: "Pacto de preferencia" es aquel por el cual el vendedor tiene derecho a ser preferido por el tanto si el comprador quisiera vender la cosa o darla en pago.

Este pacto no puede convenirse por un plazo mayor de tres años contados desde la celebración del contrato.

El comprador debe comunicar oportunamente al vendedor su decisión de vender o dar la cosa en pago y todas las particularidades de la operación proyectada.

Salvo que otro plazo resulte de la convención, los usos o las circunstancias del caso, el vendedor deberá ejercer su derecho de preferencia dentro de los diez días de recibida dicha comunicación.

Se aplican las reglas de la compra y venta bajo condición resolutoria.

Anexo I. Sustitúyese el texto del artículo 1.346 del Orden del Día Nº 1064 por el siguiente:

Artículo 1.346: Respecto de inmuebles o muebles registrables, los pactos sujetos a las reglas de la condición resolutoria sólo serán oponibles a los terceros interesados de buena fe y a título oneroso cuando su existencia hubiera sido publicitada por el registro correspondiente.

También tendrá tal efecto el pacto de reserva de dominio referido a máquinas cuyo valor sea superior a cien argentinos oro, cuando su existencia fuera publicitada por el Registro de Créditos Prendarios del lugar de ubicación de la cosa.

Anexo I. Libro segundo. Título VII - De los contratos asociativos.

Déjase sin efecto el capítulo IV - "De las sociedades y asociaciones constituidas en el extranjero", artículos 1.691 a 1.695 del Orden del Día N° 1064.

En consecuencia la primera parte del título VII del Orden del Día N° 1064 queda modificada de la siguiente manera:

I. Modifícase el título VII de la sección tercera y los artículos 1.648 a 1.690, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

La parte relativa al título "De los contratos asociativos" del Código Civil queda en consecuencia, modificada de la siguiente manera:

II. Deróganse los artículos 1.691 a 1.788 bis.

Anexo I. Sustitúyese el texto del artículo 1.993 del Orden del Día N° 1064 por el siguiente:

Artículo 1.993: Las personas físicas sólo pueden dar fianza hasta una cantidad máxima de dinero, determinada al tiempo de constituirla. Esta cantidad podrá estar sujeta a ajuste por depreciación monetaria.

Las personas físicas no pueden otorgar fianzas solidarias, ni renunciar a causales de extinción de la fianza o a los beneficios de excusión o división.

Anexo I. Sustitúyese el texto del artículo 2.000 del Orden del Día N° 1064 por el siguiente:

Las personas jurídicas pueden renunciar a los beneficios de excusión y división.

No tienen estos beneficios las personas jurídicas fiadoras de una obligación natural, ni los fiadores solidarios.

Anexo I. Sustitúyese el texto del artículo 2.238 del Orden del Día N° 1064 por el siguiente:

Artículo 2.238: Quien presta el servicio responde por la idoneidad de la custodia del local y por la integridad de la caja y lo en ella contenido salvo, en este último caso, vicio propio de la cosa.

Anexo I. Artículo 2.250. Sustitúyese el texto del artículo 2.250 del Orden del Día N° 1064 por el siguiente:

Artículo 2.250: Si el mutuo no es de dinero el mutuante responde frente al mutuario por los daños causados por la cosa prestada.

Anexo I. Artículo 3.234. Sustitúyese el texto del artículo 3.234 del Orden del Día N° 1064 por el siguiente:

Artículo 3.234. Si el crédito dado en prenda o parte de él se hiciera exigible y no fuese pagado, el acreedor prendario podrá enajenar forzosamente el crédito prendado según las reglas establecidas para la prenda de cosas muebles.

Si el crédito se origina en un contrato con prestaciones recíprocas, en caso de incumplimiento del constituyente el acreedor podrá enajenar forzada-

mente la participación de éste en dicho contrato, sujeto a las limitaciones contractuales aplicables. Si la cesión de la participación del constituyente estuviera sujeta al asentimiento de la otra parte de tal contrato, el mismo será suplido por el juez si fuera negado abusivamente.

Si el concurso del constituyente no continuara con el contrato a que se refiere el párrafo anterior, éste podrá ser continuado por el acreedor prendario o quien él designe para hacerlo. Es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior respecto de las limitaciones contractuales y la falta de asentimiento de la otra parte del contrato.

Por participación se entiende el conjunto de derechos y obligaciones derivados del contrato.

Anexo I. Artículo 3.884. Sustitúyese el texto del Orden del Día N° 1064 por el siguiente:

Artículo 3.884: Lo dispuesto en este título deroga los privilegios establecidos por leyes especiales, salvo las de navegación, aeronavegación, minería, entidades financieras y contrato de trabajo.

Anexo I. Artículo 3.885. Sustitúyese el texto del Orden del Día N° 1064 por el siguiente:

Artículo 3.885: Tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes que en cada caso se indican:

1. Los gastos del litigio sobre el producido de un proceso no concursal, sea judicial o extrajudicial.
2. Lo adeudado al retenedor por razón de la cosa retenida, sobre ésta o, en su caso, sobre las sumas depositadas o seguridades constituidas para liberarla.
3. Los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa, incluyendo las expensas comunes en la propiedad horizontal, sobre aquélla mientras se encuentre en poder del deudor.
4. El precio de las semillas y los demás gastos de la cosecha, sobre su producido.
5. Los créditos por saldo de precio garantizados con hipoteca o prenda.
6. Los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por seis meses, y los provenientes de indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad o despido, falta de preaviso y fondo de desempleo, y los intereses de todos ellos por el plazo de dos años desde la fecha de la mora, gozan de privilegio especial sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias que integran el establecimiento donde haya prestado sus servicios o que sirvan para la explotación de que aquél forma parte. El mismo privilegio recae sobre el precio del fondo de comercio, el dinero, títulos de crédito o depósitos en cuentas bancarias o de otro tipo que sean directo resultado de la explotación, salvo que hubiesen sido recibidos a nombre y por cuenta de terceros.

7. Los créditos garantizados con hipoteca, prenda, *warrant* y los correspondientes a debentures con garantía especial o flotante, incluyendo los intereses correspondientes a los dos años anteriores a la iniciación de la ejecución forzada, y los que corran durante ésta.
8. Los impuestos y tasas que se aplican particularmente a determinados bienes, por dos años, sobre éstos.
9. Los arrendamientos vencidos, por tres meses, sobre las cosas de propiedad del locatario que sean pertenencias de la finca arrendada, incluyendo la cosecha. El privilegio se extiende a todo lo adeudado por razón de la locación.

Anexo I. Artículo 3.889. Sustitúyese el texto del artículo 3.889 del Orden del Día Nº 1064 por el siguiente:

Artículo 3.889: Tienen privilegio general sobre todos los bienes del deudor:

1. Los acreedores cuyos créditos provienen de gastos necesarios para la seguridad, conservación y administración de los bienes y para diligencias judiciales y extrajudiciales de beneficio común, según la ley respectiva.
2. Los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por seis meses y cualquier otro derivado de la relación laboral. Se incluyen los intereses por el plazo de dos años a contar desde la fecha de la mora y las costas judiciales, en su caso.
3. Si el concursado es una persona física:
 - a) Sus gastos funerarios, según el uso;
 - b) Los gastos de enfermedad durante sus últimos seis meses de vida;
 - c) Los gastos de necesidad en alojamiento, alimentación y vestimenta del deudor y su familia durante los últimos seis meses;
 - d) Las obligaciones alimentarias del deudor, durante los últimos seis meses.
4. Las deudas por capital anteriores a la presentación en concurso o declaración de quiebra a) con instituciones o sistemas de seguridad y previsión social, y b) por impuestos o tasas.

Anexo I. Artículo 3.892. Sustitúyese el texto del Orden del Día Nº 1064 por el siguiente:

Artículo 3.892: El derecho de retención es la facultad que corresponde al tenedor de una cosa ajena para conservar la posesión de ella hasta el pago de lo que le es debido por razón de esa misma cosa.

Anexo I. Sustitúyese el texto del artículo 3.901 del Orden del Día Nº 1064 por el siguiente:

Artículo 3.901: Todas las acciones personales son prescriptibles y todas las acciones reales son imprescriptibles salvo, en ambos casos, que lo contrario resulte de una disposición de la ley o de la naturaleza del derecho.

Transcurridos veinte años desde la celebración del acto no se admitirá ninguna acción personal, aunque sea reipersecutoria, tendiente a privarlo de efectos por nulidad, revocación o cualquier otra causa fundada en hechos anteriores o contemporáneos con su celebración.

Anexo II. Ley 19.550. Sustitúyense los dos primeros párrafos bajo este acápite del Orden del Día Nº 1064 por los siguientes:

I. Deróganse los artículos 17, 25, 26, 361 al 366 y 384.

II. Modifícanse los artículos 1, 5, 6, 21 al 24, 30, 34, 35, 61, 74, 75, 77, 94, 146, 165, 367 y 377 los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Quedan sin efecto, con consecuencia, las modificaciones propuestas a los artículos 62 a 65 y 123 de la ley 19.550.

Modifícase el artículo 61 de la ley 19.550, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 61: Contabilidad. Las sociedades deben llevar contabilidad de acuerdo con lo dispuesto por el Código Civil y demás disposiciones y reglas técnicas aplicables.

Anexo II. VI - Navegación: Sustitúyese el texto bajo este acápite del Orden del Día Nº 1064 por el siguiente:

Deróganse los artículos 622 y 630 de la ley 20.094.

Agréganse al final de la ley 20.094, con numeración correlativa comenzando con el número 630, los actuales artículos 891 y 892; 907, 919, 926, 984 a 996; 999 a 1.017/5 del Código de Comercio, en el estado de vigencia en que se pudieran encontrar.

Anexo II. Sustitúyese el texto bajo el acápite "Ley 20.266" del Orden del Día Nº 1064 por el siguiente:

I. Derógase el artículo 28 de la ley 20.266, en cuanto dispone su incorporación al Código de Comercio.

II. Sustitúyese el artículo 30 de la ley 20.266 por el siguiente:

Artículo 30: Corredores. Sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación local pertinente, es aplicable al ejercicio profesional del corretaje lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de esta ley.

III. Incorpóranse a la ley 20.266 los siguientes artículos 31 y 32.

Artículo 31: Para ser corredor se requieren las siguientes condiciones habilitantes:

- a) Ser mayor de edad;
- b) Poseer título de enseñanza secundaria expedido o revalidado en la República con arreglo a las reglamentaciones vigentes;

- c) Aprobar el examen de idoneidad para el ejercicio de la actividad, que se rendirá ante cualquier tribunal de alzada de la República con competencia en materia comercial, ya sea federal nacional o provincial, el que expedirá el certificado habilitante en todo el territorio del país. A los efectos del examen de idoneidad se incorporará al tribunal un representante del órgano profesional con personería jurídica de derecho público no estatal, en las jurisdicciones que exista. El examen deberá versar sobre nociones básicas acerca de la compraventa civil y comercial.

Artículo 32: Están inhabilitados para ser corredores:

- a) Quienes no pueden ejercer el comercio;
- b) Los fallidos y concursados cuya conducta haya sido calificada como fraudulenta o culpable, hasta 5 años después de su rehabilitación;
- c) Los inhibidos para disponer de sus bienes;
- d) Los condenados por delitos dolosos incompatibles con la función que reglamenta la presente ley; hasta después de diez años de cumplida la condena;
- e) Los excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la actividad por sanción disciplinaria;
- f) Los comprendidos en el artículo 152 bis del Código Civil.

Anexo II. Ley 20.744 (t.o.). Sustitúyese el texto bajo este acápite del Orden del Día N° 1064 por el siguiente:

Deróganse los artículos 270 y 273.

Anexo II. Leyes 21.768 y 22.316.

Modifícase el Orden del Día N° 1064 de la siguiente manera:

Deróganse la ley 21.768, la ley 22.316 y toda otra disposición vigente en cuanto se opongan a lo dispuesto por el artículo 1.651, nueva redacción, del Código Civil.

OSVALDO CAMISAR.

IV. Notas explicativas del proyecto de ley sobre unificación de la legislación civil y comercial de la Nación.

Introducción

§ 1. El derecho privado, como sistema, se encuentra en el Código Civil.

Poco es lo que queda del contenido original del Código de Comercio: sólo vestigios del estatuto de los comerciantes y algunas reglas especiales en materia de contratos que no responden, por lo general, a ninguna razón actual de política legislativa. Lo que hoy se conoce como Código de Comercio es, principalmente, la presentación conjunta de una variedad de leyes especiales.

§ 2. El método elegido para la unificación del derecho privado fue:

1. Independizar del Código de Comercio la legislación que le estaba incorporada.
2. Modificar el Código Civil de modo que supla la derogación del Código de Comercio y modernizar algunos de sus contenidos.
3. Modificar ciertas leyes especiales para adecuarlas a la nueva situación.
4. Derogar el Código de Comercio.

I. — El proyecto de ley

§ 1. La propuesta de reforma está contenida en un proyecto de ley, al cual se agrega un anexo con reformas al Código Civil, y un segundo anexo con reformas a la legislación complementaria.

§ 2. Dado que en el Código Civil existe una extensa parte general de las obligaciones y de los contratos, en muchos casos no se entendió necesario reiterar, en figuras específicas, soluciones ya contenidas en esas reglas generales.

Para evitar dificultades hermenéuticas el proyecto de ley establece que la derogación de una disposición legal no debe ser interpretada como rechazo de la regla en ella contenida, si esta regla resulta de otras disposiciones legales.

§ 3. La simplicidad y economía de nombres, figuras y reglas no es sólo una característica del derecho clásico, sino también, como señalaba Ihering, una exigencia del método jurídico. Ello es lo que convirtió a nuestro derecho privado en un "sistema".

La tendencia "anticodificadora" de las últimas décadas, con la proliferación de denominaciones, legislaciones especiales y "autonomías", respondió a diversas causas, pero la tarea actual, y la de los próximos tiempos, consiste en incorporar "sistemáticamente" al tronco del derecho privado cuanto pueda haber de realmente novedoso en los nombres nuevos.

La reforma trata de ajustarse a estas ideas tanto como la prudencia y otras consideraciones particulares señalaron aconsejable.

§ 4. El proyecto de ley, finalmente, establece que la modificación de la legislación sustantiva no afectará la actual competencia de los tribunales nacionales, sobre cuyo reordenamiento existen iniciativas parlamentarias independientes.

II. — Las reformas al Código Civil

A. Intención y método

§ 1. La reforma incorpora al Código Civil normas que se encontraban en el de Comercio, y trata de armonizarlas con la legislación complementaria al tiempo que moderniza algunos de sus contenidos.

§ 2. Se mantienen el método del Código Civil, y la numeración de sus artículos.

§ 3. Por aplicación de las reglas generales que ya se encontraban en el Código, no se necesitaron más artículos que los que se derogan para dar cabida a los nuevos contenidos.

Quedan, por el contrario, números de artículos sin utilizar, pero ello no entorpecerá la facilidad de con-

sulta del Código, que fue uno de los cuidados de los trabajos.

§ 4. En la mayor parte de los casos se adoptó la técnica de sustituir a un título entero del Código por otro de nueva redacción, aunque no todas las soluciones incorporadas difieran de las anteriores.

En ocasiones, esta técnica fue impuesta por la profundidad y extensión de los cambios, como en el caso de las sociedades. En otras, fue elegida para evitar las imprecisiones que inevitablemente resultan de insertar nuevas redacciones en un contexto próximo escrito en un estilo tan personal como el de Vélez Sarsfield, que la reforma no intentó imitar.

§ 5. En otros casos, por el contrario, se utilizó la técnica "de la glosa", con sustituciones parciales, intercaladuras y trasposiciones.

§ 6. En los trabajos preparatorios se consultaron los antecedentes disponibles sobre las diversas instituciones, en especial el valioso *Anteproyecto de reformas* de Juan Antonio Bibiloni, el proyecto de reforma de 1936 y el anteproyecto de 1954.

También se consultó con especial frecuencia a los códigos civiles alemán, francés, italiano y suizo, y se tuvo presente el derecho anglo-estadounidense, particularmente las partes receptadas por la llamada "Nueva Lex Mercatoria".

De la consulta al Derecho Comparado resultó, de manera no planeada, una más extensa aunque crítica utilización del Código Civil italiano, que mostró en mayor cantidad de casos proximidad con nuestro ambiente y pensamiento jurídicos.

B. Algunos aspectos generales

§ 1. La reforma tuvo en cuenta que el modo moderno de organización de una actividad económica es la asunción de la forma de una corporación, usada esta expresión de modo que comprenda a las sociedades por acciones y por cuotas.

Quienes ejercen una actividad económica en forma individual se desenvuelven en el ámbito del pequeño comercio, que debe ser liberado de las cargas de inscripción en un registro público y de llevar contabilidad. En razón de ello la reforma se limitó a establecer estas cargas sobre los titulares de un "establecimiento comercial, industrial o de servicios", según una fórmula próxima a la de los derechos alemán y suizo.

§ 2. La unificación del derecho privado no significa necesariamente quitar significación a la calidad de las partes de una relación jurídica. La unificación es, por el contrario, la condición para que puedan formularse distinciones de mayor utilidad que las que se abandonan.

Modernamente se tiende a distinguir entre las contrataciones que realizan las empresas entre sí y con el público. Esta propuesta de política jurídica debe ser traducida a la terminología propia del derecho privado, dado que "público", "consumidor" y "empresa" no son, en cuanto tales, "sujetos de derecho", y ni siquiera términos definibles de manera que no hagan necesaria una investigación de hecho para determinar, en cada caso, si se satisfacen las condiciones de esa definición.

Resulta preferible, en consecuencia, recurrir a la distinción entre personas físicas y personas jurídicas.

Si bien no todas las personas jurídicas son una "empresa", normalmente nadie se encuentra organizado como "persona jurídica" sino como resultado de una decisión consciente y de un accionar deliberado, y para constituirse y funcionar como tal ha tenido y debe mantener alguna forma de asesoramiento legal.

§ 3. En la reforma, la protección a las personas físicas se otorga mediante un régimen tuitivo consistente en la prohibición de realizar determinados actos.

En ciertas ocasiones se utiliza como criterio para el establecimiento de obligaciones el hecho que la persona que realiza el acto se dedique a ellos profesionalmente.

§ 4. Se reformulan las reglas sobre "persona jurídica", que habían creado nudos teóricos que enredaban a la doctrina en debates supuestamente metafísicos, con olvido del carácter meramente clasificatorio o instrumental que esta expresión debe tener.

§ 5. Se modifican ciertas reglas en materia de domicilio, y se derogan las que se referían al de la mujer casada.

§ 6. Se establece que la mayoría de edad se alcanza a los dieciocho años, conforme la dominante y creciente mayoría de la legislación contemporánea comparada.

§ 7. Se desarrolla la categoría de los "instrumentos particulares", que permite aceptar las reglas sobre libros de contabilidad y comprende, no sólo a los instrumentos no firmados, sino también a los registros visuales o auditivos de cosas o de hechos y, cualquiera sea el medio empleado, los de pensamientos o información. Se abre así la clase a los métodos electrónicos y otros de uso contemporáneo, y a los que puedan desarrollarse en el futuro.

§ 8. Se introducen al Código Civil reglas sobre contabilidad y confección de estados contables.

§ 9. Se unifica para todos los fines el régimen de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, reclamada por la doctrina, que traerá una importante simplificación adicional en el derecho privado jurídico.

§ 10. Se abren nuevas fuentes de las obligaciones: la declaración unilateral de voluntad y el enriquecimiento sin causa. Las reglas generales sobre títulos valores se introducen como un caso de obligación resultante de una declaración unilateral de voluntad, como lo hace el Código Civil italiano.

§ 11. Las reglas sobre formación de los contratos son remozadas, y se las adecua a las de la Convención de Viena sobre Compraventas Internacionales, ratificada por la Argentina, que entrará en vigencia en enero de 1988.

§ 12. El tráfico contemporáneo requiere que se derogue la prohibición de ciertos pactos sobre muebles.

Que estos pactos no deban tener eficacia "real" o reipersecutoria, es decir, no puedan ser opuestos a terceros de buena fe y a título oneroso sin previa entrega de la posesión o de la publicidad que resulta de una inscripción registral, no implica que ellos no deban ser permitidos como una convención entre las partes, con eficacia obligacional.

Con el alcance señalado estos pactos son permitidos por la reforma. Su regulación se encuentra en los Títulos de la Compra y Venta y del Dominio Imperfecto.

El principio que estos pactos deben carecer de eficacia reipersecutoria es una necesidad del tráfico. En ciertos casos es posible, sin embargo, formular una excepción cuando el pacto ha sido previamente registrado, lo que atribuye al adquirente la posibilidad de conocer su existencia antes de la adquisición del bien. Pero la carga de obtener esta información no puede ser colocada sobre el público en general y para cualquier tipo de bienes. De allí que la reforma siguiendo al Código Civil italiano, restrinja la eficacia de estos pactos a los casos en que ella recaiga sobre máquinas cuyo valor excede los cien argentinos oro.

§ 13. El suministro es regulado dentro del Título de la Compra y Venta. La certeza que se otorga, bajo ciertas condiciones, a la exigibilidad de cumplimiento específico de su prestación por el suministrante, facilitará grandes proyectos de inversión con recuperación a largo plazo.

§ 14. Toda situación de dominio fiduciario o revocable debe ser manifestada en los estados contables.

También en otras circunstancias se impone la obligación de hacer saber a través de esos estados, que constituyen un instrumento eficiente de publicidad moderna.

Es cierto que no todos leen los estados contables de aquellos con quienes contratan, pero también es cierto que quienes no lo hacen tampoco pedirían informes a un registro, aunque éste fuese eficiente.

§ 15. Se unifica el régimen de las sociedades.

§ 16. La figura del mutuo es abierta para que encuentre libremente su frontera con los negocios asociados.

Sus nuevas reglas unidas, entre otras, a las que se establecen para la prenda de créditos y el contrato de suministro, posibilitarán la llamada "financiación de proyectos" y otras formas de asunción de parte del riesgo del proyecto por el financista, que hasta el presente planteaba dificultades muchas veces insuperables.

§ 17. Las disposiciones sobre representación, poder, mandato y consignación son agrupadas y totalmente reformuladas.

§ 18. Son totalmente reformuladas las reglas sobre cesión de créditos (que ahora pasan a ser reglas sobre Cesión de Derechos, en general), fianza y depósito que se encontraban en el Código Civil.

§ 19. Se incorporan al Código Civil, totalmente reformuladas, las reglas sobre transporte, cuenta corriente mercantil y cuenta corriente bancaria.

§ 20. La prenda es objeto de una nueva regulación, que tiene en cuenta las formas modernas del tráfico, en especial la prenda de créditos resultantes de contratos bilaterales de largo plazo, en los cuales los créditos dependen de la ejecución futura de los trabajos y su posterior facturación. Se remueve de esta manera la inseguridad jurídica que resultaba de las disposiciones anteriores para la financiación (generalmente internacional) de grandes proyectos, que se traducían en condiciones más gravosas cuyo costo final debía ser finalmente trasladado al público.

§ 21. Se establecen las bases legales para formas modernas de propiedad, tales como la de los clubes de

campo, centros de compra, cementerios privados, y también para las organizaciones denominadas "de tiempo compartido".

§ 22. Se incorpora el derecho real de superficie.

§ 23. Se unifican también las reglas sobre prescripción y sobre privilegios.

§ 24. El estilo con que las reglas son formuladas no alentará, se confía, los excesos de la llamada "jurisprudencia conceptual", ni los de una vocación "reglamentarista" que no tiene cabida en un Código Civil, destinado a expresar un esfuerzo de síntesis, y no a servir como vehículo de entusiasmos regulatorios.

§ 25. El Código Civil, por otra parte, debe estar dirigido a todos los ciudadanos, y no solamente a iniciados. De allí que en su redacción sea necesario evitar innecesarios tecnicismos, objetivo que la reforma sólo pudo realizar parcialmente debido, entre otras razones, a las dificultades en insertar nuevas soluciones en contextos que permanecen estructuralmente inalterados.

C. De las modificaciones en particular

De la interpretación de la ley

El trasiego de las normas mercantiles al Código Civil, ahora único, exigía asignar un lugar a los usos y costumbres en la interpretación de la ley. Le es atribuido por la nueva redacción del artículo 16 y el mantenimiento del texto del artículo 17. No se toma, pues, partido respecto de la eficacia o ineficacia de la costumbre *contra legem* y se acepta, con suficiente apoyo doctrinario, que el tema de su virtualidad corresponde a la teoría general del derecho antes que a la autoridad del legislador.

De las personas jurídicas

§ 1. La reforma dispone que la denominación de "persona jurídica" se aplica a todo "sujeto de derecho" que no sea una persona física. Se excluye así toda categoría intermedia.

Para ello es necesario evitar una caracterización restringida de la persona jurídica que exija, como resultado de tal restricción, la apertura de dichas categorías intermedias.

Vélez Sarsfield trató a la persona jurídica por sus paradigmas: la corporación y la fundación, que son organizaciones de separación patrimonial completa. Pero la difusión de otras formas societarias y organizativas llevó a extender a ellas la calificación de "sujetos de derecho", aunque no presentaran todas las características de aquellas y, en particular, una completa separación patrimonial.

En el lenguaje jurídico actual el campo de los sujetos de derecho ha sido extendido hasta límites que parecían muy lejanos, y alcanza a todo lo que sea verbalmente personificable y muestre alguna forma de separación patrimonial.

Así, por ejemplo, la sociedad colectiva, la irregular, o aun la de hecho, son consideradas "sujetos de derecho". La cuestión se plantea hasta respecto del consorcio de propietarios en propiedad horizontal y sólo parece dete-

nerse ante el simple condominio precario, aunque presente alguna manifestación de separación patrimonial.

§ 2. Si casos tan variados son considerados "sujetos de derecho" ("persona jurídica"), es claro que no todas las personas jurídicas son iguales.

En los casos mencionados ellas son sociedades colectivas, de responsabilidad limitada, anónimas, consorcio de propietarios, y están sujetas a las reglas legislativas propias de la figura de que se trate.

La reforma optó por no trazar con total definición la línea demarcatoria de la expresión "persona jurídica", dejando así al intérprete un ámbito de decisión que usará teniendo en cuenta los propósitos de la clasificación, y sus consecuencias.

Su definición, que se encuentra en el artículo 30, es del tipo denominado "por género propio y diferencia específica", y por la negativa: son personas jurídicas todos los entes capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones que no son personas de existencia visible. Esta modalidad de definición es totalmente legítima en el caso, y fue elegida para destacar que sólo hay dos especies de tales "entes", que son las personas físicas y las personas jurídicas. El análisis de la expresión "ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones" corresponde a la filosofía jurídica.

§ 3. Las personas jurídicas son públicas o privadas. Se listan las personas jurídicas públicas y se define a las privadas también por exclusión: son privadas todas las personas jurídicas que no son públicas.

§ 4. Se indican las principales características generalmente vinculadas con la "persona jurídica", con la advertencia de que ellas están sujetas a las disposiciones especiales aplicables a cada caso.

§ 5. Una de estas características es la separación patrimonial.

Si bien se recepta la idea tradicional de separación patrimonial completa, se reitera que su medida y modalidades en cada especie serán las que resulten en cada caso de la ley.

Pero se ha evitado establecer cuánta separación patrimonial es necesaria para que pueda declararse que hay "persona jurídica". Se trata de una apertura deliberada, una delegación al intérprete que da flexibilidad al sistema y evitará las dificultades que aparecieron bajo el régimen anterior.

§ 6. Otra característica es que las personas jurídicas, o algunas de ellas, pueden constituirse o continuar con un solo miembro o ninguno, de lo que existen ejemplos en nuestro derecho.

La idea se encontraba ya en la valiosa nota de Vélez Sarsfield al artículo 50, y ella no debía perderse como consecuencia de la reforma.

En los cambios que se introducen en la ley 19.550, la reforma extiende tal aptitud a las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada que, de conformidad con conocidos desarrollos modernos, podrán ahora constituirse y funcionar con un solo socio. Para las sociedades de responsabilidad limitada se requiere que éste sea una persona física. Se da con ello solución a la propuesta de regulación de la llamada "empresa individual de responsabilidad limitada", que tuvo importantes antecedentes legislativos en nuestro país.

Del domicilio

Se modifica el artículo 90, inciso 4, del Código Civil, para adecuar las reglas sobre el domicilio especial de las sociedades. Se suprimen los dos últimos incisos de este artículo, que no eran necesarios ni acordes con los tiempos.

Se modifica el artículo 94, referido a las personas físicas en los casos en que no coincidan la sede de la familia y la de los negocios.

De la mayoría de edad

Se reduce la edad requerida para el pleno ejercicio de los derechos civiles a los dieciocho años para lo cual, como se dijo, se tuvo en cuenta, entre otras circunstancias, la legislación contemporánea comparada, que de manera ampliamente mayoritaria y creciente coincide en este punto.

El mantenimiento —con la eliminación de la referencia a la "habilitación por edad"— de lo dispuesto en el artículo 168 del Código Civil se explica en razón de que la doctrina encontró que uno de sus casos de aplicación era el del menor que contrae matrimonio, se emancipa, por algún motivo (probablemente viudez), su matrimonio se disuelve, y quiere contraer nuevo matrimonio. Reconociendo el carácter principalmente académico de este supuesto, se consideró prudente mantener la disposición.

De las obligaciones en general

§ 1. El artículo 574 del Código Civil no se refería específicamente a las obligaciones de dar cosas ciertas, como su ubicación permitía esperar, sino a toda obligación de dar.

Además, bien analizado, se limitaba a disponer que puede entregarse una cosa mueble o inmueble para constituir derechos reales o personales, lo cual resulta de otras disposiciones de la ley.

En consecuencia, el artículo fue desplazado antes del capítulo sobre las "Obligaciones de dar cosas ciertas", de modo que fuera aplicable a toda obligación de dar, y su contenido también fue modificado.

§ 2. En su nueva redacción el artículo se refiere al derecho de inspeccionar, o de pedir que se inspeccione la cosa al tiempo de la entrega. También se establece que su recepción sin reservas hace presumir la inexistencia de vicios aparentes.

§ 3. Si se trata de cosas muebles entregadas bajo cubierta, el plazo para observar sus vicios aparentes es de tres días, pero se le da flexibilidad haciendo remisión a los usos o a las circunstancias.

§ 4. Las discrepancias deben ser resueltas por peritos arbitradores. Se trata de una disposición integrativa que opera sólo en caso de silencio de las partes.

De las obligaciones de dar sumas de dinero

§ 1. La modificación a los artículos 619, 621, 623 y 624 procura, en primer lugar, mantener el principio de la integridad del pago mediante la recomposición del capital desde la simple demora, lo que privilegia el carácter de unidad de cuenta del dinero cuya entrega es objeto de una obligación.

§ 2. Se establece expresamente la facultad judicial de disminuir, en ciertos casos, los intereses pactados por las personas físicas. Nada se dispone respecto de las personas jurídicas, para las cuales, como cuestión de política general, no se quiere debilitar el principio de *pacta sunt servanda*.

Por otra parte, nuevas modalidades del préstamo, como aquellas en las que el prestamista asume el "riesgo del proyecto", hacen muy difícil determinar cuál es la tasa "justa" o "no usuraria" de interés.

Finalmente, los jueces siempre tendrán a su disposición en esta materia, como tenían antes, las reglas generales del Código, incluyendo su artículo 953.

§ 3. Se modifica el criterio relativo al anatocismo, adecuándolo a la realidad negocial contemporánea y al generalizado concepto que despoja al "interés" de escorias inflacionarias, que sólo ópticamente influyen en la cuantía de la tasa.

Se tienen en cuenta, además, que la acumulación de los intereses al capital es sólo uno de los métodos posibles que pueden conducir a un interés o costo del préstamo final inadmisibles. En lugar de atacar a uno de estos métodos la reforma prefiere dirigirse, tratándose de personas físicas, directamente a tal resultado final cualquiera sea la técnica empleada, y de allí lo dispuesto por el artículo 624.

Del pago

La modificación al artículo 750 precisa la definición de "día de vencimiento" conforme a las exigencias del tráfico moderno.

De las nulidades

Siguiendo a las concepciones contemporáneas que, en su medida, se encontraban ya en el Código de Comercio, la nueva redacción del artículo 1.037 alienta la conservación del acto y, en su caso, la conversión del acto inválido en otro eficaz.

Del abuso del derecho

La riquísima gama del artículo 1.071 es completada con la regulación de los efectos del acto abusivo, cuyo desmantelamiento y esterilización es la primera directiva para el juez, sin perjuicio, claro está, de la indemnización que corresponda.

De los instrumentos particulares y privados

§ 1. En este Título se desarrolla el alcance de los instrumentos particulares de modo que comprendan los documentos escritos y no firmados (por ejemplo télex, telecopia, correo electrónico, libros de contabilidad); los registros visuales o auditivos de cosas o hechos; y los registros de pensamientos o información, cualquiera fuera el medio empleado.

§ 2. En cuanto a los instrumentos privados, se establece que la fecha cierta puede ser probada por cualquier medio. Se suprime la exigencia del doble ejemplar, incompatible con las necesidades actuales del tráfico.

§ 3. Se incluyen a continuación las reglas sobre el modo de llevar los libros de contabilidad, siguiendo en general las disposiciones del Código de Comercio.

Se trae a esta parte, por su carácter general, la regla de la ley 19.550 que autoriza la sustitución de algunos de estos libros, o sus formalidades, por medios electrónicos o similares.

§ 4. La carga de llevar estos libros y de inscribirse en el Registro Público local se coloca sobre quienes realizan "una actividad económica organizada en forma de establecimiento comercial o industrial".

De la carga se exime, como es tradicional, a las actividades agropecuarias y profesiones liberales.

Se delega en las autoridades provinciales la determinación de aquellos otros que, por el volumen de su giro ("pequeños comerciantes", "pequeños empresarios"), tampoco resulte conveniente sujetar a las mismas. Esta delegación en las jurisdicciones provinciales permitirá tener en cuenta las modalidades locales mejor de lo que podría hacer el gobierno central.

§ 5. Se incorporan a esta parte ciertas disposiciones sobre el modo de llevar contabilidad y sobre estados contables.

De la prueba de los contratos

§ 1. Se establece que los contratos se prueban por todos los medios que puedan llevar a una razonable convicción, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

§ 2. En lugar de fijar una cantidad para determinar los contratos que pueden probarse por testigos, se excluye esta prueba si fuese de uso la instrumentación por escrito. Esta última expresión deberá juzgarse teniendo en cuenta la amplitud con que ha sido reformulado el artículo 978 del Código Civil.

§ 3. Se incorporan las reglas sobre el valor probatorio de los libros de contabilidad que siguen, en líneas generales, las disposiciones del Código de Comercio.

Del incumplimiento sin culpa

El Código Civil alude frecuentemente al incumplimiento "sin culpa" de una obligación.

Al caracterizarlo, se distingue ese supuesto del caso fortuito típico. En tanto éste rompe la relación causal, la ausencia de culpa se relaciona con otro elemento de la responsabilidad civil, el denominado "factor de atribución".

De allí, pues, que según los casos la situación probatoria será también distinta. En algunos, incumbe al acreedor demostrar la culpa del deudor. En otros, debe éste probar que actuó sin culpa (situación a que se refiere el texto agregado al artículo 514). En otros, finalmente, el deudor debe acreditar el caso fortuito, y sus requisitos propios de imprevisibilidad, irresistibilidad, extraneidad, actualidad, sobreviniencia, insuperabilidad. Un ejemplo de estos últimos es el caso de responsabilidad derivada del transporte terrestre, y su antecedente, el artículo 184 del derogado Código de Comercio.

Así considerado, el incumplimiento "sin culpa" transita una vía intermedia entre las situaciones probatorias extremas, como un *tertius quid* entre la culpa probada y el casus, que el Código Civil implica con frecuencia, y que permite superar las incertidumbres que plantean (inclusive respecto de su propia existencia) las categorías de las "obligaciones de medio", y las "obligaciones de resultado".

De la unificación de los regímenes contractual y extracontractual de responsabilidad

§ 1. La doctrina nacional viene requiriendo de manera unánime la unificación de ambos regímenes, principalmente la eliminación de distinciones existentes en cuanto a la extensión de la responsabilidad y a los plazos de prescripción liberatoria.

§ 2. La reforma da satisfacción a ambas exigencias. Para ello comienza suprimiendo el artículo 1.107, sin antecedentes en el derecho comparado, que Vélez Sarsfield recogió de Aubry et Rau y que trazaba una frontera entre ambos campos de responsabilidad.

§ 3. Removido este obstáculo, se establece que la responsabilidad derivada de hechos ilícitos y de incumplimientos obligacionales está sometida a las mismas reglas, que ordinariamente comprenden, en todas las hipótesis, los daños inmediatos y los mediatos previsibles.

§ 4. Se ajusta también la regulación de los artículos 519 a 522, que incorporan la noción de "daño al interés negativo", la responsabilidad contractual por hecho de tercero o de las cosas, y la atribución de responsabilidad por daño moral.

El artículo 906 extiende a ambos tipos de responsabilidad la obligación de reparar los daños que se encuentren en una relación de causalidad adecuada.

§ 5. A la unificación de las reglas de prescripción liberatoria se hará referencia más adelante.

De la atribución objetiva del deber de reparar

§ 1. Se refieren a esta cuestión los artículos 1.113, 1.119, 2.176 y el 1.135, que la reforma deroga.

§ 2. El artículo 1.113 del Código Civil limitaba la atribución (o "imputación") objetiva del deber de reparar, a los daños causados por riesgo o vicio de la cosa. Siguiendo la interpretación dominante y el criterio de los códigos más modernos, la reforma le agrega el caso de actividad riesgosa para terceros.

§ 3. Conforme a la opinión generalizada, se incluye en esa atribución objetiva del deber de reparar, el daño sufrido por los consumidores, legitimando pasivamente a todos quienes intervienen en el proceso de producción o fabricación, y en el de comercialización.

§ 4. También se lo extiende al daño causado por el miembro no identificado de un grupo determinado de individuos que realizan una actividad riesgosa para los demás ("responsabilidad colectiva").

§ 5. De acuerdo con significativos precedentes, en especial los vigentes Código Aeronáutico y Ley de la Navegación, se establece que la responsabilidad objetiva alcanza, por cada damnificado directo, la suma de hasta dos mil argentinos oro.

Pero la indemnización será plena cuando el responsable no pruebe que de su parte no hubo culpa, o cuando razonablemente debió haber tomado un seguro.

Se quiere de este modo procurar a la víctima la efectiva reparación del daño a cargo de quien debió prevenirlo y tomar las coberturas apropiadas de su eventual responsabilidad. Puede preverse que, por aplicación de estas reglas, la reparación será plena y efectivamente percibida por la víctima en una cantidad de casos significativamente mayor de accidentes de trabajo, tránsito, y de un tipo en que la frecuencia estadística de la

sinistralidad indique la necesidad de tomar un seguro como medida de solidaridad social, y también de autoprotección.

De los contratos en general

De los contratos atípicos

La definición de los contratos atípicos del artículo 1.143 permite ratificar la libertad de las partes en la elección de los contenidos del negocio y poner a disposición de aquéllas, por analogía, las reglas de los contratos típicos afines que sean compatibles con la finalidad y economía de éste, y por especificidad ("naturaleza jurídica"), las generales de las obligaciones y los contratos.

Del consentimiento en los contratos

§ 1. Como se anticipó, se reformulan las reglas sobre formación de los contratos entre ausentes para adecuarlos a los nuevos medios técnicos y poner nuestro derecho en consonancia en esta materia con los criterios de la comunidad internacional, que encuentran un reflejo importante en la Convención de Viena sobre Compraventas Internacionales (ratificada por ley 22.765), cuya entrada en vigencia en enero de 1988 ha sido asegurada por la ratificación de Italia de diciembre de 1986.

Convertida esa convención en ley vigente, la necesidad de adecuar la legislación en materia de formación de los contratos es clara si se advierte la inconveniencia de sujetar a reglas distintas contratos que se formen por oferta y aceptación cursados, por ejemplo, entre Buenos Aires y Mendoza, o entre Buenos Aires y Montevideo.

§ 2. Los nuevos medios técnicos a que se hizo referencia abren la posibilidad de comunicación instantánea entre personas que se encuentran físicamente distantes pero simultáneamente atendiendo terminales telefónicas, electrónicas o de otro tipo conectadas entre sí, situación a la que se da tratamiento legal.

§ 3. Se introduce en la caracterización de la oferta el elemento de confianza que ella despierta en el destinatario, se sustituye el criterio tradicional de la expedición por el de la recepción, y se privilegia la conservación del acto autorizando la utilización de la aceptación tardía y la que introduzca modificaciones no sustanciales a la oferta.

§ 4. Se regulan los temas de la invitación a contratar, la oferta a personas indeterminadas, la promesa de contratar, el contrato de opción, la obligación precontractual de obrar con buena fe. Se considera vinculante la oferta a plazo de manera que su aceptación útil concluya el contrato.

§ 5. Se establecen reglas para la integración del contrato, atribuyendo significación, también a esos fines, a los usos y costumbres.

§ 6. Se incluyen disposiciones especiales para los contratos de contenido predispuesto por una de las partes, el cual contrato la otra parte se vio precisada a celebrar.

Se tienen así por no establecidas las cláusulas que desnaturalicen la naturaleza de las obligaciones que las partes dicen contraer por dicho contrato, limiten la responsabilidad del predisponente por daños corporales, o

la responsabilidad por daños materiales sin una adecuada equivalencia económica derivada del contrato.

Tratándose de personas físicas, se consideran no establecidas aquellas cláusulas que importen para éstas renuncia o restricción a sus derechos, o amplíen las que resulten para el predisponente de normas supletorias, salvo aprobación escrita expresa y especial.

De la interpretación de los contratos

§ 1. El principio vinculante contenido en el artículo 1.197 es continuado con una expresión que se dirige a receptar la doctrina que entre nosotros se suele denominar "de las bases del negocio". Por ella se da relevancia a las circunstancias que una de las partes declaró, y la otra aceptó o hubiera aceptado si se le hubiera formulado, eran determinantes para su celebración. La expresión incorporada no indica cuáles son las consecuencias de la alteración de estas circunstancias, salvo que ellas harán que el contrato ya no resulte vinculante "como la ley misma", lo cual no equivale a decir que no será vinculante en absoluto. Ello abre el camino a la adecuación o adaptación de los contratos y a los otros remedios que resulten equitativos según las circunstancias.

§ 2. Esta disposición, y otras que se introducen, tomadas en conjunto, podrían sugerir una intención de erosionar el principio de incondicionada eficacia de los compromisos contraídos en exactamente los términos en que lo fueron. No es éste el origen de la doctrina ni el propósito de su introducción. No puede excluirse que, mientras subsistan las condiciones generales de las últimas décadas, ellas constituyan un instrumento adicional en los esfuerzos de nuestra doctrina y jurisprudencia para preservar el equilibrio originario de las prestaciones ante la acción agresiva de cambiantes condiciones financieras y la brusca intervención del Estado en las relaciones económicas. Pero se sabe que estas condiciones no podrán subsistir indefinidamente; cuando ellas cesen la doctrina de "las bases del negocio" tendrán todavía una importante función en el régimen de los contratos.

§ 3. Se incorporan también al artículo 1.197 reglas de interpretación.

En primer lugar se distinguen los casos en que corresponde una interpretación literal o estricta, cuyo campo propio, aunque no necesariamente exclusivo, de aplicación se encuentra en el ambiente de los negocios y en las contrataciones entre empresas, que celebran —o deberían celebrar— estos contratos con profesionalidad y adecuado asesoramiento, y con comprensión del valor de los términos empleados, en cuya significación literal tienen derecho a confiar la otra parte y los terceros.

Constituye éste un elemento del tráfico moderno, que en muchas áreas podría difícilmente desarrollarse sin reposar en tal literalidad. Hay autores que ven en esta acentuación contemporánea del valor literal del compromiso contraído una aplicación moderna del principio *pacta sunt servanda*, y una importante línea de la nueva ley mercantil. Este desarrollo será permitido por la distinción contenida en la reforma.

§ 4. Fuera de los casos de interpretación estricta, se atribuye relevancia a la finalidad y economía del con-

trato, al sentido que razonablemente hubiera dado a las manifestaciones de una de las partes una persona de las condiciones y en la situación de la otra, a la conducta de las partes anterior y posterior a la celebración del contrato y a los usos y costumbres del lugar de celebración.

§ 5. Paralelamente, se despoja de efectos interpretativos a las prácticas en ocasiones denominadas "vejatorias", aunque ellas hayan ocurrido entre los mismos contratantes o entre otros contratantes en la misma actividad.

§ 6. En los contratos predispuestos, y tratándose de personas físicas, se establece el principio de *favor debitoris*.

De la doctrina de la imprevisión

Las modificaciones introducidas permiten invocarla por vía de acción o de excepción.

Se acepta la pretensión de adecuación del contrato, salvo que ella sea incompatible con las circunstancias de la relación jurídica de que se trate.

Expresamente se excluyen estos remedios cuando la excesiva onerosidad resulte de culpa de quien la invoca.

Del pacto comisorio y de la cláusula resolutoria tácita

§ 1. El artículo 1.203 define el pacto comisorio y regula los efectos que corresponde atribuirle en caso de silencio de las partes. En particular, se establecen los alcances de las obligaciones de restituir (deuda de valor) y de indemnizar (daño al interés positivo).

§ 2. El artículo 1.204 se refiere a la facultad tácita de resolver los contratos, que se otorga en los casos de incumplimiento de la otra parte, frustración del fin del contrato, imposibilidad permanente o temporaria de cumplimiento, o certeza del incumplimiento futuro de la otra parte (*anticipatory breach*).

§ 3. La resolución por incumplimiento puede ser declarada de tres maneras.

Una es la simple declaración de la parte que considere a la otra en incumplimiento. Se trata de un método enérgico que acarreará consecuencias reparatorias proporcionales en caso que los tribunales encuentren *ex post* que fue utilizado de manera equivocada.

Otra es la concesión de un plazo adicional a la otra parte para que subsane su incumplimiento, en cuyo caso la resolución se producirá automáticamente con la expiración del plazo sin que el incumplimiento haya sido remediado.

La tercera es el procedimiento más cauteloso de demandar la resolución por vía judicial. La sentencia que se dicte, si se hiciera lugar a la resolución, podrá disponer que los efectos de ésta se retrotraigan al día de la demanda.

§ 4. En los contratos de duración se permite la suspensión de la ejecución de las obligaciones a cargo de una de las partes ante la imposibilidad temporaria de cumplimiento de la otra. Esta disposición se relaciona con la que se incorpora como segundo párrafo del artículo 1.201, por la cual una parte que tenga motivos graves para dudar del cumplimiento de la otra podrá diferir las que se encuentran a su cargo hasta tanto reciba seguridades adecuadas del cumplimiento de aquélla.

§ 5. Como se dijo, estas disposiciones amplían los casos en que puede concluirse una relación contractual cuyo mantenimiento carece de interés, independizándolas de la existencia de culpa, y aun de incumplimiento de una de las partes, como para situaciones particulares (por ejemplo, en los artículos 1.413, 1.525 y 1.605) había previsto Vélez Sarsfield.

La facultad de concluir en estos casos el vínculo contractual no perjudica, claro está, la obligación de indemnizar que pudiera corresponder, cuya determinación apropiada por los tribunales deberá evitar que las facultades que se otorgan a las partes sean utilizadas para liberarse con poco costo de los riesgos, aun aquellos ajenos a su voluntad o actuación, que deban considerarse a su cargo en razón del sináagma asumido, o que de otra manera debiliten la eficacia del vínculo contractual y la confianza que socialmente y por exigencias del tráfico, incluido el internacional, debe atribuírsele lo cual, se reitera, no constituye un propósito de la reforma.

De la compra y venta

§ 1. Como se advirtió, las reglas de la compra y venta fueron totalmente reformuladas. Tanto en éste como en otros casos similares, excede el alcance de este mensaje el análisis, o aun la presentación, de cada una de sus disposiciones. Sólo se hará, en consecuencia, una breve referencia a algunos aspectos que, se considera, puedan ser útiles como introducción a la lectura de las específicas disposiciones.

§ 2. Tratándose de venta de cosa futura, se incorpora la regla de que el vendedor debe hacer los esfuerzos exigidos por la convención o las circunstancias para que la cosa llegue a existir.

§ 3. Se establecen nuevas reglas para la determinación del precio en materia de cosas muebles, si las partes no hubieran convenido este precio o establecido reglas para determinarlo.

Sea la cosa mueble o inmueble, a falta de otros criterios de determinación del precio, ésta se hará por el juez. Se trata de una regla integrativa que preserva el contrato cuando se ha determinado que fue la firme intención de una de las partes comprar y de la otra vender. La solución tiene como antecedente al Código Civil italiano, aunque allí la determinación se hace por terceros con intervención judicial.

§ 4. Se distingue entre condiciones suspensivas y resolutorias de la compra y venta. La primera no produce la transferencia del dominio de la cosa, aunque ésta sea entregada. La segunda, si la cosa es entregada, transmite su dominio revocable.

Si el vendedor promete entregar o entrega la cosa antes del cumplimiento de la condición, se presume que la condición es resolutoria. Esta presunción se excluye en materia de muebles si se trata de ventas *ad gustum*, de cosas no tenidas a la vista y de calidad no conocida en el comercio, y otros casos análogos.

Los pactos en que la condición consiste en el pago de parte del precio, o parte de él, o cumplen una función similar, son directamente tratados como venta bajo condición resolutoria.

§ 5. Los pactos de retroventa, de reventa, de preferencia, de mejor comprador, comisorio, de reserva de dominio, y de locación con opción de compra (*hire-purchase leasing*) son permitidos tanto sobre inmuebles como sobre muebles. Como se dijo, ellos son tratados como una venta bajo condición resolutoria, que desde la entrega de la cosa transfieren al comprador su dominio revocable.

§ 6. Tratándose de muebles no registrables, la revocación o resolución del dominio imperfecto no afecta los derechos adquiridos por terceros interesados de buena fe a título oneroso.

Se establece, sin embargo, que el pacto de reserva de dominio (y, en consecuencia, la locación con opción de compra, que está sujeto a las mismas reglas que aquél) es oponible a terceros cuando hubiese sido inscrito en el Registro de Créditos Prendarios y recayere sobre máquinas de valor superior a cien argentinos oro.

§ 7. Se incluyen disposiciones sobre cláusulas típicas en compraventas a distancia y mediante intervención de un banco.

§ 8. Las reglas sobre obligaciones de las partes incluyen las que se refieren al pacto por el que la cosa vendida debe ser entregada a un transportista o a un tercero, y su influencia sobre el modo de contar los plazos para reclamar por defectos de la cosa, y el momento en que ésta debe conformarse al contrato.

§ 9. Se incluye, como también se señaló, un capítulo sobre "suministro", que no es tratado como contrato independiente sino como modalidad de la compraventa. Si bien la expresión "suministro" puede ser extendida también a la prestación de servicios, su regulación debe estar vinculada con la locación de servicios, cuya revisión general la reforma no incluyó en su alcance. La extensión de la palabra "cosa" en nuestro derecho asegura, por otra parte, un muy ancho campo de aplicación a esta figura.

El contrato de suministro tiene especial importancia en proyectos de construcción de grandes plantas cuyo funcionamiento depende de ciertos insumos —gas, carbón, u otros productos del suelo o del subsuelo— respecto de los cuales, por razones geográficas o por el monopolio estatal de ciertas actividades, no existen alternativas de aprovisionamiento.

Estos proyectos son amortizados en períodos largos, y su rentabilidad sólo se obtiene sobre proyecciones a quince, veinte o más años. Para que el proyecto sea factible debe, en consecuencia, asegurarse el suministro durante esos plazos en las condiciones convenidas. En países que no tienen monopolios institucionalizados, pero si una geografía similar a la nuestra, como los Estados Unidos de América, estos resultados, o parte de ellos, se obtienen mediante la atribución al suministrado de una suerte de "derecho real".

La reforma prefirió lograrlos a través de disposiciones que aseguren el mantenimiento del contrato y su ejecución en especie. Para asegurar el cumplimiento específico del contrato se otorga preferencia a tomar en especie la producción del suministrante según el orden de inscripción de los contratos en el registro público.

También se establece que, sujeto al "criterio de relevancia", debe hacerse saber en los estados contables los contratos de suministro celebrados.

De la cesión de derechos

§ 1. El título "De la cesión de créditos" fue también totalmente reformulado, y expandido para que se constituya en una regulación general de la "cesión de derechos". Se incluyen, dentro de éstos, las acciones. La aplicación de las disposiciones de este Título estará, naturalmente, sujeta a las reglas más específicas que fuesen aplicables.

§ 2. La remisión a las reglas de la compraventa, la permuta, la donación y la prenda se hace "por analogía", conforme el antecedente del Código Civil alemán, para indicar que su aplicación no es automática.

§ 3. La mayor claridad que se introduce en las reglas aplicables a la cesión de derechos "en garantía", y su relación con la prenda de créditos contribuirá a evitar dificultades que se presentaban bajo el régimen anterior, particularmente cuando estos procedimientos eran utilizados para la financiación de proyectos.

Se establece que la cesión de créditos futuros debe ser manifestada en los estados contables.

De la locación

§ 1. La reforma modifica sólo algunas disposiciones de este título, sin formular su revisión total.

§ 2. El artículo 1.624, que carecía de actualidad, es modificado para sujetar las disposiciones de este título a las reglas más específicas que sean aplicables.

§ 3. El artículo 1.625 se refiere ahora a las profesiones liberales. Si bien en general los profesionales están sometidos, en general, a las reglas de la locación de obra, se consideró necesario precisar algunos aspectos de su relación en vista al carácter técnico de la encomienda.

§ 4. La modificación del artículo 1.627 armoniza el modo de determinar el precio con las soluciones adoptadas en materia de compraventa.

§ 5. La redacción anterior del artículo 1.647 bis planteó discrepancias doctrinarias y jurisprudenciales. Ha sido revisado para que establezca con claridad de derecho a verificación de la obra por el locatario, el alcance de la inspección al tiempo de la entrega, la aceptación ("recibo") de la obra y los efectos de los vicios que se manifiestan después de la recepción provisional, cuando la hubiere, hasta su aceptación.

De los contratos asociativos

§ 1. La unificación del régimen de sociedades exigió algunas decisiones iniciales.

La primera fue que se introducirían la menor cantidad posible de cambios en la vigente ley 19.550. De allí que las modificaciones que se le hacen sean sólo las necesarias para asegurar su armoniosa integración con las disposiciones que ahora se incorporan al Código Civil. La estructura de esta ley en materia de personalidad, y sus efectos, permanece inalterada.

§ 2. La segunda fue regular la figura de los contratos asociativos de modo que cubriera sus dos apariciones principales, las sociedades y las asociaciones, y toda situación de comunidad de derechos y de contrato plurilateral.

§ 3. La tercera fue mantener la actual distinción entre sociedad y asociación, que tiene entre nosotros una penetración que sería imprudente para la ley contrariar.

§ 4. La cuarta, que las nuevas reglas sobre sociedad debían tener amplitud suficiente para abarcar (con alguna salvedad para la anónima) todo fenómeno asociativo que no constituya un tipo especial de sociedad regular bajo otra legislación, e incluyera el caso de las sociedades accidentales o en participación.

§ 5. La quinta, que estos contratos asociativos, con los efectos que le atribuyen las nuevas disposiciones, no debían estar sujetos a formalidad alguna.

No sólo las razones de política legislativa para establecer estas formalidades no son claras ni convincentes, sino que, si se las establece, se crea automáticamente el problema de las sociedades de hecho, respecto de las cuales la única regulación justa es tratarlas como una sociedad.

Suficiente engorro tendrán las partes para probar el contenido de estipulaciones no instrumentadas como para agregarles deliberadamente mayor malestar.

§ 6. La sexta, que para realizar los propósitos anteriores debían modificarse profundamente las reglas sobre sociedades del Código Civil, y regresar al alcance que éstas tenían en el derecho romano clásico.

Los desarrollos derivados de la noción de "comunidad" germánica y la legislación medieval sobre usura tienen adecuada recepción en la sociedad colectiva y en comandita, bien reguladas como tipos especiales, pero cuyos principios no hay razón para generalizar.

§ 7. Bajo distintas circunstancias, por dos razones principales se hubiera debido incluir en el Código Civil a las sociedades colectivas y en comandita, y dejar a la legislación especial sólo las sociedades por acciones y por cuotas.

Una de ellas es que las reglas de las primeras están suficientemente consolidadas como para permitir su incorporación a un Código Civil, lo que no es el caso de las últimas.

Otra, que mientras la clasificación de las primeras como fenómeno asociativo es indudable y no corre peligro, no ocurre lo mismo con las segundas, que si bien admiten más de dos partes, bien pueden tener sólo una, situación a la que también podemos llamar "contrato plurilateral", pero que ciertamente no es el mismo contrato plurilateral que el de los otros contratos asociativos, en que tal posibilidad no existe.

Pero tal inclusión no hubiera sido congruente con la intención de limitar las modificaciones a la ley 19.550 y, en consecuencia, no se la introduce.

§ 8. El título comienza con un capítulo sobre disposiciones comunes en que se define el ámbito de aplicación, se liberan las formas, y se traen de la ley 19.550 las reglas sobre los alcances de la nulidad y el incumplimiento.

§ 9. Se invierte el procedimiento actual por el cual, en las jurisdicciones en las que el Registro Público se encuentre en el ámbito administrativo, ante la observación que éste haga al contenido de un instrumento

constitutivo de una sociedad, son los interesados los que deben ocurrir al juez para que dirima la controversia. Como las demoras que ello ocasiona son incompatibles con las necesidades de las partes, las observaciones son normalmente aceptadas, con independencia de las convicciones de las partes y sus asesores. En los hechos, ello atribuye a la Administración el monopolio de la interpretación del derecho de sociedades, que constitucionalmente corresponde al Poder Judicial, y además se lo atribuye antes que aparezca un conflicto.

En el procedimiento que se establece, es la autoridad administrativa quien debe ocurrir al juez si considera que el contenido es observable, bajo condición que el instrumento haya sido otorgado por escritura pública, o esté conformado por un abogado de la matrícula que satisfaga los demás requisitos que la organización profesional que tenga el gobierno de ésta disponga.

§ 10. El Título disciplina de manera separada a las sociedades de las asociaciones y mantiene en la definición de éstas el elemento, tradicional en nuestro derecho, de un propósito de bien común. Ningún esfuerzo especial fue hecho para caracterizar a éste con nitidez, para lo que se tuvo en cuenta que, en principio, sociedades y asociaciones están sujetas a las mismas reglas.

§ 11. En materia de sociedad, y para simplificar el análisis a los fines de esta presentación, puede decirse que existen dos modelos de regulación en Códigos unificados: el del Código suizo de las Obligaciones y el del Código Civil italiano.

§ 12. La regulación del Código suizo tiene una atractiva sencillez, y una flexibilidad que le permite absorber todo fenómeno asociativo que no constituya un tipo especial de sociedad, desde acuerdos de participación en los resultados de un negocio aislado (o "instantáneo", según la terminología de la ley belga) hasta las formas más complejas de organización para grandes emprendimientos. Logra estos resultados sin necesidad de recurrir a la noción de un "ente" ideal separado de los socios, lo que si bien en ocasiones resulta de comodidad para el lenguaje, en otras puede dificultar el razonamiento y la percepción de las reales relaciones establecidas. Esta flexibilidad y sencillez de tratamiento son obtenidas mediante la utilización de nociones y reglas del derecho común, principalmente las de representación.

§ 13. El Código Civil italiano fracciona lo que no sea otra figura societaria en "simple sociedad", por un lado, y "asociación en participación" por otro. Esta última, por su parte, está caracterizada de manera distinta a como lo hacen los códigos de Comercio francés y argentino.

En los trabajos preparatorios del Código Civil de 1942 se resolvió, en base a la experiencia acumulada, abandonar el anterior del Código de Comercio de 1882, y no tratar a la sociedad simple como un "ente" o persona jurídica (*Relazione del Guardasigile*, n. 925). La jurisprudencia ha interpretado las reglas del código de conformidad con esa intención.

La sociedad simple no puede ser utilizada para la realización de actividades sujetas a registración, lo que está vinculado con la existencia en ese código de la figura del empresario, y la exigencia de registración para ciertas actividades.

§ 14. La reforma sigue la estructura de la legislación suiza. Para ello tuvo en cuenta, a más de su sencillez y flexibilidad, la estructura general de nuestro derecho privado después de la reforma, en el que no existen actividades sujetas a registración, y el hecho de que en nuestro lenguaje corriente la expresión "asociación" implica una finalidad de bien común, en oposición a un propósito utilitario o de lucro.

Por otra parte, el método de distinguir entre sociedades y asociaciones con fin de lucro ya fue propuesto en nuestro medio por el anteproyecto de ley de sociedades de Malagarriga y Aztiria, que distinguía entre unas y otras según tuvieran personalidad jurídica o no la tuvieran, y rechazado por la comisión revisora que produjo la vigente ley 19.550.

§ 15. La primera redacción de la reforma siguió la estructura general de la regulación suiza, pero con una distinta redacción que se dirigía a evitar la utilización de expresiones tales como la de "tratar en nombre de la sociedad", que una lectura ligera podría interpretar como la implicación de que existe un "ente" distinto de los socios.

En su versión final resolvió, sin embargo, incorporar en artículos críticos el texto exacto de su fuente, con la finalidad que la doctrina casi secular que se refiere a ellos estuviera directamente disponible para el intérprete nacional.

Ello ocurre con los dos párrafos del artículo 1.652, que define a la sociedad, y en los artículos 1.655, 1.656 y 1.657. Su fuente son los artículos 530, 543 y 544 del código suizo de las obligaciones. Para su incorporación se consultaron las versiones italiana, francesa y alemana de ese código, que no son traducción literal una de la otra.

El artículo 1.656 fue tomado verbatim del segundo párrafo del artículo 543 del código suizo de las obligaciones teniendo en cuenta que la jurisprudencia, de conformidad con la doctrina, lo entiende en el sentido que el socio que contrata con terceros en nombre de la sociedad se obliga a sí mismo personalmente (*Recueil Officiel des arrêtes du Tribunal Fédéral*, II partie, Droit Civil, 95, II, 59; *Journal des Tribunaux*, I partie, droit fédéral, 1970, 73).

§ 16. Lo expuesto no implica que fue propósito de la reforma imponer la conclusión que la sociedad, en su nueva regulación, no es nunca una persona jurídica. Es claro que pueden encontrarse en ella, por ejemplo, manifestaciones de separación patrimonial. Si estos elementos son suficientes para considerarla persona jurídica dependerá del alcance que el intérprete decida darle a esta expresión.

Los artículos incorporados contienen a veces, como se dijo, expresiones tales como "tratar en nombre de la sociedad", y otros que sugieren que la sociedad existe como un centro de imputación, como un "ente". Pero esta conclusión no es necesaria.

El nombre de la sociedad, ha sido dicho por la doctrina y la jurisprudencia de varios sistemas jurídicos, funciona en estos casos como un signo algebraico, como una anotación taquigráfica que sustituye al nombre de todos los socios, que sería fastidioso desarrollar en toda su extensión.

En consecuencia, cualquier conclusión a que se llegue respecto de la personalidad de la sociedad en esta nueva regulación debería resultar de los contenidos prescriptivos de la ley, y no de los giros verbales del legislador.

§ 17. Si la reunión de los esfuerzos y medios tiene una finalidad de bien común, religioso, cultural, deportivo, recreativo o similar, el contrato y la organización que de él resulta se denominan "asociación". Como se dijo, la asociación está sujeta, en principio, a las mismas reglas que la sociedad.

§ 18. Si la asociación es "autorizada", se rige por sus estatutos. Se mantiene el régimen de libertad actual, pero se determinan qué aspectos deben ser regulados por los estatutos, entre los que se incluye el régimen de responsabilidad de los asociados.

De la representación, del mandato y de la comisión

§ 1. También este título ha sido totalmente reformulado.

En el primer capítulo se agruparon las reglas sobre representación en general. Darles esta ubicación en lugar de colocarlas en el libro I pareció más respetuoso del método del código. No resultaban claras, además, las ventajas que se obtendrían de la solución contraria.

§ 2. El segundo capítulo se refiere a la representación voluntaria. En él se incluye el apoderamiento tácito, o por la apariencia creada, cuyas aplicaciones cubren los casos del factor y del dependiente de un establecimiento abierto al público.

§ 3. El tercero trata del mandato, tanto del otorgado con facultades de representación como el que fue dado sin ellas.

§ 4. El cuarto concierne a la consignación, que se define como un mandato sin representación de objeto limitado a la compra y venta de muebles. El último artículo recepta el denominado "contrato estimatorio".

§ 5. Las disposiciones sobre mandato se extienden a las representaciones, corretajes y a todas las relaciones fiduciarias.

De la cuenta corriente mercantil

§ 1. La cuenta corriente mercantil tenía en el Código de Comercio una regulación de contornos algo confusos que parecía reflejar la utilización de la figura, tiempo atrás y antes que se institucionalizaran los servicios bancarios, como acuerdos entre comerciantes de distintas plazas para un *clearing* de papeles de comercio.

Como el Código disponía que los saldos tendrían acción ejecutiva, en muchos casos se iniciaron acciones fundadas en la existencia de una cuenta corriente mercantil, y casi en otros tanto se decidió que éstas eran, en realidad, sólo cuentas "de gestión", es decir, lo que en el lenguaje de los negocios se denomina "cuenta corriente".

§ 2. La reforma mantiene la figura, pero reformula sus reglas para que pueda encontrar campos modernos de aplicación.

§ 3. La definición es formulada sobre la base del compromiso de las partes de no exigir ni disponer de

los créditos resultantes de sus respectivas remesas hasta el cierre del período, y no sobre la incorporación de los créditos "a una cuenta", como lo hace el Código Civil italiano, ya que esto constituye un aspecto instrumental respecto de las prestaciones realmente comprometidas.

La nueva caracterización acentúa la naturaleza normativa del contrato.

§ 4. Se abandona el efecto novatorio de la incorporación de valores a la cuenta corriente, que constituía un error del Código de Comercio, desde que no puede sostenerse que el deudor del crédito emergente del negocio originario quede liberado de toda obligación por el hecho de la inclusión del crédito en la cuenta. Por otra parte, en el sistema del Código no existía novación en sentido lato, sino simple "novación objetiva".

El crédito incluido en la cuenta no constituye sino una partida concurrente a la formación del saldo, el crédito, como tal, no pierde individualidad como consecuencia de esta inclusión.

§ 5. En cuanto a las modalidades procesales de la ejecución de los saldos, se las remite a las leyes procesales en cada caso aplicables.

De la cuenta corriente bancaria

§ 1. La cuenta corriente bancaria es regulada como una figura autónoma, y tratada de modo que comprenda las nuevas modalidades de servicios que los bancos prestan a sus clientes.

§ 2. Se incorporan reglas de responsabilidad por la emisión y utilización de los títulos con eficacia ejecutiva que los bancos pueden emitir para el cobro de los saldos de cuenta a sus clientes.

De la fianza

§ 1. Se establece la incapacidad de las personas físicas para dar fianzas que no sean por una suma determinada de dinero sujeta a ajuste, y para renunciar a los beneficios de excusión y división y a causales de extinción de la fianza.

Para las personas físicas la fianza es generalmente un acto de liberalidad por un monto eventual pero ilimitado, al que la presión social o familiar hace difícil rehusarse, y respecto del que no hay formas o solemnidades protectoras.

Si bien es cierto que el espíritu de solidaridad debe en abstracto ser estimulado, es probable que el otorgamiento de fianzas, o su justificada denegación, haya contribuido a dañar más amistades y relaciones que las que ayudó a cimentar.

Además, las personas físicas no están generalmente en condiciones de negociar con los acreedores los términos de la fianza, y concluyen suscribiendo las cláusulas que se les presentan sin leerlas, o sin entenderlas, o en todo caso con la esperanza de que se están limitando a una formalidad sin consecuencias.

Las incapacidades que se establecen no sólo evitarán irritantes injusticias, que ocurren con mayor frecuencia de lo que socialmente debe tolerarse, sino que, al determinar el máximo del riesgo asumido, facilitará a las personas físicas el otorgar fianzas cuando quieran hacerlo, y contribuirán a que el acreedor decida con mejor información la extensión del crédito que corresponda dar en cada caso.

§ 2. Entre las causales de extinción de la fianza de obligaciones futuras se encuentra el otorgamiento de nuevo crédito al deudor principal después que la situación patrimonial de éste empeoró de manera significativa. El antecedente de esta disposición se encuentra en el Código Civil italiano.

§ 3. Las reglas sobre cartas de recomendación se extienden a las denominadas de "patronazgo", de frecuente uso en la práctica de los negocios para presentar a una sociedad del grupo e inducir, sin asumir las obligaciones de una fianza, a que se le extienda a aquélla el crédito que el grupo posea.

Del corretaje

El corretaje es regulado como figura independiente y no como variedad del mandato, como ocurre en otras legislaciones.

Su contenido fue revisado para que sirva además de la compra y venta de mercaderías, a las actividades genéricas de *brokerage*, mediación, y aquellas por las que se reconoce un *finder's fee*.

Las disposiciones sobre la calificación para el ejercicio profesional del corretaje son trasladadas a la ley 20.266. Ellas no perjudican la facultad regulatoria de las jurisdicciones provinciales.

Del transporte

Esta figura es tratada como un contrato independiente. Después de algunas disposiciones generales, se tratan por separado el transporte de personas y el de cosas.

Se mantiene el carácter objetivo de la responsabilidad del transportista en el transporte de personas, que se encontraba en el Código de Comercio (artículo 184), aunque con las formulaciones apropiadas para su inserción en el nuevo sistema.

Respecto de la responsabilidad por daños a las cosas, se mantiene una regla congruente con la que se encontraba en el artículo 172 del Código de Comercio.

Se regulan con mayor claridad la documentación del contrato, y los transportes combinados.

Del depósito

También este título ha sido totalmente reformulado. Se introducen reglas sobre el depósito en hoteles y establecimientos similares, que siguen en general a las del Código Civil italiano.

Las disposiciones sobre casas de depósito incorporan, modernizadas, las del Código de Comercio sobre barraqueros.

Se regula también el servicio de cajas de seguridad.

Del mutuo

§ 1. Después de la definición del contrato se establece la presunción de su onerosidad. Se lo regula como contrato real; la promesa aceptada y no cumplida de mutuo da lugar a una acción de daños.

§ 2. Tratándose de mutuo de dinero se permiten expresamente distintos pactos. No es que esta permisón fuera necesaria, dada la libertad en materia con-

tractual, pero se consideró conveniente incluirla porque razones históricas o de otro tipo podían crear duda en el intérprete.

§ 3. El pacto por el cual los intereses se convienen en una parte o porcentaje de las utilidades de un negocio o actividad tiene una compleja evolución histórica, y su encuadramiento como mutuo, como sociedad, o como alguna tercera categoría merece soluciones distintas en las legislaciones.

Se las puede tratar como sociedad cuando se considera que un socio puede participar en las utilidades y no en las pérdidas, como en el derecho justineano y hoy en el alemán y suizo.

Son un contrato de "co-interesamiento" en el Código Civil italiano.

Son préstamo o *partnership*, dependiendo del "control" que quien suministra el capital adquiera sobre la conducción de los negocios y otras circunstancias, en el derecho angloestadounidense.

La intención de la reforma no es declarar que estos acuerdos serán siempre un mutuo, sino que tales pactos no impiden automáticamente la calificación del contrato como tal.

Por otra parte, el nuevo régimen de sociedad quita al encuadramiento las graves consecuencias que tendrían si, por ejemplo, se hubiera establecido para éstas la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios.

§ 4. Otros de estos pactos se dirigen a la llamada "financiación de proyectos".

Así, la entrega de fondos para un proyecto determinado "sin recurso" del prestamista a dirigirse contra otros bienes del deudor.

En este segundo caso el prestamista está asumiendo alguna parte del riesgo del proyecto (de allí que a veces se diga que el préstamo es "al proyecto" y no al prestatario), lo que vuelve a poner en contacto moderno a la figura del mutuo con la de sociedad, motivo adicional para dar a ésta la regulación proyectada.

§ 5. Se admite el pacto por el cual el prestamista declara que su crédito estará postergado respecto de otros acreedores del deudor, incluyendo la totalidad de su pasivo quirografario.

Esta modalidad, conocida como "subordinación" del crédito, es de gran utilidad en una variedad de situaciones.

Una es permitir recomponer rápidamente las relaciones de endeudamiento (patrimonio neto versus pasivo) impuestas por regulaciones técnicas o cláusulas contractuales, dado que las obligaciones subordinadas respecto del pasivo quirografario pueden, bajo ciertas condiciones, reflejarse en el patrimonio neto del deudor, y no en su pasivo.

Su utilización por las sociedades podrá contribuir a aliviar la rigidez de nuestras regulaciones en materia de capital.

De otras fuentes de las obligaciones

§ 1. Se distingue entre obligaciones que resultan de una declaración unilateral de voluntad, de la gestión de negocios y del enriquecimiento sin causa.

De las obligaciones que resultan de una declaración unilateral de voluntad

§ 1. La apertura de esta categoría es necesaria para incorporar sistemáticamente al derecho privado los llamados "títulos valores".

§ 2. También se la requiere para dar soluciones apropiadas a las cartas de crédito, documentos que emiten los bancos y en los que asumen una obligación cuya eficacia vinculatoria antes de toda forma perceptible de aceptación produce gran dificultad a los intérpretes y a la teoría de los contratos. Esta dificultad estaba ya anticipada por la anterior disposición de Código Civil que establecía la exigibilidad de la fianza independientemente de su aceptación.

§ 3. La declaración unilateral de voluntad cubre adecuadamente, además, los casos de las llamadas "garantías a primer demanda" o a "primer requerimiento", por las que alguien, generalmente una compañía de seguros o de cauciones, garantiza el cumplimiento de las obligaciones de una de las partes de una relación contractual, y se compromete a pagar a la otra una suma de dinero sólo contra la manifestación escrita de ésta de que la primera ha incumplido sus obligaciones, sin perjuicio del derecho del garante, o del garantizado, de repetir si la manifestación era infundada o había causas de excusación.

Estas garantías tienen gran utilidad, principalmente en los contratos de construcción y en los de fabricación de equipos, en los que quien contrata la obra se encuentra, luego de celebrado el contrato y hecho pagos importantes, en situación de marcada debilidad negociadora frente al constructor, fabricante o proveedor.

§ 3. Se regula especialmente el caso de promesa hecha al público.

De los títulos valores

§ 1. La materia de los títulos valores ha sido regulada como un capítulo independiente ubicado dentro del título que se refiere a las obligaciones que nacen de una declaración unilateral de voluntad.

Se ha renunciado a toda norma de carácter determinativo o delimitativo. Si bien en nuestro país el concepto de título valor es resultado de la elaboración doctrinaria fundada en normas dictadas para cada especie, se ha evitado una definición apriorística por la imposibilidad de encerrar la esencia de estos títulos en forma precisa. Pero se han establecido sus caracteres típicos: la autonomía, la incorporación y la literalidad.

§ 2. Las reglas proyectadas han seguido, en líneas generales, las de las legislaciones modernas, y las conclusiones de la doctrina. Ello hace innecesario una explicación para cada solución.

§ 3. Puede destacarse en el ordenamiento propuesto las precisiones respecto de los documentos de legitimación o títulos impropios.

§ 4. Finalmente, y de acuerdo con los antecedentes específicos de la propia legislación argentina (por ejemplo, las acciones escriturales), se regula el fenómeno comúnmente llamado "desmaterialización de los títulos".

De la gestión de negocios

Las reglas sobre gestión de negocios consolidan las disposiciones anteriores del Código Civil.

Del enriquecimiento sin causa

Respecto del enriquecimiento sin causa, existe acumulada suficiente doctrina nacional y extranjera que explica la regla adoptada.

De las modificaciones al Libro Tercero

De la superficie

§ 1. Se incorpora el derecho real de superficie, precisamente en el texto que lo prohibía, como respuesta al reclamo de la doctrina, expresada tanto en simposios nacionales como internacionales, y de conformidad con los lineamientos extraídos del derecho comparado, con las naturales adecuaciones impuestas por la realidad argentina.

§ 2. Se distingue en el derecho real de superficie su manifestación a través del derecho de edificar, de la enajenación de construcciones ya existentes. Es que el derecho de edificar nace como derecho real sobre cosa ajena —el asiento de la construcción— y recién se convierte en derecho sobre la cosa propia cuando se realiza la construcción. En cambio, si se enajena una construcción separadamente del dominio sobre su asiento, ya inicialmente la superficie implica un derecho real sobre la cosa propia, o sea, la propiedad superficiaria. Se puede aplicar la superficie aun a construcciones realizadas dentro del régimen de la propiedad horizontal.

§ 3. La extensión del derecho de superficie más allá del asiento necesario para la construcción si fuese útil, propende a una mejor funcionalidad de la institución, según criterio captado en la legislación comparada, y paralelo al aceptado en el derecho nacional en materia expropiatoria (así, en el artículo 7 de la ley 21.449).

§ 4. Las diferencias entre el derecho real de edificar y la superficie aplicable a construcciones existentes, justifica que no coincidan las causales de adquisición y extinción, cuya regulación se ve facilitada en la propiedad superficiaria de una construcción ya existente por la remisión, como principio, a las normas del dominio revocable sobre cosas inmuebles. La prohibición de que el derecho de edificar sea objeto de gravámenes reales es coherente con el rechazo por el Código de la posibilidad de que existan derechos reales que recaigan sobre otros derechos reales.

§ 5. Si bien se admiten medios de extinción del derecho de superficie dependientes de la voluntad del superficiario, se tiende al cumplimiento de las prestaciones que comprometiera al no liberarlo de las obligaciones personales que asumiera frente al dueño. En el supuesto de la transmisión, el cumplimiento deberá ser afrontado por el nuevo superficiario, pues las obligaciones personales quedan comprendidas en la transferencia.

§ 6. El derecho de preferencia, reconocido tanto al dueño como al superficiario, fomenta la consolidación en un solo título del dominio y la superficie.

§ 7. El derecho real de edificar renace si se destruye la construcción, pero debe ejercerse dentro de los diez

años, solución coherente con su extinción por no uso en igual plazo, que admite la nueva disposición a la manera de otras análogas del código, que se mantienen (artículos 2.924, 2.969 y 3.059).

§ 8. La indemnización al superficiario por las obras que adquiera el dueño en oportunidad de la extinción, hasta la medida del enriquecimiento, está unida a elementales razones de equidad. Sin embargo, tanto esa previsión como otras indicadas en el texto, son supletorias de la voluntad de las partes, ya que puede pactarse lo contrario.

De otras modificaciones al Libro Tercero

§ 1. La sustitución del texto primitivo del artículo 2614 para incorporar la superficie, cristaliza también la exclusión de los censos o rentas, extraños a nuestra idiosincrasia, sin que pareciera justificado estimular su difusión con una regulación específica de ese derecho real.

§ 2. En el artículo que desechaba la propiedad horizontal, el artículo 2617, que había sido derogado por la ley 13.512, se incluyeron precisiones sobre el objeto de ese derecho real, con la finalidad de consagrar un adecuado respaldo normativo a aplicaciones muy difundidas pero no imaginadas cuando se sancionara la legislación vigente, y la posibilidad de que se sometan a su régimen expresiones modernas de la propiedad, como los clubes de campo, parques industriales, centros de compra, cementerios privados y organizaciones semejantes.

También se regula la responsabilidad de los consorcionistas por las deudas del consorcio, con lo cual se superan las dificultades nacidas de la orfandad legislativa.

§ 3. No ha estado ausente la preocupación por los aspectos ecológicos, tan unidos al bien común. Ello explica la admisión de que cualquier persona, aunque no sea vecino, pueda accionar antes las molestias que le ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares que exceden la normal tolerancia.

§ 4. La publicidad registral de los eventos resolutorios responde a la necesidad de resguardar a ciertos terceros, necesidad todavía mayor frente a las modificaciones efectuadas en materia de pactos en el contrato de compraventa.

§ 5. La previsión incluida entre los supuestos de condominio de división forzosa obedece al propósito de brindar un sustento legal básico a la llamada propiedad con titularidad temporal compartida, en una modalidad operativa adecuada, desvaneciéndose de ese modo uno de los principales obstáculos para su difusión en el derecho vivo, con la mira puesta en la tutela de los adquirentes.

§ 6. La supresión del artículo 4.022 explica que se recoja su temática en el ámbito del condominio de muros, cercos y fosos, esperándose que su concreta ubicación y nueva redacción concluyan las controversias sobre sus alcances que despertó la norma anterior.

§ 7. La referencia final agregado al artículo 2.768 deriva de su integración con el viejo texto del sustituido artículo 3.214.

De la prenda

§ 1. El título de la prenda, tal como se encontraba en el Código Civil, ha sido totalmente reformulado, y varias de las soluciones allí contenidas modificadas para adecuarlas a la intensa utilización de la figura como instrumento financiero en el ambiente de los negocios. Los puntos principales conciernen a la prenda de créditos derivados de contratos con prestaciones recíprocas en curso de ejecución, y al procedimiento para la ejecución de la garantía prendaria.

§ 2. El primer capítulo contiene disposiciones generales cuyo alcance, se estima, no requiere comentarios especiales salvo, quizás, el mantenimiento en la definición del requisito de entrega del documento al acreedor para la prenda de créditos. Como se verá más adelante, este requisito tiene solamente el valor de un acto externo que indique la intención de las partes de dejar constituido el gravamen, desde que no es necesario que el crédito prendado resulte directamente de dicho instrumento, o que se encuentre incorporado a él, ni que la posesión del instrumento tenga significación para el ejercicio de los derechos vinculados con el derecho prendado.

§ 3. El segundo capítulo se refiere a la prenda de cosas. Se elimina la llamada "prenda tácita", incompatible con la función moderna de la prenda.

En cuanto a la ejecución, el procedimiento que se establece es la previa comunicación fehaciente de la intención de ejecutar y de los detalles con que ello se hará, y el otorgamiento de un plazo de diez días para que el deudor interponga judicialmente las defensas que creyera tener.

§ 4. El tercero es el que se refiere a la prenda de créditos. Comienza estableciendo que todo crédito, aun los eventuales, pueden ser prendados. Reitera que la prenda requiere la entrega del documento del que el crédito resulte, o de su copia, el cual documento hace las veces de cosa por carácter representativo. Esta entrega está dirigida a mantener simetría con la prenda con desplazamiento de cosas, y a mantener, simbólicamente, el requerimiento de un acto cuya función formal es, en el caso, sólo indicar la voluntad de dejar constituido el gravamen.

Cuando el crédito es eventual, es claro que no puede resultar directamente del instrumento o de la copia entregada para simbolizar la constitución del gravamen. Expresamente se aclara que no es necesario que el derecho esté incorporado al instrumento, ni que éste o su copia sean necesarios para el ejercicio de los derechos vinculados con los créditos prendados.

§ 5. Estos aspectos son de interés en relación con una modalidad que tiene significativa importancia para el país: la utilización de la prenda de créditos para la financiación de contratos de obras o servicios.

En estos casos, quien toma a su cargo la realización de la obra obtiene financiación entregando en prenda sus derechos futuros a la percepción del precio o algunos otros ingresos derivados de ella. En razón de esta garantía sobre un crédito futuro el financista anticipa los fondos. Toda incertidumbre jurídica sobre el gravamen resulta en el requerimiento de garantías adicionales, un aumento de las tasas de interés o del costo total de la financiación como compensación por el riesgo legal y, en

casos más graves, la imposibilidad de obtener financiación y, en definitiva, de realizar la obra.

En estos casos el crédito está sujeto a la efectiva realización de los trabajos o las obras por quien obtiene la financiación. Estos créditos, además, resultan de un contrato bilateral, de un sinalagma con prestaciones recíprocas por las cuales los derechos y obligaciones de las partes están inextricablemente vinculados entre sí. En tal sentido puede decirse que la prenda afecta la situación contractual del deudor financiado.

De allí que, se dispone en el artículo 3.234, en estos supuestos la ejecución de la prenda en caso de incumplimiento se realiza sobre la participación del deudor en el contrato sobre cuyos créditos eventuales constituyó la prenda.

Es frecuente que la identidad de su otra parte no resulte indiferente para quien contrató la obra, y de allí que en la práctica se incluyan en los contratos ciertas restricciones a su cesión. Estas restricciones deben ser respetadas en el proceso de ejecución. Sin embargo, si la restricción consistiera en la específica aceptación del adquirente de la participación por quien encargó la obra, se aclara (no porque ello haya sido, en rigor, necesario) que el juez puede corregir cualquier ejercicio abusivo (que, en el caso, probablemente equivale a "irrazonable") de este derecho.

La posibilidad de ejecutar la prenda subsiste en caso de concurso o quiebra del constituyente, sin que su contenido pueda ser afectado por la decisión de cualquiera de las partes de la relación contractual de dar a ésta por concluida.

De las modificaciones al Libro Cuarto

De los privilegios

§ 1. La unificación de la legislación civil y comercial exigía unificar el régimen de los privilegios. Como bien advirtió Bibiloni, éstos son establecidos para el caso de insolvencia, que es justamente aquel en que los contenidos en el Código Civil dejaban de operar, y su unificación debería reducir su número y simplificar su funcionamiento.

§ 2. La unificación de los privilegios se realiza trasladando al Código Civil, en lo sustancial, los que se encontraban en la ley de concursos.

De la prescripción

§ 1. Se mantiene el método del código, que trata de manera unificada la prescripción adquisitiva y la liberatoria.

§ 2. Se ha dado precisión al concepto de *actio nata* y a las vicisitudes de la prescripción: suspensión, interrupción, liberación de la prescripción cumplida. En especial, se ajustó el funcionamiento de interrupción de la prescripción por requerimiento de pago.

Se adoptó el plazo quinquenal como ordinario tanto para la responsabilidad contractual como para la extracontractual, lo que coincide para esta última con el término adoptado por el Código Civil italiano.

Se limitaron y simplificaron grandemente los casos de prescripciones breves.

Se estableció un plazo de garantía decenal para los vicios redhibitorios, y otro veintenel para cualquier acción personal tendiente a despojar de efectos al acto. Se procura de este modo reforzar la seguridad jurídica y otorgar al transcurso del tiempo su aptitud para consolidar derechos, por lo que se libera a los que aparecen como sus titulares de toda pretensión que pudiera afectarlos pero que sólo se ejerce después de un largo plazo de inacción.

§ 3. Las modificaciones realizadas en cuanto a la prescripción adquisitiva de cosas inmuebles están enderezadas a que la posesión continua (ver nota de Vélez Sarsfield al artículo 2.481) durante el largo plazo de veinte años genere la adquisición del dominio para el poseedor, sin que pueda endilgársele siquiera la existencia de vicios en la posesión, lo que no es admisible en favor de dueños que durante lapso tan prolongado desatendieron sus inmuebles.

§ 4. Las precisiones relacionadas con la prescripción adquisitiva de cosas muebles aspiran a brindar las vías legales para el supuesto de no configurarse los requisitos de la prescripción de buena fe abreviada, pues entonces la posesión continua durante veinte años termina con las incertidumbres acerca del dominio de la cosa.

§ 5. Se contempló la necesidad de que el juez determine la fecha en que se consumó la prescripción adquisitiva, ya que las dubitaciones comprometen la situación jurídica de terceros en el interregno del plazo de la prescripción.

Modificaciones a la legislación complementaria

A — Las modificaciones a la ley 19.550

§ 1. Se indicó de manera general el alcance de las modificaciones introducidas.

§ 2. La definición de sociedad es adaptada a la posibilidad de que algunas de las sociedades reguladas en el capítulo II de esa ley sean constituidas o funcionen con un único socio.

§ 3. La cuestión de la "tipicidad", como intención fallida de constituir una sociedad de alguno de los tipos legislados en el capítulo II de la ley por haberse insertado cláusulas incompatibles con el tipo elegido, o por haberse omitido otras que eran necesarias, es resuelta de acuerdo con los principios comunes sobre adecuación o integración de los contratos.

§ 4. La absorción de las sociedades irregulares y de hecho por las reglas del contrato asociativo, conforme los antecedentes del derecho continental y del anglo-estadounidense, traerá mayor simplicidad al sistema y mejor adecuación de las soluciones.

§ 5. Removidas las sociedades accidentales y en participación del capítulo II de la ley, no hay inconvenientes en mantener la incapacidad de las sociedades por acciones para participar en otras sociedades legisladas en dicho capítulo II que no sean por acciones (artículo 30).

§ 6. La responsabilidad ilimitada y solidaria del socio oculto que establecía el segundo párrafo del artículo 34 continuaba una disposición del Código de Comercio que era contraria a lo que, de manera más moderna, disponía el Código Civil.

El mantenimiento de tal responsabilidad es incompatible con el actual sistema.

§ 7. La mayor parte de las disposiciones relativas a los estados contables fueron incorporadas con carácter general al Código Civil.

§ 8 Se permite la constitución por acto único de una sociedad anónima con un sólo fundador.

Una única persona física puede también constituir una sociedad de responsabilidad limitada.

En las sociedades de estos tipos la reducción a uno del número de socios no produce su disolución.

§ 9. Las referencias al carácter societario o no de las figuras definidas en los artículos 367 y 377 no son compatibles con las nuevas disposiciones.

Las modificaciones a la ley 19.551

La admisión de propuestas diferenciales para los acreedores quirografarios se ajusta a una difundida realidad. El juez, por otra parte, siempre podrá usar sus genéricas facultades cuando se le presenten situaciones manifiestamente inequitativas.

2

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO FAPPIANO

Los principios constitucionales de un nuevo Código Civil argentino

Por Arturo Enrique Sampay¹

Revolución y cambio de sentido de las instituciones jurídicas

Una revolución —dijimos ya desde aquí— es la sustitución de un sistema de conducta, de un *ethos* social, que perdió vigencia por sus resultados aniquiladores de la dignidad y perfección del hombre, por el *ethos* verdadero, que pone como fin del obrar humano, tanto personal como social, el bien señalado por Dios en la propia naturaleza del hombre. Por eso, para que haya una auténtica revolución, deben realizarse en obras las palabras dichas por Dante después de su encuentro con Beatriz, para indicar el nuevo sentido que adquiriría su vida, porque si la revolución es un cambio en la concepción de la vida, ese cambio aparece un nuevo modo de obrar, de trabajar, en fin, de vivir: *Incipit vita nova!*

Este nuevo sentido de la vida, que gana perduración con una pedagogía creadora de hábitos conformados por el nuevo *ethos*, se afianza en el presente mediante un nuevo código civil, esto es, mediante una legislación que rija las relaciones privadas, plasmadas, también, sobre los principios del nuevo sistema de conducta. Porque, bien aprehendido en su esencia, un código civil es el sistema de conducta que el Estado impone coercitivamente en las relaciones que traban los hombres y las asociaciones teniendo por objeto los bienes que el hombre necesita para vivir y el trabajo humano en cuanto produce esos bienes; asimismo, aquí se incluye el uso que, con relación al resto de los miembros de la comunidad, el poseedor hace de sus bienes. Legisla, además, sobre la organización de la familia, sobre el patrimonio familiar que la sustenta y sobre la transmisión de ese patrimonio a los sucesores familiares.

La concepción que se tenga del hombre y de su bien animará el contexto del código civil. Así, el sustrato filosófico del individualismo jurídico consistía en considerar la libertad como bien supremo, y al hom-

bre como un ser acabado en sí mismo, idealmente aislado en su egoísmo que le daba derechos sin obligaciones sociales, e igual, en abstracto, a todos sus prójimos; de ahí que todo el derecho privado se redujera a una técnica para garantizar el ejercicio ilimitado del derecho de propiedad y de la llamada autonomía de la voluntad para celebrar contratos, para cuya justicia y legitimidad moral bastaba el hecho de que no fuera un niño o un loco quien prestara el consentimiento. Esta libertad contractual, atribuida a pares de hombres a los que se concebía tan idénticos entre sí como un individuo y su imagen reflejada en un espejo, y la correspondiente interdicción del Estado para intervenir en las relaciones privadas, pondría en movimiento una armonía natural preestablecida, y de ella surgiría, sin más, una sociedad justa. Se ignoraba, por tanto, al hombre real, vale decir, no sólo al obrero y al labriego aislados que, por su debilidad, están sometidos al empresario, al patrón o al terrateniente, sino también a quienquiera fuera explotado por otro en virtud de una superioridad de cualquier índole. En esto radicó la utopía liberal de los siglos XVIII y XIX, que engendró la realidad del capitalismo, o sea, la explotación de la mayor parte de los hombres por unos pocos económicamente prepotentes. Por eso, quienes hoy defienden estos principios no lo hacen ya con la credulidad ingenua de los enciclopedistas y fisiócratas de tiempos pasados, sino que, como están a la vista los indicios frutos de esa fantasía, sólo defienden los intereses crecidos a su sombra.

Concepción liberalburguesa del código civil vigente y del proyecto de reforma de 1936.

El código civil argentino que nos rige se inspiró, precisamente, en esa concepción, y de ese modo dio vigencia efectiva a las ideas liberalburguesas de la Constitución de 1853. No podía menos de ocurrir así, pues, aparte de que, desde el punto de vista jurídico, el código civil debe someterse a la Constitución, reglamentando los derechos y declaraciones que ella enuncia, fue redactado en el clima ideológico del código de Napoleón, que animó en los principios económicos y políticojurídicos de la Revolución Francesa, y es difícil dejar de aspirar errores cuando ellos constituyen la atmósfera histórica de una época.

¹ Artículo publicado en la edición del diario "La Prensa", del 24 de febrero de 1952.

También el proyecto de reforma del código civil de 1936, que el Congreso tiene a consideración, consagra las mismas ideas rectoras; únicamente contiene modificaciones en la técnica de algunos institutos jurídicos, y concesiones casi imperceptibles a las exigencias sociales de nuestro tiempo, las que de inmediato fueron tachadas como violatorias de la libertad de contrato y del derecho absoluto de propiedad garantizados por la Constitución de 1853.

Se explica que así fuera; en primer término, porque debía ajustarse a la Constitución vigente, y después, porque se lo confeccionó sobre el anteproyecto de Juan Antonio Bibiloni, quien volcó en él, junto con su innegable saber técnicojurídico, la ortodoxia de su credo liberal.

Bibiloni fue un político del liberalismo argentino. Cuando joven, en los pródromos de la revolución de 1890, fue el orador del célebre “banquete de los incondicionales”, que ofreció a Juárez Celman la adhesión de la juventud dorada de Buenos Aires, provocando la reacción de los universitarios salidos de la clase media argentina, que crearon entonces la Unión Cívica de la Juventud. Fue también diputado del Congreso y ministro de Justicia de la Nación. Cuando la política argentina se airó con las auras populares traídas por la ley Sáenz Peña, y el rumbo gubernativo cambió por el advenimiento de Yrigoyen al poder, debido a su ideario de defensa del pueblo y a su antiliberalismo —la demofilia le venía de su tradicionalismo federal, y su romanticismo krausista le hacía reconocer la preeminencia del bien social sobre el individual—, Bibiloni, que ya no pertenecía a la Facultad de Derecho de Buenos Aires, aunque en ella las cátedras de Derecho Civil estaban ocupadas por sus discípulos, era miembro de la Academia de Derecho, a la que representaría después en la Comisión Reformadora del Código Civil. Ambas instituciones, que en la era liberal constituyeron un “poder gobernante”, al irrumpir las masas en la vida política argentina requiriendo soluciones a los problemas vitales que les creaba la injusticia capitalista, se convirtieron, porque sus miembros estaban anquilosados en el individualismo jurídico del código de Napoleón, en los reductos de la resistencia a la “democratización del derecho civil”, o “proletarización del derecho civil”, como los juristas Georges Ripert y René Savatier llaman, respectivamente, a la nueva legislación privada que intenta corregir los efectos dañinos de la desigualdad social de los sectores más desheredados y numerosos de la población, mediante una desigualdad de tratamiento en su favor.

El proyecto de reforma trasuntaba el pensar del claustro de dicha facultad y de la Academia Argentina de Derecho y, por eso, no atendía a la realidad social argentina. Por el contrario, tomó como modelos el código civil alemán y el código civil suizo, que constituían la confirmación del derecho civil burgués, no obstante que el primero, antes de su sanción, fue atacado desde dos frentes: por el gran jurista alemán Otto von Gierke, situado en la posición antiindividualista del tradicionalismo germánico, y por Anton Menger, que denunció el abandono en que se dejaba a la clase obrera en ese proyecto.

Si se exceptúa el derecho de familia, el eje de un código civil está constituido por la idea que adopte acerca de la propiedad privada, puesto que todas las instituciones adquieren sentido de acuerdo con esa concepción. El artículo 2.384 del anteproyecto de Bibiloni establecía al respecto: “Es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, de disponer o de servirse de ella, de usarla y gozarla, según la voluntad del propietario”. Y añadía la misma afirmación que Vélez Sarsfield hiciera en el artículo 2.513: “*El puede desnaturalizarla, degradarla o destruirla*”.

La comisión que estudió el anteproyecto de Bibiloni suprimió la frase en cursiva, por ser un comentario enfático a la concepción del derecho de propiedad que se consagraba. En efecto, el comentario resultaba superfluo, pero expresaba bien el alcance del criterio que se adoptaba.

En cuanto a los derechos subjetivos, Bibiloni establecía en el artículo 411 que “pueden ser ejercidos en la extensión de sus límites legales, aunque de ello resulte perjuicio a tercero”. Obsérvese que “tercero”, con relación al ejercicio de un derecho individual, es también la “comunidad”.

La comisión suprimió este aserto, pero rechazó la justa proposición de uno de sus miembros, que sugería reemplazar la fórmula final de Bibiloni, o sea, “aunque con su ejercicio perjudique a terceros”, por esta otra: “siempre que su ejercicio condiga con el fin social del derecho”. De esta manera, los derechos individuales, que en el código civil son siempre los de propiedad, de riqueza, de capital, quedaban, en su ejercicio, incondicionados por cualquier consideración de bien social.

El capítulo del anteproyecto de Bibiloni que se refiere al trabajo, y que la comisión dejó incólume, está inspirado en el individualismo a ultranza de los “victorianos” ingleses, en el dogma liberal de la “libre dejación”, y en la aceptación de que el salario debe fijarse en el mercado de la oferta y la demanda. Más aún, adoptando la opinión de los capitalistas británicos recogida por André Siegfried en su libro *La crise britannique au XXe. siècle*, que él mismo cita, Bibiloni sostiene que la intervención de los sindicatos y del Estado en la fijación de los salarios y de condiciones dignas de trabajo, es la causa de la crisis del mundo. “La omnipotencia del número —dice— justifica toda intervención del Estado dominado por el número. Y las leyes se suceden sin cesar. Leyes de intervención en los salarios, en los pagos, en los contratos, creación de jurisdicciones administrativas especiales, de sindicatos dependientes e independientes del gobierno, pero siempre omnipotentes, que paralizan los servicios públicos, los ferrocarriles, los puertos, la navegación interior y exterior, las comunicaciones postales, que en Italia resuelven la ocupación de las fábricas y los campos, para quedar mudos bajo la pesada mano del gobierno desde su ley de abril de 1926. Leyes que crean institutos y magistraturas administrativas, y las modifican apenas sancionadas, que se codifican y se reforman pocos meses después. Y esto no solamente en Francia y en Italia, sino también en Inglaterra, casi puede decirse, día por día. Esa inquietud legislativa, introduce reformas, sin mayor estudio, sin convicción, que las mismas fuerzas accidentales que las impulsieron obligan a alterar. Hoy se

crean cajas que deben alimentar los patronos con tantos peniques por semana; mañana, deben triplicar esa subvención por la misma ley que meses antes introducía el organismo con bases distintas. Los *trade unions*, fijan tales salarios. Se produce la paralización de las fábricas y de las minas que no pueden abonarlos. Los *trade unions* se oponen a la reducción. Las fábricas se cierran o se pierden los mercados por la imposibilidad de competir. El Estado paga su salario a los desocupados y aumenta el impuesto para hacerlo. La nación sufre, pero los *trade unions* no cejan. El Estado omnipotente no ha acertado en sus soluciones. La industria nacional se arruina en todas partes. La intervención soñada y obtenida (sin necesidad de justificaciones... académicas) ha resultado una utopía, y lo que crea es la dictadura impotente. La crisis mundial lo demuestra". O sea, el Estado no debía actuar ante las exigencias vitales de las masas obreras, porque, en opinión de Babiloni, el hambre y la explotación de los más no justifica la intervención del Estado, naturalmente instituido para promover el bien común de sus integrantes. La justificación de tal intervención debía venir de las academias, y según Babiloni —que era académico y confeccionaba un código en representación de una academia—, todo se solucionaría aceptando la doctrina de los recalitrantes capitalistas ingleses, quienes afirmaban que el retorno a la libre competencia y la supresión de los sindicatos —de ahí que el anteproyecto no legisle sobre contratos colectivos de trabajo— permitiría superar la crisis del imperio británico, porque entonces las huelgas no disminuirían la producción, los sueldos de hambre no encarecerían las manufacturas y los productos ingleses podrían seguir compitiendo en el mercado internacional, con lo que el imperio recobraría su esplendor victoriano. ¡Esta es la concepción política que informa el proyecto de reforma en la parte referente al trabajo!

Concepción política que informa la reforma constitucional de 1949 en lo atinente a las relaciones privadas

El ideario de la revolución nacional, que informó la reforma de la Constitución, concibe al hombre como "ser social" por naturaleza y, consiguientemente, considera que su bien temporal está en el bien de las comunidades naturales que integra y con las que se completa, a saber: la familia, el estamento profesional y el Estado, al punto que, si no se logra el respectivo bien de estos todos, no es posible obtener el bien de los individuos que son sus partes.

Por eso, la Constitución reconoce que el fin del derecho positivo es la consecución del bien común del pueblo argentino, y expresamente otorga a ese bien común la primacía sobre el bien particular en la actividad privada. Cabe aclarar que el bien común, o común felicidad temporal, es la perfecta suficiencia de vida, adecuadamente subordinada al fin trascendente del hombre, que todo miembro de la comunidad debe gozar en la proporción requerida por la naturaleza humana. Es a causa de ello que la Constitución no da supremacía a lo económico en la prosecución del bien común, sino al revés, ya que en la Declaración de los Derechos del Trabajador reconoce "la preeminencia de los valores

del espíritu", y en todo un capítulo dedicado a los derechos de la educación y la cultura garantiza a los miembros de la colectividad los medios para recibir la instrucción que da al espíritu la posesión de la verdad, y la educación que habitúa la voluntad a la práctica de las virtudes personales, familiares y cívicas. Pero también garantiza al individuo los instrumentos necesarios para lograr esos bienes espirituales, esto es, una cierta abundancia de bienes materiales, porque, como dice Santo Tomás, "para la felicidad que puede tenerse en esta vida se requieren bienes exteriores, no como esenciales a la misma felicidad, sino como instrumentos ordenados a ella, porque la felicidad consiste en el ejercicio de la virtud".

De aquí que la Constitución establezca que quien ejerce una profesión u oficio, así como quien explota una propiedad privada, cumple con su obrar personal una función social, con lo que se significa que el trabajo, los negocios y la propiedad, además de servir para satisfacer las necesidades personales y familiares, deben servir al logro del bien común de los argentinos, y que ningún derecho individual referido a bienes materiales puede ser ejercido dando preeminencia al interés privado sobre el bien social.

Instituciones civiles que establece la Constitución

Apuntemos, muy ceñidamente, las instituciones civiles instauradas por la Constitución de 1949, y que deben conformar el nuevo Código Civil argentino.

En primer término, el Código Civil debe fijar la clave hermenéutica para su interpretación y aplicación. Porque si la Constitución establece que al fin del obrar social del hombre debe ser el bien común, las leyes que reglan las relaciones y los negocios interpersonales deben explicarse atendiendo a los propósitos sociales que buscan y a las exigencias del bien común. Así lo establece el artículo 5º del Código Civil brasileño.

La Constitución reconoce a los sindicatos la calidad de organismos naturales para la defensa de los intereses profesionales, y como también los considera factores concurrentes a la producción, viene a otorgarles facultades para ajustar las condiciones de trabajo así como para intervenir en la autorregulación de la producción. El código civil, pues, debe considerar como fuentes de derecho, al igual que las leyes y reglamentos sancionados por el poder público, las normas sindicales emanadas de los acuerdos económicos colectivos y de los contratos colectivos de trabajo. La formación, objeto y eficacia de las normas sindicales deben ser fijados por el código civil cuando legisla sobre los convenios económicos colectivos y los contratos colectivos de trabajo, como lo ha hecho el modernísimo código civil italiano.

El principio básico del nuevo código debe ser el precepto constitucional que establece, de modo genérico, que "la propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común". Este principio es reiterado por la Constitución, que especifica: 1º), la función social del campo, que debe ser "utilizado con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad"; 2º), la función

social del capital, "que debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social", y 3º), la función social de las empresas que organizan y explotan la riqueza, las que deben tener "por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social".

En consecuencia, al código civil corresponde reglamentar las obligaciones que la Constitución impone con motivo de la función social que han de cumplir el campo, el capital y las empresas comerciales e industriales organizadas para la producción o el intercambio de bienes o de servicios y que consiste en ejercer ese derecho de propiedad subordinándolo a la disciplina de la producción nacional. Este es el modo preceptuado por la Constitución para que la propiedad privada cumpla su función social en provecho del bien común de los argentinos.

La Constitución establece la limitación de los derechos personales que consagra, pues considera ilícitos "los abusos de esos derechos, que perjudiquen a la comunidad o que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre". En la primera parte de este precepto, desecha de modo franco las llamadas teorías subjetivas del abuso de derecho que, por estar inspiradas en el individualismo, sólo reputan tal el ejercicio de un derecho con el ánimo exclusivo de perjudicar a un tercero sin recibir de ello ningún beneficio, y establece, en cambio, el criterio objetivo de que no es lícito dañar a la comunidad haciendo jugar el derecho subjetivo en contra del fin social para el que es reconocido. Coincide, por tanto, con la teoría tempranamente enunciada por Raymond Saleilles, a saber, que "el abuso de derecho está en el ejercicio anormal del derecho, contrario al destino económico o social del derecho subjetivo", de quien la tomó el código civil ruso de 1923 en su artículo 1º, cuando dice: "Los derechos civiles están protegidos por la ley, salvo en los casos en que ellos son ejercidos en un sentido contrario a su destino económico y social". La segunda parte del precepto constitucional comprende, como especie del abuso de derecho, la clásica institución de la *lesión*, ampliada con el concepto de *explotación* del hombre por el hombre, con lo que se declara la ilicitud de todo acto jurídico mediante el cual alguien, aprovechándose de la necesidad, ligereza o inexperiencia de otro, se haga prometer o dar por él o por un tercero, a cambio de una prestación, ventajas patrimoniales que la exceden en valor, de tal modo que, según las circunstancias, estas ventajas estén en manifiesta desproporción con la prestación dada. Esta institución tan justa y de vieja filiación cristiana, legislada en el código civil alemán, fue agregada por la comisión reformadora del código al anteproyecto de Biliboni. Semejante disposición, que en ese momento desató críticas enérgicas porque violaba la Constitución de 1853, es exigida ahora por la Constitución de 1949.

En el artículo 40, la Constitución ratifica este instituto cuando prohíbe los beneficios usurarios en la actividad económica privada. El concepto que adopta es el de *usura real*, que incluye la explotación practicada en el contrato de mutuo por el cobro de un interés excesivo, pero que abarca también toda convención

sinalagmática donde se viole de manera notable el justo precio de una venta de bienes o prestación de servicios. Estas disposiciones constitucionales deben transformar radicalmente el derecho de las obligaciones en el nuevo código civil argentino.

La Declaración de los Derechos del Trabajador, incorporada a la Constitución, tutela el trabajo en todas sus formas, sea intelectual, técnico o manual, y el código civil debe considerarlo no como objeto de relaciones económicas, sino como "el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad". Debe establecer la obligación patronal de pagar una "retribución justa", que "satisfaga las necesidades vitales" del obrero o empleado. Debe fijar la obligación de otorgar vacaciones pagadas y todos los demás derechos obreros reconocidos por la Constitución. Debe, en fin, legislar sobre el contrato colectivo de trabajo y sobre los efectos subordinantes que éste tiene respecto a los contratos individuales de trabajo. La organización de las categorías profesionales y la previsión social —materias ambas de derecho público sindical— deben ser legisladas en el código de derecho social.

El individualismo de la Revolución Francesa expresó en la Constitución de 1791: "La ley no considera al matrimonio sino como un contrato civil". La Constitución argentina de 1949 restablece el orden natural cuando dice: "La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será objeto de preferente atención en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines". Establece, además, que protege el matrimonio y garantiza la organización jerárquica paterna, si bien reconoce la igualdad jurídica de los cónyuges para el caso de que la mujer asuma el manejo de los bienes propios y de los que son producto de su trabajo. Igualmente, abona la indisolubilidad de la familia, que está en la esencia de esta comunidad natural, con la instauración de la unidad económica familiar y del bien de familia, en cumplimiento de lo cual el nuevo código civil deberá restablecer la indivisión forzosa e instituir la inembargabilidad de los bienes afectados al sostén y educación de la familia, sean estos casas-habitación, talleres de artesanías o campos cultivados, si así lo deciden los padres y los anotan en un registro público, hasta que haya alcanzado su mayoría de edad el menor de los hijos. Tal es lo establecido en el código civil italiano y en el admirable proyecto sobre las comunidades de familia preparado en 1942 por el Comité de Estudios Legislativos del centro nacional francés del movimiento familiar.

La Constitución preceptúa "procurar a cada familia labriega la propiedad de la tierra que cultiva", lo cual obligará al código civil a crear una preferencia en favor del arrendatario o de su familia para la compra, por un precio justo, del campo que trabaja si el propietario decide venderlo, y también un derecho de prelación a favor de la familia para renovar el contrato de arrendamiento a la muerte de su titular. El código deberá legislar sobre el patrimonio de las familias obreras, constituido principalmente por los salarios y sobresalarios familiares, y habrá de establecer la exclusiva afectación de estos últimos a la crianza de los hijos, a quienes podrá nombrarse tutor para el manejo de esos recursos si se

comprueba que los padres desvirtúan el fin de dicho sobresalario familiar.

Los Derechos de la Ancianidad, consagrados por la Constitución, aparejarán una honda transformación en el derecho de pensión alimentaria de los ancianos. Según el código civil actual, los parientes tienen la obligación alimentaria de los ancianos; pero, para el caso de que no estuvieran en condiciones de mantenerlos —como ocurre en las familias proletarias— la Constitución convierte al Estado en deudor de la pensión alimentaria de los ancianos. Esta justa solución debe ser acogida en el nuevo código civil, donde han de legislarse las acciones sumarias para hacer efectivo el derecho alimentario que los ancianos tienen frente al propio Estado, cuando él viene a suplir la obligación de los parientes.

Resulta evidente, entonces, que en la parte dogmática de la Constitución Nacional de 1949, donde se recoge la doctrina revolucionaria del general Perón, están dados los principios para que superemos la égida individualista del código de Napoleón. Aprovechando, pues, los trabajos tendientes a la reforma civil cumplidos en el país durante este último cuarto de siglo, especialmente en lo relativo a los institutos técnicojurídicos formalizadores de los actos jurídicos —que receptan una larga experiencia—, insuflando en algunos institutos jurídicos sustantivos el nuevo espíritu de la revolución, e instaurando otros *ex novo*, se estará en situación de realizar la magna obra de un nuevo código civil.

Y entonces la Constitución Nacional tendrá vigencia efectiva.

3

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SORIA ARCH

Resolución del administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad

Buenos Aires, 3 de junio de 1987.

Visto la política de descentralización encarada por el gobierno nacional; y

CONSIDERANDO:

Que en el contexto general de dicha política se halla la iniciativa de trasladar la sede central de esta Dirección Nacional de Vialidad a la provincia de La Pampa;

Que con el propósito de sopesar consecuentemente todos y cada uno de los aspectos a tener en cuenta en la decisión final a adoptar en la oportunidad, resulta necesario llevar a cabo los estudios pertinentes que deben ser iniciados de inmediato;

Que a ese efecto cabe disponer la afectación de los funcionarios que tendrán a su cargo en forma exclusiva dicha tarea, con la concurrencia de otras dependencias del organismo;

Que siendo así corresponde proceder a integrar la comisión especial que deberá tener su asiento permanente en la citada provincia;

Que a fin de ordenar los objetivos y métodos y obtener resultados concretos en un lapso prudencial, resulta también necesario fijar un esquema de trabajo y el cumplimiento de plazos preestablecidos.

Por ello,

El administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad

RESUELVE:

Artículo 1º — Créase una comisión especial, la cual se identificará con el número de la presente, que tendrá por objeto el estudio del proyecto de traslado de la sede central de esta Dirección Nacional de Vialidad a la provincia de La Pampa.

Art. 2º — La comisión especial creada por la presente dependerá directamente de esta administración general y tendrá su sede en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. El personal que oportunamente se designará para integrarla será trasladado en forma definitiva al distrito 21 - La Pampa, a fin de constituir

una delegación de casa central en La Pampa y preparar las condiciones del futuro traslado del resto del personal necesario, si del estudio encomendado surgiera la necesidad de efectivizar el traslado propuesto de las dependencias de esta casa central.

Art. 3º — El estudio encomendado seguirá, en líneas generales, el esquema que, como Anexo I forma parte integrante de la presente y cuyos puntos constituirán los aspectos que, como mínimo, deberán ser considerados.

Art. 4º — Las distintas dependencias que integran la Dirección Nacional de Vialidad deberán brindar el asesoramiento y/o producir la información que les sea requerida, a cuyo fin se faculta a la comisión especial creada por la presente a dirigirse directamente a las direcciones generales y demás unidades dependientes directamente de esta administración general.

Art. 5º — La comisión hará las gestiones necesarias para instalar en sede del 21er. Distrito (La Pampa) una terminal de computación conectada, por red de comunicaciones con el equipo de computación de casa central, a los efectos de requerir las informaciones que le sean necesarias.

Art. 6º — Si la comisión especial considerara necesaria la colaboración transitoria de algún técnico, para algún tema en especial, deberá solicitarlo a la dependencia específica, quien propondrá a esta administración general su designación en comisión, por el lapso que estime menester y compatible con sus obligaciones permanentes.

Art. 7º — El apoyo administrativo que requiera la comisión especial le será brindado por el 21er. Distrito.

Art. 8º — La comisión especial deberá producir informes de avance cada tres meses, a partir de la fecha de su constitución en la ciudad de Santa Rosa, que deberá elevar al Consejo Técnico de la repartición y tendrá un plazo máximo para finalizar su tarea de veinticuatro meses.

Art. 9º — Tómese razón y por secretaría general comuníquese a todas las dependencias involucradas.

Resolución Nº 01563/87.

SAÚL P. MARTÍNEZ.
Administrador general
Dirección Nacional de Vialidad

ANEXO I

CAPÍTULO PRELIMINAR

(A cumplimentar dentro de los 60 días de constituida la comisión)

1. *Proyecto de reglamento.*
2. *Metodología y cronograma.*
3. *Compilación de antecedentes*
- 3.1. Estudios preexistentes sobre traslado de la sede central de la Dirección Nacional de Vialidad.
- 3.2. Estudios sobre la elección de la provincia de La Pampa.

CAPÍTULO I

Situación actual de la Dirección Nacional de Vialidad

4. *Distribución geográfica*
- 4.1. Localización de sus recursos (por provincia, dividido en capital e interior y ciudad de Buenos Aires).
- 4.1.1. Humanos (número de agentes y australes en sueldos).
- 4.1.2. Físicos.
- 4.1.2.1. Inmuebles (en metros cuadrados o kilómetros y australes: caminos, terrenos, edificios generales y viviendas).
- 4.1.2.2. Muebles y equipos.
- 4.1.3. Financieros (últimos cinco años).
- 4.1.4. Instituciones. Descentralización de facultades.
5. *Relaciones y comunicaciones*
- 5.1. De c/dependencia con organismos externos (organismo y frecuencia, actuaciones recibidas y remitidas, notas, trámites personales, comunicaciones telefónicas, otras).
- 5.2. De c/dependencia con distritos y regiones.
- 5.3. De c/dependencia con sector privado (actuaciones recibidas, suministros, servicios, etcétera).

CAPÍTULO II

Requerimientos de la organización trasladable

6. *Edificios e instalaciones*
- 6.1. Oficiales.
- 6.1.1. Sectores comunes (oficinas, instalaciones sanitarias, etcétera).
- 6.1.2. Sectores especiales (S.C.D., comunicaciones, talleres, laboratorios, servicio médico, etcétera)
- 6.2. Particulares.
- 6.2.1. Vivienda personal - equipamiento.
7. *Personas afectadas*
- 7.1. Personal.
- 7.1.1. Clasificación etaria.
- 7.1.2. Situación de revista.
- 7.2. Familiares.

- 7.2.1. Composición grupo familiar (número, edad, sexo, parentesco).
- 7.2.2. Ocupación de los distintos miembros.
8. *Infraestructura demandada*
- 8.1. Para el organismo.
- 8.1.1. Edificio y equipamiento inicial.
- 8.1.2. Aproveccionamiento de bienes y servicios para operar.
- 8.2. Para el personal y familia.
- 8.2.1. Viviendas e instalaciones.
- 8.2.2. Educación.
- 8.2.3. Salud.
- 8.2.4. Recreación.
- 8.2.5. Aproveccionamiento.

CAPÍTULO III

De la nueva localización

9. *Recursos disponibles en nueva sede.*
- 9.1. De la Dirección Nacional de Vialidad.
- 9.1.1. Recursos físicos (inmuebles y muebles).
- 9.1.2. Recursos humanos (dotación distrito).
- 9.2. De la comunidad.
- 9.2.1. Recursos físicos (inmuebles disponibles de otras instituciones públicas o privadas).
- 9.2.2. Recursos humanos (oferta mano de obra).
- 9.2.3. Recursos científicos y técnicos (universidades, instituciones especializadas y otras).
- 9.2.4. Servicios.
10. *Transporte y comunicaciones en nueva sede*
- 10.1. De y hacia otros organismos oficiales vinculados.
- 10.2. De y hacia los demás distritos.
11. *Costo de traslado.*
- 11.1. Para el organismo.
- 11.1.1. Edificio sede.
- 11.1.2. Instalaciones y equipos.
- 11.1.3. Mudanza.
- 11.2. Para movilización del personal.
- 11.2.1. Viviendas.
- 11.2.2. Infraestructura y equipamiento.
- 11.2.3. Indemnizaciones por traslado.
- 11.2.4. Costo de vida.
- 11.3. Variación de gastos de funcionamiento por relocalización.
- 11.4. Utilización de la infraestructura desafectada.
12. *Distribución geográfica futura*
- 12.1. Localización de sus recursos (por provincias, dividido en capital, interior y ciudad de Buenos Aires).
- 12.1.1. Humanos (número de agentes y australes en sueldos).
- 12.1.2. Físicos.
- 12.1.2.1. Inmuebles (en metros cuadrados, o kilómetros, y australes: caminos, terrenos, edificios generales y viviendas).

- 12.1.2.2. Muebles y equipos.
- 12.1.3. Financieros (proyección cinco años).
- 12.1.4. Institucionales. Descentralización de facultades
- 13. Aspectos jurídicos involucrados
- 13.1. Ley orgánica.
- 13.1.1. Sede legal.
- 13.1.2. Organismo central.
- 13.1.3. Dependencias periféricas.
- 13.2. Otras disposiciones.

CAPÍTULO IV

Resultados

- 14. *Impacto de la relocalización*
- 14.1. Comparación puntos 1 y 9.
- 14.2. Incidencia en la comunidad.
- 15. *Conclusiones.*

SACI P. MARTÍNEZ.
Administrador general.
Dirección Nacional de Vialidad.